

90



¡ VIVA EL 1º DE MAYO !
DIA INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD
DE LOS TRABAJADORES

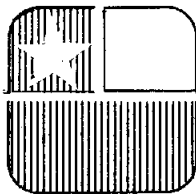
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE

BOLETIN DEL EXTERIOR



PARTIDO COMUNISTA DE CHILE

BOLETIN DEL EXTERIOR



Nº 90

Mayo - Junio 1988

Págs.

LUIS CORVALAN: *Sobre el plebiscito*

2

EDITORIAL.

*1º de Mayo en medio de la agudización de los
conflictos sociales y políticos*

12

SALVADOR ALLENDE: *A 80 años de su natalicio*

15

LUCHA ANTIFACISTA

JOSE MIGUEL VARAS: *La voz de Moscú*

16

ORLANDO MILLAS: *Nuestra lucha y la nueva mentalidad*

19

DEL PAIS

El rol protagónico del pueblo. Declaración del Partido

24

Hacia una nueva Central Sindical Unitaria

30

Carta abierta a "El Mercurio"

53

AUGUSTO SAMANIEGO M.: *Respuesta a Sergio Muñoz*

58

ECONOMICO

HUGO FAZIO: *"Resumen económico primer trimestre 1988"*

62

MILITAR

ESTEBAN ORTEGA DAVILA: *Política militar norteamericana
respecto de nuestro país*

92

Sobre el plebiscito

Luis Corvalán

No es del todo seguro pero sí es lo más probable que se imponga el plebiscito. De efectuarse éste, ¿qué posibilidades ~~dece~~ para propinarle una derrota política a Pinochet y favorecer con ello el término de la dictadura? Una respuesta a este interrogante la adelantamos en nuestra Declaración de febrero. Dijimos entonces: "la derrota de la tiranía sólo puede y debe lograrse a través de una intensa movilización de masas. Si el plebiscito se realiza en medio de una decidida lucha contra el régimen, en todos los frentes y en los más diversos terrenos, podría transformarse en una coyuntura favorable al pueblo. El Partido Comunista llama desde hoy a organizar estas luchas, a respaldar los movimientos sociales en perspectiva para el mes de marzo, a crear las condiciones para que el plebiscito, cualquiera sea su resultado, pueda ser detonante de un levantamiento popular que conduzca al derribamiento de la tiranía."

Alguna gente se empeña en desfigurar nuestra política, presentándonos como si hubiésemos adoptado una posición definitiva en el sentido de no participar en el plebiscito y de hacerle la guerra a los que ya se han pronunciado por el "NO". Decididamente esto no es así. Lo cierto es que hemos sostenido y sostenemos que mejor habría sido y es todavía que toda la oposición rechace el plebiscito y exija - hasta conseguir las - elecciones libres y competitivas y no nos hemos sumado a quienes han resuelto embarcarse en

el plebiscito con la bandera del "NO" porque, como además dijimos en la precitada declaración de febrero, "la lucha es y debe ser el generador principal del cambio que se requiere". "Con este criterio", agregamos entonces, "esforzándonos porque los acontecimientos tomen el rumbo de la confrontación con la tiranía, los comunistas tomamos e iremos tomando, frente a cada situación concreta, incluido el plebiscito, las decisiones más favorables a los intereses del pueblo".

En las condiciones que se dan en estos momentos el plebiscito surge como un gran fraude, que arranca de la propia Constitución al establecer ésta, en su Art.8, la proscripción de partidos políticos representativos de una parte considerable del pueblo. El fraude está en marcha. Es una gigantesca operación que incluye el uso y abuso de recursos públicos, sobornos, ofertas, presiones y amenazas, la descarada intervención de las autoridades, la utilización escandalosa de todo el aparato del Estado, la transformación de los municipios en activas secretarías políticas al servicio del oficialismo, la participación abierta de altos oficiales del Ejército en favor de Pinochet, los allanamientos, las detenciones, los secuestros y otras formas de represión política.

Lo concreto es que la dictadura sigue imponiendo sus reglas. En los primeros días de marzo renovó el estado de emergencia y el estado de peligro, de perturbación de la paz interior, que le permiten prohibir las reuniones públicas y detener, incomunicar, relegar y exiliar ciudadanos a su entera voluntad. En Santiago, Valparaíso y otras ciudades reprimió brutalmente las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer. Mantiene centenares de presos políticos, periodistas sometidos a procesos o condenados a prisión. Permanece encarcelado el Secretario General del Partido Socialista y Presidente de la Izquierda Unida Clodomiro Almeyda. Continúa el exilio. El más importante medio de comunicación de masas, la televisión, sigue bajo el control de la tiranía. No sólo el canal estatal sino también los canales universitarios son activos y cotidianos propagandistas del dictador cuyos movimientos y giras electorales cubren profusamente. Hoy por hoy no existen condiciones para que se pueda reflejar en las urnas la voluntad popular ni menos para que sea

respetada en un hipotético triunfo del "NO."

El voto que se emita en la cámara secreta no será un voto libremente expresado en el caso de cientos de miles de personas que se hallan bajo la directa presión de todo un sistema de coacción montado exprofeso por la dictadura. Hay muchos que temen que su voto esté ya controlado o que se lo controlen el día del plebiscito. Y habrá un gran número de chilenos que son contrarios a la tiranía y que no podrán votar por no haberse inscrito ,principalmente a causa del gasto que impone sacar nuevo carnet.

Un sector de la oposición de centro-derecha también quiere confundir al pueblo, tratando de colocar como lo central de hoy la cuestión de pronunciarse por el "NO" en un plebiscito al que todavía ni siquiera se ha convocado y en relación al cual se pueden considerar varias tomas de posición, no sólo participar en él, sino descalificarlo y promover la abstención o el boicot . Para nosotros lo central y lo primero es la unidad y la lucha de todas las fuerzas democráticas, terminar con la dictadura ahora. En cambio, la Democracia Cristiana y una parte de sus aliados se oponen a la lucha abierta contra la dictadura y a la acción conjunta de toda la oposición, le temen al pueblo cuando éste se transforma en el protagonista principal, rechazan de hecho la movilización social o la limitan a una campaña por el "NO" de carácter meramente electoral. Tal postura no garantiza una victoria democrática y conlleva el peligro de que siga prolongándose la dictadura de Pinochet. Esta es la cuestión.

Los trece partidos que resolvieron concertarse en torno al "NO", advirtieron que oportunamente descalificarían el plebiscito si " el proceso electoral no estuviese revestido de condiciones mínimas suficientes de limpieza " . La Democracia Cristiana y algunos otros de esos partidos se disponen a dejar dicha advertencia en el papel , a no hacer cuestión de ninguna de las condiciones que plantearon, ni del número de inscritos en los registros electorales, ni del ejercicio sin trabas de las libertades públicas, ni del acceso equitativo a los medios de comunicación y demás requisitos de que hablaron. .

Nosotros instamos a todos los partidos de oposición a actuar con firmeza , a crear condiciones que cambien el cuadro político y lo hagan favorable a

la causa democrática . Los invitamos a tomar en serio el problema de las garantías. Todas las fuerzas de oposición deben exigir las y luchar por obtenerlas . A los requisitos señalados el año pasado por el Episcopado Nacional y en febrero último por la Concertación de los Trece, se debe agregar el reconocimiento de los mismos derechos para todos los partidos, el término inmediato del exilio , el ejercicio del derecho a voto para los chilenos que residen en el exterior y la libertad de Clodomiro Almeyda y de todos los presos políticos . El Comando contra el Fraude y por la Democracia, creado a iniciativa de la Izquierda Unida, debería jugar un papel más destacado en las denuncias propias a su misión.

En especial, llamamos a los trabajadores y al pueblo a desarrollar al máximo la lucha por sus propias demandas y por la libertad .

Nunca los cambios políticos de trascendencia han dependido sólo del acto del sufragio , ni siquiera bajo los gobiernos más democráticos , y jamás ello podrá ocurrir bajo una dictadura como la que sufrimos. Las grandes jornadas electorales que representaron o facilitaron un avance significativo en el camino del progreso político y social del país siempre estuvieron acompañadas de una gran movilización del pueblo. El desplazamiento de la derecha del gobierno y la llegada a él de la Democracia Cristiana y luego de la Unidad Popular, no fueron meros resultados de eventos electorales. El ascenso a posiciones de poder de nuevas fuerzas sociales y políticas, como resultado de las elecciones presidenciales de 1964 y de 1970, fue ante todo producto de una lucha sostenida contra la oligarquía, por las reivindicaciones de los trabajadores , por los derechos del pueblo y se logró en un periodo de auge del movimiento obrero y popular, en los años del despertar campesino, de la lucha por la reforma agraria y por la nacionalización del cobre, del desarrollo pujante del movimiento estudiantil que impuso la reforma universitaria. Por esto, reducirlo todo a la inscripción electoral y al "NO" en el plebiscito significa limitar el campo de la lucha , levantar un espejismo de victoria o a lo sumo trabajar por un triunfo que carecería de la fuerza necesaria para sacar de su puesto al dictador.

En Filipinas, en Haití y en todos los países donde se ha

hecho a un lado a un déspota como Marcos o Duvalier ha sido necesario e indispensable una fuerte y permanente lucha popular y nacional.

Pinochet insiste en que, cualquiera sea la opinión que pudiera expresarse en el plebiscito, se cumplirá estrictamente lo que dice la Constitución impuesta hace ocho años atrás. De tan tozuda posición no lo saca nadie. Por su lado, en la hipótesis de que pudiera vencer el "NO", tanto los partidos de izquierda como la democracia cristiana y otras colectividades de centro sostienen que Pinochet no puede seguir un año más en el poder, ni permanecer intangible la Constitución del 80, ni aceptarse un parlamento parcialmente designado, ni la tutoría militar sobre el poder civil que pudiera emanar de la voluntad ciudadana. De este modo, el plebiscito aparece como una cierta confrontación con la dictadura. Pero el resultado de esta eventual confrontación no podrá depender fundamentalmente del sufragio. Pinochet pretende quedarse en el poder de todas maneras. No le cabe una idea distinta en la cabeza. La brutal declaración que hizo el jefe de gabinete de la Intendencia de Magallanes, Gerardo Alvarez, en el sentido de que serán pasados por las armas quienes, de producirse el triunfo del "NO", no acepten el itinerario constitucional previsto para esta alternativa, corresponde al pensamiento fascista que prevalece en las altas esferas del régimen. El mismo Pinochet dijo en su discurso del 11 de marzo que el triunfo de quienes rechacen o disientan de la institucionalidad vigente, generaría un "conflicto de impredecibles y negativos efectos".

Las declaraciones de Mattei y Merino en cuanto a respetar, sea cual fuere, el resultado del plebiscito y a considerar que no sería el caos el triunfo del "NO", expresan cierta diferencia con aquel pensamiento, pero no justifica en modo alguno el entusiasmo que han despertado en determinados políticos. Porque en esta eventualidad - la del triunfo del "NO" - el principal y gran problema sería el de abrir paso a la democracia, empezando por dar forma a un gobierno provisional y a una Asamblea o Congreso Nacional con poderes constituyentes, cuestiones que rechazan tanto Pinochet como Merino y Mattei. En tal situación, el plebiscito podría ser un

hito importante en la lucha por la democracia, no sólo ni tanto por el triunfo del "NO", sino ante todo por el resultado del conflicto que se plantearía entre los que apegándose a la Constitución del 80, desearían dejar las cosas tal como están y los que reclamarían proceder a cambiarlas de inmediato de acuerdo a la voluntad nacional.

Para el caso de que el plebiscito fuera adverso al dictador, los trece partidos que se concertaron en torno al "NO" se proponen "concordar con las Fuerzas Armadas los términos de una transición rápida y ordenada hacia la democracia". No vemos la posibilidad de que las instituciones militares acepten voluntariamente ningún acuerdo en tal sentido y, de aceptarlo alguna vez, lo harían con la idea fija de comprometer ante todo a las fuerzas democráticas a no escarbar en los graves atropellos a los derechos humanos cometidos en este período, cuestión que el pueblo jamás aceptará. No se trata de rechazar a priori la posibilidad de entendimiento con las Fuerzas Armadas, sino de comprender que un acuerdo realmente favorable a la democracia tiene que ser producto de la lucha del pueblo, impuesto por las circunstancias. En un momento dado, las masas populares tendrían que pasar al estado de insubordinación general, ganar las calles y copar con su presencia las grandes ciudades para que las Fuerzas Armadas, probablemente con otros jefes militares, pudieran cambiar de actitud. Ello podría ocurrir ante situaciones tales como el triunfo del "NO" o frente a la evidencia del fraude, siempre que la oposición y en primer lugar la izquierda, tengan permanentemente - y en particular en esas circunstancias - una actitud de pelea e impulsen sin vacilaciones la movilización social.

En el seno de la dictadura hay contradicciones. Unos están por el continuismo con Pinochet y otros sin él, como ha quedado en evidencia en las escandalosas rencillas públicas que acaba de protagonizar el Partido Renovación Nacional. Los fraudes que ha habido en la elección de sus dirigentes son vistos por la opinión pública como hechos ilustrativos del gran fraude que el régimen monta para manipular el plebiscito. Hay también alguna gente, incluso entre los militares, dispuesta a facilitar el camino a la democracia y otra que se opone a ello por todos los

medios. La lucha de masas y la acción ofensiva de la oposición debieran desplegarse de tal forma que constituyan un peligro para la estabilidad del régimen, ahondando esas contradicciones y transformándolas en un factor objetivo favorable a la causa democrática. De lo contrario, como ha sucedido varias veces, Pinochet las podrá resolver a su favor. Lo que pasó con Mattei es harto aleccionador. El año pasado pavoneándose de tener opiniones propias, declaró pomposamente que era partidario de someter al plebiscito el nombre de un civil. Hasta le fijó la edad: 52 años. Recientemente ha confesado que ello no será posible. "A veces - expresó a los periodistas - uno tiene un ideal hermoso y después tiene que hacer las cosas que le corresponde políticamente". Está claro, Mattei ya se entregó. ¿Se puede acaso esperar algo distinto de Gordon, que hace lo que le ordena su jefe, o de Merino y Stange, que tienen también de vez en cuando opiniones propias y que en definitiva, lo único que quieren es la continuidad de la dictadura y no contrariar al dictador?.

Sólo una lucha multiforme del pueblo, sólo una intensa, combativa, creciente y multitudinaria movilización social que llegue y pase más allá del plebiscito, puede y debe generar la ruptura que se necesita. Tarde o temprano ésta es inevitable. Y lo más probable es que adopte una forma de sublevación nacional.

La Constitución vigente hasta el 11 de septiembre de 1973 contemplaba la alternancia en el gobierno e incluso resortes para destituir al presidente de la república antes de expirar su mandato. La coalición reaccionaria, la CODE, que se formó entonces con la destacada participación de la Democracia Cristiana, no tuvo la suficiente fuerza social, ni conquistó en las elecciones de marzo de 1973 el número de parlamentarios a que aspiraba para consumar un golpe institucional. En esas condiciones, la reacción chilena, coludida con el imperialismo norteamericano, recurrió al sangriento putch fascista y llevó a las Fuerzas Armadas a una guerra contra el pueblo que no acabará hasta que termine la dictadura. El paso desde el régimen democrático a la dictadura representó pues, una clara y abierta ruptura institucional. Ahora, el tránsito a la democracia no puede sino representar otra ruptura, esta vez justificada y necesaria. La Constitución del 80 es

irreformable sin el acuerdo de Pinochet y éste no lo ha dado ni lo dará jamás. Por otra parte, ella permite que un sólo hombre pueda estar veinticuatro años en el mando presidencial y establece el suprapoder permanente de las Fuerzas Armadas a través del Consejo de Seguridad Nacional. De hecho hace ilusoria la alternancia. En los marcos de la institucionalidad pinochetista no es posible, entonces, el tránsito a la democracia.

En el verano recién pasado y después de él han tenido lugar importantes movilizaciones. Destacan, entre ellas, los paros y huelgas de los trabajadores temporeros, la lucha de los obreros del PIMO, las elecciones sindicales en el carbón, la campaña de los profesores contra los despidos, las protestas contra la municipalización de los policlínicos, las tomas de terreno en varias ciudades, los apagones y otras acciones paramilitares, la emocionante cadena de ayunos por la vida de los cinco desaparecidos de septiembre último, las manifestaciones realizadas de norte a sur del país el día 8 de marzo. Por otro lado, los familiares de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados, de los presos políticos, de los retornados y exiliados y el movimiento Sebastián Acevedo contra la tortura, continúan su heroica y tenaz lucha por los derechos humanos. Los académicos y estudiantes de las universidades vuelven a la pelea. Los de la Chile se proponen reimpulsar el movimiento que aventó a Federici y culminar con nuevos éxitos la lucha por la defensa de su casa de estudios. Frente al alza del costo de la vida y al deterioro del poder adquisitivo de salarios, sueldos, jubilaciones y montepíos, se movilizan los trabajadores activos y pasivos y se aprestan a dar sus propias batallas por el aumento de sus ingresos. El Comando Nacional de Trabajadores ha levantado un nuevo pliego de peticiones y tiene en perspectiva otra huelga general. Se desarrolla la lucha por la democratización de las juntas de vecinos. Es sostenida la campaña de los periodistas por la libertad de prensa y la del director de "Análisis", Juan Pablo Cárdenas y contra los procesos y condenas arbitrarios y, del mismo modo, la acción de los hombres y mujeres del arte y de las letras contra los amedrentamientos de que son objeto por parte de las bandas terroristas del régimen. La voz de la Iglesia Católica, en cuyo seno sobresalen valerosos obispos, sacerdotes, religiosos y la fecunda acción de las

comunidades cristianas, se sigue haciendo oír en contra de las demasías y abusos de la dictadura y en favor de los intereses e ideales comunes a la ciudadanía. Vemos la posibilidad de un cambio ante todo en el desarrollo vigoroso de este movimiento social multifacético. Nuestra fundamental preocupación es seguir impulsándolo.

Nosotros aspiramos a un régimen democrático avanzado, pero no ponemos esto en primer plano. Lo que más importa hoy es terminar con la dictadura, acabar con ella pronto, aprovechar la coyuntura del plebiscito para provocar su desmoronamiento. Si lo que se abre camino resulta ser una salida de tipo democrático-burgués la consideraremos como un paso en la lucha por la democracia. Pero decimos con toda convicción que sin lucha, sin la acción coordinada o convergente de todas las fuerzas antidictatoriales, no habrá ninguna salida, ni siquiera una salida moderada. Impulsar esta lucha y promover esta acción, partiendo de las posiciones que tiene cada actor político y social son dos cuestiones claves que deben resolverse en corto plazo.

En conclusión, en torno al plebiscito hay distintas visiones en el campo opositor. Algunos han resuelto participar en él en busca de lo que llaman una solución civilizada, o sea sin que el pueblo se subleve, sin que se encrepen demasiado las aguas de la lucha social. Otros lo han hecho en nombre de un realismo que no es tal, creyendo que la situación no da para más y que la lucha del pueblo no la pueden modificar a su favor. Nosotros no compartimos estas visiones, aunque distinguimos, por cierto, las diversas posiciones entre los que se pronuncian por votar "NO" y, en especial, a quienes le confieren al "NO" un carácter rupturista. No hemos adoptado ni adoptaremos ninguna posición que signifique favorecer el camino de la conciliación, ni reconocerle al plebiscito rasgos democráticos que no tiene, ni mucho menos pensar que en él se decide todo. Y si en definitiva es convocado, nos emplearemos a fondo a fin de que las más diversas formas de lucha, incluidas las relativas al acto plebiscitario, se fusionen en un sólo movimiento, en una formidable y decidida movilización política y social con miras al gran objetivo de terminar con la dictadura y aventar al dictador.

No ocultamos nuestra preocupación por la Izquierda Unida. La Democracia Cristiana venía trabajando, pública y privadamente por llevar agua a su molino, por una salida sin participación de los comunistas, por una salida moderada, conciliadora, con el amén del Departamento de Estado norteamericano. Tenemos claro que los partidos de la Izquierda Unida que se han concertado con la oposición de centro, no han buscado hacerle el juego a la Democracia Cristiana y al Departamento de Estado. Pero el hecho objetivo es que han asumido una posición sin haberse agotado ni mucho menos la discusión en el seno de la coalición que formamos en común. Ello ha traído consecuencias negativas. Por ahora la Izquierda Unida se ha debilitado como conglomerado opositor. Aparece hoy con menos fuerza para influir en el desarrollo de los acontecimientos. La crisis que la ha afectado repercute en las organizaciones de masas, en cuyo seno hay quienes tratan de marcar una diferencia tajante entre los comunistas, el Partido Socialista Histórico y el MIR, y los que se han pronunciado por el "NO". Esto no ayuda, por decir lo menos, a la movilización social.

Seguros de interpretar los anhelos e intereses del pueblo, seguiremos empeñados en fortalecer y desarrollar la Izquierda Unida porque es la mejor alternativa de poder. Haremos cuanto nos sea posible para restablecer en la lucha las mejores relaciones y la plena confianza entre todos sus integrantes. Por sobre los ataques que ha sufrido y los males que de cuando en cuando la han afectado, la Izquierda ha sido y es una realidad indestructible, la expresión del pensamiento más avanzado del pueblo chileno. Como la fuerza democrática más consecuente tiene mucho que hacer en la lucha por una democracia verdadera, por la total erradicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, por los cambios profundos que se precisan en la estructura del Estado, en la economía, en la distribución de los ingresos, en la educación, la salud y en todas las esferas. En el pasado la Izquierda fue gobierno; en el futuro está llamada a asumir todavía mayores responsabilidades de poder. La Izquierda chilena tendrá que empujarse sobre los obstáculos para asumir sus responsabilidades como tal y hacer que el país retome la senda de la revolución democrática, antimperialista y antioligárquica, por la cual el pueblo caminó durante el gobierno de Salvador Allende, teniendo como meta el socialismo.

res dificultades al fascismo, porque objetivamente pone en discusión el carácter mismo de la usurpación del poder, sus consecuencias como catástrofe nacional y el ánimo de los chilenos de abrir paso al restablecimiento de un régimen democrático.

Este 12 de mayo son evidentes los ánimos de lucha de muy amplios sectores. Ellos son interpretados por el planteamiento comunista de poner el acento en la lucha de masas y la irrupción del pueblo en el escenario político. Este es el camino que abrirá la perspectiva real de la recuperación de la democracia, que no pasa por el fraude del plebiscito sino por la derrota del plebiscito.

La movilización social amplia, combativa, unitaria, es lo único que ha permitido hacer retroceder a la dictadura. Por ello, la posición planteada por el Partido Comunista, su llamado a perseverar en la unidad y la lucha, es la única realista. Por sobre todo debe colocarse el objetivo de derrotar la pretensión de la dictadura de prolongarse en el poder. La lucha decidida contra el régimen, ha señalado el Partido Comunista, puede hacer del plebiscito, cualquiera que sea su resultado, el detonante de un levantamiento popular que conduzca al derribamiento de la tiranía.



plena en la "institucionalidad" del régimen de facto. Para tranquilizar a los perplejos militantes, se argumenta que mediante esta actitud se lograría "transformar el régimen desde adentro".

La esencial falsedad de este argumento queda de manifiesto plenamente si se examina con seriedad, objetivamente, la propia Constitución de Pinochet de 1980, en su origen y en su contenido.

En el plebiscito presidencial programado para el presente año, habrá, como se sabe, un solo candidato, que va a ser designado por los comandantes en jefe de las FF.AA. y Carabineros. Se podrá votar SI o NO respecto de dicho candidato único. Si triunfara el NO, se realizaría una nueva elección presidencial - esta vez abierta, con varios candidatos - en 1989. Pero, en todo caso, aún siendo derrotado en el plebiscito de este año, Pinochet seguirá como presidente por un año más.

Pero, suceda lo que suceda en 1988 o 1989, en los marcos de la actual Constitución, el poder principal del Estado lo asume el llamado Consejo de Seguridad Nacional (CONSENA), integrado por el presidente, los presidentes del Senado y de la Corte Suprema, los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el Director General de Carabineros.

Estas disposiciones, que consagran la preeminencia de las Fuerzas Armadas - en los hechos, de sus jefaturas, que actúan por su naturaleza y por norma, sin consultar a sus subordinados - por sobre las instituciones civiles del Estado, permanecerán vigentes aún en el hipotético caso de una elección "normal", con el que tanto se ilusionan algunos políticos opositores, convirtiendo al presidente que se elija en este marco, en un simple ejecutor de los designios de los comandantes en jefe o, en el mejor de los casos, de los cuerpos de generales y almirantes.

¿Qué posibilidades existen, pues, de "transformar el régimen desde adentro"...sobre la base de acatar dócilmente sus ordenanzas de inscripción, control de los partidos, elecciones y demases ? Ninguna.

A medida que se aproxima la elección del personero del régimen, posiblemente el propio Pinochet, para ser presentado al plebiscito, ello va desencadenando mayo-

res dificultades al fascismo, porque objetivamente pone en discusión el carácter mismo de la usurpación del poder, sus consecuencias como catástrofe nacional y el ánimo de los chilenos de abrir paso al restablecimiento de un régimen democrático.

Este 12 de mayo son evidentes los ánimos de lucha de muy amplios sectores. Ellos son interpretados por el planteamiento comunista de poner el acento en la lucha de masas y la irrupción del pueblo en el escenario político. Este es el camino que abrirá la perspectiva real de la recuperación de la democracia, que no pasa por el fraude del plebiscito sino por la derrota del plebiscito.

La movilización social amplia, combativa, unitaria, es lo único que ha permitido hacer retroceder a la dictadura. Por ello, la posición planteada por el Partido Comunista, su llamado a perseverar en la unidad y la lucha, es la única realista. Por sobre todo debe colocarse el objetivo de derrotar la pretensión de la dictadura de prolongarse en el poder. La lucha decidida contra el régimen, ha señalado el Partido Comunista, puede hacer del plebiscito, cualquiera que sea su resultado, el detonante de un levantamiento popular que conduzca al derribamiento de la tiranía.



A 80 AÑOS DE SU NATALICIO¹⁵

26 de Junio 1988



TENGO FE EN CHILE Y SU DESTINO.

MAS TEMPRANO QUE TARDE

SE ABRIRAN LAS GRANDES ALAMEDAS

POR DONDE PASE EL HOMBRE LIBRE

PARA CONSTRUIR UNA SOCIEDAD MEJOR

SALVADOR ALLENDE

lucha antifascista

La voz de Moscú

por JMV.

Aquella voz clara y sonora, que por espacio de 55 años llevó a todos los confines de América Latina y también a España, el mensaje de Radio Moscú, ha entrado en el silencio.

La noticia de la muerte del veterano locutor Luis Cecchini ha resultado dolorosa y difícil de creer para quienes lo conocimos, aunque el agravamiento de su salud en los últimos meses la hacía, en alguna medida, esperada. Pocos seres, en efecto, nos han parecido tan dotados de energía y vitalidad como él, tan encarnizadamente optimistas, tan enamorados de la vida, tan poseídos en cada día de su existencia de tan indestructible fervor revolucionario.

Había nacido, en forma casi alegórica, un 1 de mayo, en los albores del siglo XX, 1902, en la pequeña ciudad italiana de Recanatti. Llegó niño a Buenos Aires, junto con sus padres. La familia formaba parte de aquella innumerable legión de emigrantes campesinos y obreros, italianos y de otros países europeos, que se hacinaban en cubiertas y bodegas de los barcos de carga para atravesar el océano, con la ilusión de encontrar en la América legendaria, el trabajo, el bienestar, tal vez la riqueza, que sus patrias les negaban.

El joven Luis Cecchini, pronto asimilado, trabajó como obrero ferroviario. Forjó tempranamente su conciencia de clase. Ingresó en el Partido Comunista de la Argentina, conoció a dirigentes de prestigio como Rodolfo Ghioldi y Miguel Contreras (el gran amigo de Recabarren) que ha muerto hace algunos meses en Buenos Aires. Fue dirigente sindical y más tarde activista del Partido. Viajó más de una vez a

Brasil y Uruguay en cumplimiento de misiones de la organización.

El golpe militar de Uriburi en 1930, que derrocó al gobierno constitucional de Irigoyen y abrió medio siglo de inestabilidad y cuartelazos en la Argentina, fue acompañado de una violenta represión contra el Partido Comunista. Cecchini tuvo que pasar a la clandestinidad y luego se vio obligado a abandonar el país. En 1932, después de vencer no pocas dificultades, llegó a la Unión Soviética, que iba a ser su tercera Patria, la tierra donde construyó su hogar, donde nacieron sus hijos y donde iba a morir, 55 años más tarde.

Desde el mismo año de su llegada, el joven emigrante encontró su puesto. Se convirtió en locutor del primer programa en castellano de Radio Moscú, orientado a España y América Latina. Y desempeñó esa función sin interrupciones, sin faltar jamás, por enfermedad o cualquier otro motivo, ni un sólo día, hasta la segunda mitad de 1987.

Su voz y su especial manera de hablar, ese acento indescifrable que no se identificaba con ninguno de los acentos regionales del castellano latinoamericano o peninsular, se hicieron familiares para dos generaciones completas de oyentes de nuestros países.

Esa voz nos habló del avance de la Unión Soviética en los primeros planes quinquenales, de las portentosas transformaciones que trajo a este país la revolución de 1917. Nos habló de la guerra civil española, de las Brigadas Internacionales, de los bombardeos fascistas, de las turbias maniobras de los gobiernos burgueses europeos que condujeron a la derrota de la República. Nos habló del avance del fascismo, del proceso de Leipzig, con el mensaje de advertencia a la Humanidad lanzado por Dimitrov. Nos habló luego de la II Guerra Mundial, de la invasión de la Unión Soviética por los ejércitos de Hitler, de la heroica defensa de la Patria Socialista.

Más tarde, esa voz nos habló de la liberación, de los nuevos Estados populares que surgían de las ruinas de Europa. Del movimiento de partidarios de la paz, de la traición de González Videla en Chile y de la persecución de un poeta llamado Pablo Neruda; nos

habló del primer sputnik y del vuelo de Gagarin.

Por la voz de Luis Cecchini desfiló toda la crónica de la parte central de este siglo, tan cargado de tragedia, de contradicción y de esperanza. Para muchos miles de latinoamericanos, esa voz adquirió el valor de un símbolo, fue en verdad una parte del mensaje de renovación social y espiritual, de liberación de los pueblos, de paz y revolución, que nos llegaba desde Moscú.

A su calidad profesional, unia Luis Cecchini valores individuales notables. Su dedicación total al trabajo, su permanente alegría, su cálida fraternidad hacia los compañeros, la transparencia de su fe en el futuro de la Humanidad, lo hacen inolvidable para todos los que trabajaron con él o tuvieron ocasión de conocerlo. Los chilenos, en especial, guardamos y guardaremos el recuerdo de su solidaridad profunda, de su gran corazón.



Nuestra lucha y la nueva mentalidad

por Orlando Millas

El prestigio alcanzado por la política que diseñó el XXVII Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética es un factor que pesa en la lucha ideológica y política contemporánea. El secretario general del Partido Comunista Portugués, compañero Alvaro Cunhal, ha hecho notar: "La aceleración del desarrollo socio-económico, la reorganización de la economía sobre la base de las conquistas de la revolución científico-técnica, la profundización de la democracia en el Estado, el Partido y la sociedad, la más completa satisfacción de las necesidades del pueblo, la superación del atraso, de las deficiencias y los errores, no desmienten sino que confirman la superioridad del socialismo sobre el capitalismo y la naturaleza intrínsecamente libertadora y revolucionaria del sistema socialista" (1). Uno de los grandes rasgos de la renovación, la perestroika soviética, es la nueva mentalidad, o el nuevo pensamiento como también se le designa, o sea poner al día nuestro ideario crítico, el análisis científico riguroso de la realidad, la formulación dialéctica de los problemas de hoy. En vez de intentar la adaptación del mundo a fórmulas, esquemas, dogmas o citas fuera de contexto de los autores clásicos, de lo que se trata es de confrontar las tesis teóricas con la realidad, ver el movimiento de los fenómenos, advertir los desarrollos de las esencias. Así procedieron Marx, Engels, Lenin y sólo conduciéndonos de esta manera somos marxistas leninistas. Lenin hablaba de "los porfiados hechos" y se burlaba de los que no sabían tenerlos en cuenta. El respeto acendrado a la verdad y el coraje para

considerarla son características de los auténticos revolucionarios.

La nueva mentalidad da respuesta a las cuestiones más apasionantes de nuestro tiempo. Lo hace sobre la base de considerar a fondo el carácter y la naturaleza del imperialismo así como la correlación de fuerzas internacional y los asuntos que preocupan a la humanidad. Levanta la plataforma de los sectores progresistas de acuerdo con los intereses básicos de los pueblos. Constituye una aberración sostener que atendería criterios exclusivamente soviéticos, siendo que se inspira en las conveniencias indiscutibles de todo el género humano. El mérito soviético consiste en interpretar tales conveniencias y emplear el gran peso de su influencia a fin de obtener que se les atienda.

El compañero Anatoli Dobrinin, secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética inicia un artículo reciente, en que expone los principios básicos de la política exterior soviética, haciendo notar: "La nueva filosofía de la política exterior, elaborada por nuestro Partido, es fruto ante todo de un estudio y un análisis profundos de las tendencias cardinales del desarrollo mundial de nuestros días. Pero a la vez se asienta en la experiencia de setenta años de política de paz aplicada por el Estado soviético en el ámbito internacional". (2)

Algunos intrigantes tratan de presentar los esfuerzos de la Unión Soviética, del movimiento comunista y de muchas otras fuerzas por evitar una hecatombe nuclear, detener la carrera armamentista, poner un freno al militarismo, basar las relaciones internacionales en compromisos mutuamente aceptables, eliminar la violencia y la amenaza del empleo de agresiones, apagar los conflictos regionales y garantizar la independencia y la seguridad económica de los países, como si se tratase de algo contrapuesto al combate de liberación nacional antimperialista. Ver así las cosas es demasiado primitivo y ajeno a la realidad. Hay una dialéctica de los problemas globales, continentales, zonales y de cada nación, que se engarzan concatenadamente. El peligro de una hecatombe nuclear no es abstracto sino que dimana del desarrollo del imperialismo y oponerse a él implica una definición de primordial importancia. El armamen-

tismo constituye uno de los rasgos de la preponderancia en las oligarquías financieras transnacionales de complejos militares-industriales y la lucha en su contra se vincula estrechamente a muy amplias y determinantes reivindicaciones populares. Hacer caducar la práctica imperialista de las imposiciones y abrir paso al respeto de las normas jurídicas y a los compromisos mutuamente aceptables está en la esencia de los objetivos diplomáticos y de Derecho internacional por los que venimos luchando todos los pueblos. Eliminar en la práctica entre los Estados la violencia y las amenazas de su empleo representa llevar adelante uno de los anhelos seculares de los revolucionarios. Apagar los conflictos regionales fomentados en diversos espacios por el imperialismo es hacer triunfar la autodeterminación de los países sobre los cuales se descargan tales "guerras de baja intensidad" designadas así por sus criminales promotores. Garantizar la independencia y la seguridad económica tiene los caracteres de una meta antimperialista decisiva. Es cierto que dichas reivindicaciones asumen enfoques e incluso formas distintas en uno u otro nivel y no se les puede asimilar colocando papel de calco a su formulación genérica; pero, no por eso pierden su validez y trascendencia.

La declaración soviético-yugoslava suscrita a raíz de la visita de marzo último del compañero Gorbachov a la República Federativa Socialista de Yugoslavia proclamó un apoyo decidido a la política de no alineación de la que destacó el hecho de que "está encauzada contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo, el apartheid, como también contra todas las formas de agresión, injerencia, violencia, supremacía, hegemonía y discriminación en las relaciones políticas y económicas, contra la limitación de la colaboración internacional por los estrechos marcos de las agrupaciones existentes". Esa declaración que, al mismo tiempo, hizo notar que "el socialismo está en una etapa crucial, en los umbrales de revelar con mayor plenitud su potencial material y espiritual y ahondar sus pilares humanitarios", subrayó que "el Partido Comunista de la Unión Soviética y la Liga de los Comunistas de Yugoslavia corroboran el significado universal de los principios democráticos entre los partidos comunistas, obreros, socialistas, socialdemócratas, democráticos-revolucionarios y otros partidos

y movimientos progresistas, los cuales se fundamentan en el derecho inalienable de los mismos a tomar de manera autónoma decisiones sobre la opción de los caminos de desarrollo social". (3)

Esto es de la esencia de la nueva mentalidad. Tiene que ver con las grandes tareas en que se manifiesta la misión liberadora de la clase obrera y que todo comunista coloca en primer término. El compañero Mijail Gorbachov dijo, al respecto, en su intervención en el Pleno de febrero reciente del Partido Comunista de la Unión Soviética: "El elemento básico de la nueva mentalidad consiste en el nuevo papel de los valores humanos, cuya importancia hicieron constar ya Carlos Marx y Vladimir Lenin. Esta constatación no se debía sólo a consideraciones generales dimanantes del principio humanista de la teoría de los fundadores del marxismo. Señalando la importancia de los procesos de internacionalización que transcurren en el mundo, nuestros grandes maestros definieron la base objetiva de los valores humanos, uniéndolos dialécticamente con los valores sociales y clasistas. Ahora ello deviene línea fundamental de la política práctica. Este requisito que se le presenta a la política obedece a procesos negativos y positivos de la época contemporánea: por una parte, al incremento de inauditos peligros para la existencia del género humano y, por la otra, al aumento del papel de las masas y del factor democrático general en la política estatal y mundial". (4)

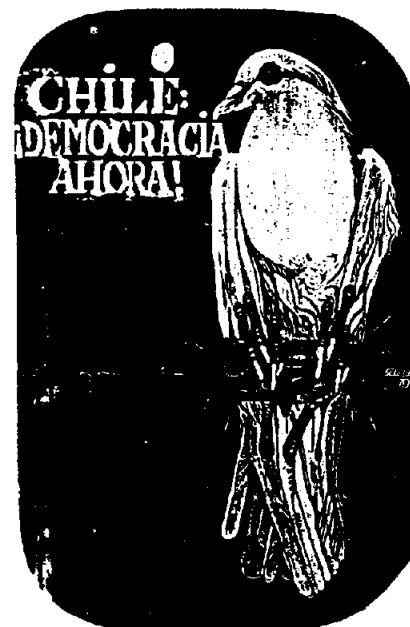
Pinochet es un exponente de la regresión social en toda la línea. Su régimen fascista aparece irremediablemente dependiente de la corriente más agresiva, militarista y antidemocrática del imperialismo contemporáneo. La lucha del pueblo de Chile por la democracia constituye una parte singular de la contienda en que las fuerzas sanas de todo el mundo levantan la bandera de los valores humanos. La ejemplar solidaridad que ha recibido nuestro pueblo nos alienta a ser más y más eficientes en el cumplimiento de los objetivos emancipadores que nos hemos propuesto, en el ejercicio del derecho de nuestro pueblo a la rebelión de masas y la conjunción patriótica sin exclusiones de los que están por la libertad. El despliegue en el mundo de la nueva mentalidad es para nosotros un estímulo muy poderoso.

(1) Alvaro Cunhal. "La realidad exige un alto sentido de responsabilidad". Revista Internacional Nº 355. Edición chilena. Praga. Marzo de 1988. Pág. 6.

(2) Anatoli Dobrinin. "La política exterior soviética: sus principios básicos y el nuevo pensamiento". Revista Internacional Nº 355. Edición chilena. Praga. Marzo de 1988. Pág. 9.

(3) "Novedades de Moscú". Suplemento Nº 1.399 (N 13 de 1988) Sección Oficial. Págs.1 y 2.

(4) Mijail Gorbachov. "Las reformas revolucionarias requieren una ideología renovadora", "Pravda". Moscú. 19 de febrero de 1988.



del país

El rol protagónico del pueblo

DECLARACION DEL PARTIDO.

El deber común e ineludible de todos los demócratas es derrotar la pretensión del dictador de prolongar su régimen nefasto y de perpetuarse en el poder. La victoria de la democracia sobre la dictadura es posible. Para conseguirla debemos perseverar en el camino de la unidad y de la lucha de cada sector del pueblo por sus necesidades y derechos con la firme decisión de desbaratar el fraude del plebiscito. El fraude no sólo consiste en el control total del sistema electoral por los sirvientes de la tiranía, es mucho más y peor que eso. El fraude es la permanencia del terror, la represión, la tortura, el crimen, los desaparecimientos de personas, los estados de excepción, la proscripción de partidos políticos que tienen una profunda raigambre popular y una consecuente trayectoria democrática, es la mantención del exilio, la decisión de la tiranía de marginar de todo derecho a expresarse como ciudadanos a los centenares de miles de chilenos que han tenido que emigrar a otros países por razones económicas y políticas. La imposibilidad de acceso al cuerpo electoral de millones de chilenos que no podrán inscribirse. La puesta al servicio de la candidatura del dictador de todos los recursos del Estado y la más gigantesca operación de cohecho que haya habido en la historia nacional. Fraude es la realización del plebiscito en los marcos impuestos por la Constitución de 1980, cuya letra establece que Pinochet debe seguir en el poder aún en el caso que el pueblo hiciera fracasar la imposición del SI. Fraude es también el proselitismo sectario y la presión que en favor de Pinochet se ejerce sobre los soldados, clases, suboficiales y oficiales del Ejército y demás instituciones armadas. Es la monopolización de la televisión y demás medios de comunicación de masas. Es la especulación y demagogia que hace el régimen con los problemas y angustias de la gente más necesitada. Es la campaña de la dictadura destinada a hacer creer que el país tiene una economía próspera, en circunstancias que ahora hay más hambre y más miseria. Son

más los chilenos que viven en la extrema pobreza, faltan más habitaciones que antes, existe más cesantía, los salarios están por debajo de los niveles de hace catorce años y se han deteriorado los servicios de educación y de salud. Estos son los problemas que podemos y pondremos siempre en el primer plano de nuestra conducta concreta.

La principal determinación de los comunistas es denunciar y enfrentar el fraude poniendo en el centro el rol protagónico del pueblo, sus problemas, sus necesidades, todas sus expresiones de lucha. La tiranía ha concebido el plebiscito para ganarlo no para perderlo. El plebiscito no era ni es inevitable. Si toda la oposición lo rechazara y decidiera no participar en él se le propinaría al dictador una derrota contundente que precipitaría su caída, pero la oposición de centro-derecha y, lamentablemente, también partidos de izquierda han terminado por aceptarlo haciendo más probable que se realice, estrechando con ello las posibilidades de las fuerzas democráticas, desviando su atención de los problemas principales, levantando peligrosas ilusiones en un falso escenario electoral. Algunos partidos hablan de condicionar su participación en el plebiscito al logro de determinadas garantías. Pinochet está decidido a no dar ninguna. Si persevera en su actitud, como es lo más probable, esos partidos se verán obligados a capitular ante el dictador o a no concurrir a las urnas. Por otra parte, no se puede pasar por alto el hecho de que altos personeros demócratacristianos han declarado que el acuerdo de su colectividad de votar NO en el plebiscito podría ser reemplazado por el SI, en el caso de que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas postulen un nombre que pudiera apoyar.

Los comunistas denunciaremos ante el pueblo a la oposición de centro-derecha que está marcada por constantes retrocesos ante la prepotencia del dictador. Abandonó la exigencia de renuncia de Pinochet, renegó de las protestas y de la movilización social, desistió de la desobediencia civil, renunció a crear un estado de ingobernabilidad, se olvidó incluso de la no violencia activa, todo lo cual predicó ayer y ahora deja de lado o pospone la campaña por elecciones libres, terminando por aceptar el plebiscito. Esta sucesión de capitulaciones corresponde al proyecto del imperialismo norteamericano, que continúa interviniendo en los asuntos chilenos. Lo hizo ayer para instalar

la dictadura de Pinochet. Lo hace hoy para imponer una salida que asegure sus intereses manteniendo ante todo el modelo económico transnacionalizador. Tras la aplicación de ese proyecto trabaja por la desmovilización social y por la división de los opositores y sobre todo por el aislamiento de los comunistas, como lo planteó Robert Gelbart con todo desparpajo en julio de 1986.

La concertación que se promueve hoy en torno al NO, es meramente electoralista, sin lucha frontal contra la dictadura que apunta a la negociación con ella, que podría incluso darse antes del plebiscito. Con esta política capituladora y conciliadora no habrá victoria de la democracia sobre la dictadura. Más aún, en tales condiciones la participación en el plebiscito avala la institucionalidad fascista y ayuda a darle visos de legitimidad y legalidad a los resultados fraudulentos que Pinochet proclame mañana.

Actuamos y actuaremos resueltamente para modificar este cuadro político, para cerrarle el paso a la capitulación y abrirle camino a la lucha por una democracia verdadera. Confiando en las masas desarrollaremos su potencialidad combativa. Nunca en ninguna época ni en ninguna parte la conquista de la libertad ha sido posible en connivencia con los opresores y al margen de la movilización activa de los pueblos. La derrota de la dictadura sólo puede y debe lograrse a través de una intensa movilización de masas. Si el plebiscito se realiza en medio de una decidida lucha contra el régimen, en todos los frentes y en los más diversos terrenos, podría transformarse en una coyuntura favorable al pueblo.

El Partido Comunista llama desde hoy a organizar estas luchas, a respaldar los movimientos sociales en perspectiva para el mes de marzo, a crear las condiciones para que el plebiscito, cualquiera sea su resultado, pueda ser detonante de un levantamiento popular que conduzca al derribamiento de la tiranía.

Si las fuerzas opositoras se proponen concertada y decididamente movilizarse para conducir a nuestro pueblo a acciones ofensivas de lucha por la democracia los planes de la dictadura no podrán imponerse.

Llamamos a los trabajadores, a los estudiantes, a las mujeres, a todo el pueblo de Chile, a desplegar con toda energía la lucha y la unidad más resuelta de las masas en favor de las reivindicaciones económicas, en favor del trabajo, la vivienda, la salud, la educación, la autonomía universitaria, la libertad de Clodomiro Almeyda, Karin Eitel, Leopoldo Melo, Roberto Weibel, Alfredo Malbrich, Victor Diaz, Vasili Carrillo y demás presos políticos, por la absolución del Presidente del Comando Nacional de Trabajadores, Manuel Bustos, y de los dirigentes Arturo Martínez y Moisés Labraña, por la suspensión de las condenas a muerte, por la vuelta de todos los exiliados, contra la proscripción de los partidos, contra toda la Constitución fascista y en particular su artículo octavo, por el término de la tortura, por el juicio de los torturadores y asesinos, por la defensa de los intereses patrimoniales de los mapuches, por satisfacer las aspiraciones de los temporeros, de los obreros del PEM del POJH del PIMO, de los trabajadores del sub-contrato, de los deudores habitacionales.

La dictadura no hará ninguna concesión sin lucha. A lo sumo dará algunas migajas, que no pondrán en peligro al régimen y para uso exclusivo de los que se insertan en su sistema, en especial para la oposición burguesa. El pueblo exige que todos los partidos, todas las organizaciones tengan plenos derechos de reunión, radio, prensa, y acceso a la televisión.

Adherimos plenamente a la declaración de la Izquierda Unida del 19 de noviembre. En ella dice: "postulamos un camino de organización, unidad y lucha del pueblo que generando un estado de movilización, efervescencia social y rebeldía y de levantamiento democrático, provoque la ruptura con la institucionalidad actual y su itinerario, ponga término al régimen dictatorial y abra paso a un efectivo tránsito a la democracia. En otras palabras, propiciamos el levantamiento del pueblo contra la tiranía, y no su sometimiento. El término de la dictadura pasa obligatoriamente por la ruptura institucional, tanto por la tosudez del dictador como por el hecho que su Constitución y sus leyes no admiten ninguna posibilidad real de marchar a la democracia".

Son muchas las voces y actitudes que representan la dramática situación del pueblo. Entre ellas están la del centenar y medio de curas y religiosas que señalaron a Pinochet como el gran culpable. La del movimiento Mujeres por la Vida que criticaron la indolencia de ciertas cúpulas políticas, la de los pobladores de Valparaíso que estuvieron 20 días en huelga de hambre demandando la unidad opositora, la cadena de ayunos porque aparezcan sanos y salvos los cinco jóvenes secuestrados por la CNI en septiembre.

En numerosas comunas y ciudades se observan expresiones concretas de concertación entre los partidos de izquierda, la democracia cristiana y otros sectores. Es muy fuerte la exigencia del pueblo para que estas acciones conjuntas que deben comprender a todas las fuerzas democráticas, se materialice en todo el país, en función de sus intereses, y en torno a una lucha sin contemplaciones contra la dictadura.

A fin de abrir paso a este entendimiento se necesita que las masas, especialmente la clase obrera, entren a jugar un papel más destacado y decisivo, que tengan una presencia más gravitante en la vida política. Para ello se requiere desplegar con firmeza los movimientos reivindicativos, las huelgas, los paros, las protestas, las manifestaciones callejeras, las acciones combativas de todo tipo. Levantando las demandas del pueblo, ligadas al combate por la democracia, podemos y debemos configurar un nuevo cuadro político. La lucha es y debe ser el generador principal del cambio que se requiere. Con este criterio, esforzándonos porque los acontecimientos tomen el rumbo de la confrontación con la tiranía los comunistas tomamos e iremos tomando frente a cada situación concreta, incluido el plebiscito, las decisiones más favorables a los intereses del pueblo. La oposición puede y debe concordar en acciones comunes, en una lucha efectiva por la democracia, antes, durante y después del plebiscito. Se debe partir de la necesidad de poner fin a la dictadura, de garantizar un proceso de reconstrucción democrática que asegure al pueblo el ejercicio del poder constituyente, lo que no es posible con Pinochet.

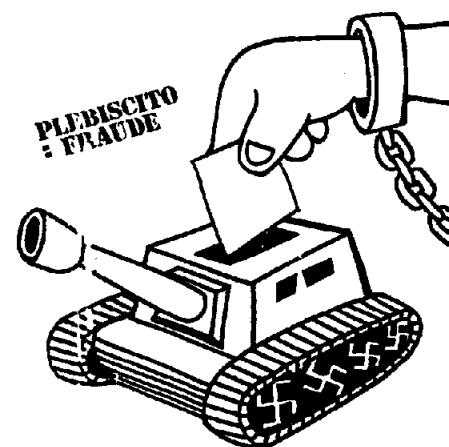
Los partidos de la Izquierda Unida tenemos la inmensa responsabilidad de mantener en alto las

banderas de Salvador Allende, esto es la lucha intransigente por los derechos del pueblo, contra el imperialismo y la oligarquía y el combate por la democracia consecuente. Tenemos el deber de consolidar y desarrollar la coalición de la Izquierda Unida como la mejor alternativa de poder para los intereses del pueblo. En forma independiente debemos levantar nuestro propio programa de profundas transformaciones económicas, sociales y políticas, y desarrollar desde la base los comités por las demandas populares y las elecciones libres. De esta manera podemos y debemos propender al entendimiento y a la acción común con las demás fuerzas opositoras, sin favorecer las pretensiones hegemónicas de los sectores burgueses.

La movilización social amplia, resuelta, combativa, es y será la base de la victoria democrática.

COMISION POLITICA DEL
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE.

Santiago, febrero de 1988.



Hacia una nueva Central Sindical Unitaria

(Documento suscrito por varios destacados dirigentes sindicales que ha circulado profusamente en Chile).

Estimado compañero trabajador:

Estando ciertos que 1988 será un año clave para la historia de nuestro pueblo, un grupo de dirigentes sindicales, nos hemos reunido, para dar una opinión sobre la formación de la NUEVA CENTRAL UNITARIA.

Para la mayoría de nosotros abordar el tema de una Central Unitaria, y su enlace con la CUT, es un tema nuevo. Excepto los dirigentes históricos de la CUT, actualmente en Chile, sobrevivientes de la masacre del 73 o retornados del exilio posterior, el resto somos dirigentes formados al calor de las luchas contra el fascismo durante estos 14 años. Indudablemente tenemos una imagen de la CUT: éramos jóvenes trabajadores cuando ésta conducía las luchas de los trabajadores. Igualmente conocemos la historia del movimiento social chileno, en primer término del movimiento obrero, y así sabemos del gran aporte hecho por la FOCH y la CTCh.

Hemos intentado sintetizar nuestras opiniones en este folleto para ayudar a la discusión, de todos y cada uno de los trabajadores, en este proceso de formación de la nueva Central Unitaria de los trabajadores chilenos. Sin embargo quisiéramos iniciar esta introducción haciendo las siguientes preguntas:

¿ Es correcta la decisión de formar este año la Central Unitaria ?; ¿ Ayudará a la lucha de masas contra la dictadura ?; ¿ Cómo sería la gestación de la CUN. ?; ¿ Quién designa a los delegados ?

¿ Existe la idea de invitar a la CDT y a otras organizaciones sindicales ?; ¿ Quién convoca a la Comisión Organizadora ? En resumen, ¿ existen posibilidades de una generación democrática de la nueva Central Unitaria ?

Por ello creemos necesario dar nuestra opinión, la cual está basada en determinados principios, que tradicionalmente han guiado al movimiento sindical chileno, en sus luchas por darse una organización, y en la conducción de la lucha reivindicativa, así como su participación en las luchas políticas que han enfrentado los trabajadores.

Parte importante del proceso político esperado para 1988, será protagonizado por el movimiento sindical. La generación de la Central, debe mostrar un movimiento sindical influyendo con su peso en el proceso político. Pero también el proceso conducente a la Central debe reflejar la potencialidad de las luchas antidictatoriales que ésta puede generar. Por ello es importante realizar una correcta evaluación del momento político que estamos viviendo, el que se distingue por los siguientes elementos:

- Desatados intentos por parte de la dictadura de perpetuarse en el poder.

- En la oposición se dan criterios diferentes para enfrentar la situación política. Una, es la posición de la centro-derecha que ha venido renunciando a todas las posiciones consecuentes contra la dictadura, desde la exigencia de renuncia de Pinochet, la ingobernabilidad, la desobediencia civil, la movilización social, el llamado a luchar por elecciones libres, hasta llegar a asumir una posición con respecto al plebiscito que buscan ganar para "iniciar" negociaciones con las Fuerzas Armadas, acompañado de un programa que da más garantías a los empresarios que a los trabajadores.

Existe la posición de una parte considerable de la izquierda chilena, que considera necesario reforzar las luchas contra la dictadura, contra el fraude y por las demandas populares.

- El ataque frontal contra las expresiones políticas de la clase obrera son acompañadas de fuertes presiones por embarcar a sectores de los trabajadores en la defensa del sistema; por ejemplo, el "capitalismo popular", la creación de AFP de trabajadores, etc.

La derrota de la dictadura fascista, puede significar el inicio de un proceso profundamente antimperialista, ya que está cada vez más claro que el actual modelo transnacionalizado no permite a los trabajadores lograr niveles dignos de vida y justicia social, de la que tanto hablara e hiciera Salvador Allende.

HACIA UNA PODEROSA CENTRAL UNITARIA, POR LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES, CONTRA LA DICTADURA POR LA LIBERTAD, LA JUSTICIA Y LA DEMOCRACIA.

En el presente año en los grandes combates que librará nuestro pueblo por la recuperación de la democracia y la derrota de Pinochet, los trabajadores y el movimiento sindical deberán jugar un papel decisivo. Esto dependerá del nivel que alcance la unidad de los trabajadores, del fortalecimiento orgánico de los sindicatos, Federaciones y Confederaciones, de la capacidad de convocatoria y de concertación que logren darse los trabajadores; pero, fundamentalmente, dependerá de que se abra paso la movilización creciente y frontal, que ligue las reivindicaciones socio-económicas con las exigencias políticas.

En condiciones de dura lucha contra la dictadura, que ejerce todo tipo de presión, de represión e intentos de exterminio físico contra los dirigentes sindicales, con el empleo de leyes laborales nefastas para los trabajadores y cuando, además, se aprecia una descarada intromisión del imperialismo buscando, entre otras cosas, influir ideológicamente al movimiento sindical; en medio de todas estas situaciones desfavorables, el movimiento sindical chileno deberá ligar estrechamente sus luchas generales con las reivindicaciones más inmediatas de todos los trabajadores, de manera tal, que la formación de la Central Unitaria sea una contribución importante a la unidad y a la lucha en contra de la dictadura y una derrota a su Plan Laboral.

La situación actual del país hace más necesaria que nunca la existencia de una fuerte organización sindical, de una férrea y amplia unidad, de una sólida coordinación de la lucha de los trabajadores. La experiencia enseña que los explotadores basan gran parte de sus expectativas futuras y la prolongación del régimen fascista en el rompimiento y dispersión orgánica del movimiento sindical, en el inmovilismo y la confusión ideológica de la clase obrera; en la conciliación y en el oportunismo que pudiera penetrar en el

campo sindical, como asimismo en la división de las fuerzas democráticas. Expresión de esto en el campo sindical son:

El Paralelismo Sindical es una de las formas específicas que adquiere la acción divisionista. Esta forma se expresa en la existencia o formación de organismos sindicales, muchas veces ficticios, que se conducen por líneas paralelas a los organismos sindicales auténticos y unitarios. No se aproximan a éstos en ninguna instancia, nivel ni circunstancia. No plantean realmente ningún problema de interés para los trabajadores, aunque hablan de ello, y tampoco defienden sus derechos atropellados, a pesar de que se vean obligados a aparentarlo.

Las Centrales Ideológicas. Son también una variante del Paralelismo, cuya inspiración es el imperialismo y tiene como objetivo separar a los trabajadores por supuestas ideologías, para imponer criterios que lleven a la conciliación de clases. Se basan en la práctica de hacer predominar posiciones políticas de directivas circunstanciales a fin de arrastrar a todo el conjunto de socios sindicales como si fueran militantes de un sólo partido o frente político. Convierten las entidades sindicales en organismos cerrados, que impiden la actuación y hasta el ingreso de los trabajadores de tendencias o pensamientos distintos. Hablan del entendimiento, la acción común y hasta la unidad con otras organizaciones; pero prima en tal estructura, la dispersión orgánica, que tiende más a la separación que a la unidad.

En el caso concreto, esta tendencia se expresa en la conformación de la CDT, que se separó del CNT por actitudes personales de dirigentes que acatan las presiones de las centrales norteamericanas. También es el caso concreto de la CGT, de Manuel Contreras Loyola, que actúa como central ideológica de apoyo al oficialismo y el rol que juega la Secretaría de los Gremios, con peones como Estibales, Medina, Domínguez, Torreblanca, entre otros, que tratan de crear un frente de apoyo al régimen; pero que han fracasado en sus intentos.

La unidad, el carácter único y democrático de las organizaciones sindicales, como lo demuestra la experiencia histórica, fortalecen el estado de ánimo y vigorizan la confianza de los trabajadores, multiplicando sus potencialidades y el optimismo de sus componen-

tes. Por cierto, que los intentos divisionistas en el movimiento sindical están contra los intereses de los trabajadores, a nadie se le ha ocurrido la "idea" de dividir o crear organismos paralelos en las organizaciones patronales, como la Sofofa, Sociedad Nacional de Agricultura, Asimet, Cámara Marítima, Cámara de la Construcción, etc., y ellas defienden los intereses de su clase.

1.- LA NUEVA CENTRAL Y SU PROCESO DE GENERACION.

La recomposición del movimiento sindical ha sido una lucha política e ideológica que se ha ganado, en contra de los intentos de la dictadura, de la burguesía y del imperialismo, para imponer a los trabajadores su ideología. La constitución de la Nueva Central, debe ser un paso superior, su formación es hoy una de las formas que adquiere la lucha por el poder político.

La Central se generará en un momento específico de la lucha de clases; y es una responsabilidad histórica. Por tanto es vital que podamos recoger todas las experiencias de la propia clase obrera, de la FOCH, de la CTCH, y especialmente de la CUT, cuyo accionar fue enriquecido con los años del Gobierno Popular. También es muy importante recoger la experiencia de la ardua y sostenida lucha contra la dictadura fascista sostenida por la Coordinadora Nacional Sindical y el CNT.

El proceso de constitución de la Central debe reactivar profundamente al conjunto del movimiento sindical. Todas y cada una de las organizaciones sindicales del país deben ser convocadas a participar en este proceso unitario. Ningún trabajador debe sentirse ajeno.

La constitución de la Central debe ser la culminación de un proceso de debate muy amplio y profundo. Es necesario, partiendo del sindicato, recoger las inquietudes, aspiraciones, problemas y esperanzas de todos los trabajadores, de forma tal, que ayude a resolver las deficiencias, para, así, levantar una propuesta nacional que oriente las actividades de la Central y sea una respuesta de los trabajadores frente a los actuales, y futuros, problemas económicos, políticos y sociales.

Lo concreto es que la lucha contra Pinochet, la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores y

el aumento de la sindicalización, pueden tener una expresión concreta de solución en torno al proceso de la Central Unitaria. La constitución de la Central debe ser un ejemplo que estimule a todas las organizaciones sociales y políticas a seguir el mismo camino unitario.

La Central Unitaria es una de las formas que adquiere la lucha por el poder político, ya que es ahí donde se decanta la importancia de la hegemonía y el papel de la clase obrera. Por ello es fundamental que los trabajadores tengan unidad de criterios y de acción.

Todo indica que uno de los puntos cruciales por los cuales pasa el éxito en la formación de la Central, es el conocimiento de las diferentes realidades por las cuales está cruzando el movimiento sindical, los cuales los podríamos enumerar así:

- Auge de la movilización social, que se expresa en un accionar más enérgico para enfrentar las negociaciones colectivas, en las demandas de petitorios extraordinarios, en huelgas legales, en paros "ilegales" de diferentes sectores - especialmente el subcontrato (contratistas, PIMO, temporeros) -, en la lucha contra los despidos, contra la municipalización y la privatización. Por último, en la elevación, aunque insuficiente aún, del papel protagónico de la clase obrera en la conducción del proceso democrático anti-fascista.

- Claros intentos por impedir un movimiento sindical unitario y clasista. Esto se realiza en tres aspectos: a) Por parte de la dictadura, a través de la represión directa e implementación del Plan Laboral. b) Por parte del imperialismo, a través de la corrupción directa y de la penetración ideológica. c) Por parte de la burguesía, a través de paralelismo, del reformismo y la conciliación; pero también del uso del Plan Laboral, en definitiva funcional a sus propios planes.

- Se han producido modificaciones en la estructura social y en la composición misma de la clase obrera. Ha disminuido el peso específico de algunas ramas industriales, como el caso textil, automotriz y otras. En cambio se han desarrollado apreciablemente la pesca

industrial, industria forestal, celulosa y la agroindustria. Ha disminuido el transporte ferroviario y ha crecido el carretero. Se ha expandido la generalidad de los servicios. En algunas ramas de la producción, las nuevas tecnologías han afectado la cantidad de fuerza de trabajo.

- Cesantía crónica estructural enorme, y por tanto peso muy alto del ejército industrial de reserva. Lo anterior acompañado de bajos niveles de sindicalización, dado, entre otras causas, por la ideología imperante y el accionar atomizador del Plan Laboral.

- Se expresan también en el movimiento sindical serias debilidades. No está, aún, a la altura de las circunstancias. La presencia del ejército de reserva y el temor a la pérdida del trabajo influyen negativamente en la actividad sindical. Es un factor objetivo de contención de las luchas; la represión y el descenso en el número de trabajadores sindicalizados pesan como lastre. El Plan Laboral ayuda a mantener sistemáticamente una política de bajos salarios.

Todos estos hechos debemos tomarlos en cuenta, pero no hay otro camino que vencerlos.

II.- QUE PENSAMOS DEL PROCESO PREVIO...

En la discusión actual, ya se muestra que la Central está generando una contradicción "interesante" entre democracia sindical v/s corporarismo. No se puede concebir que se trate de imponer por sorpresa la Central, en forma apresurada y evitando hacer participar en la discusión y generación de ella a los verdaderos actores. Por ello, nosotros consideramos que democratizar profundamente la gestión sindical pasa por generar un proceso en grande.

Debe surgir desde los sindicatos un gran quehacer y debate que garantice su participación. Especial preocupación debemos tener porque en la central se exprese una fuerte presencia del proletariado industrial y minero, el de las empresas estratégicas, el más combativo y los de mayor concentración.

Sin duda que el CNT es la más importante organización de los trabajadores; pero ello no significa que sea el único convocante. Aunque el grado de influencia y convocatoria del CNT, va mucho más allá

de sus organizaciones afiliadas, no puede aceptarse la idea, de que sólo él, levemente ampliado, se transforme en la Central. Por tanto, consideramos que el CNT debe convocar a la CDT, a organizaciones base sin afiliación o controladas (en algún grado) por el oficialismo, a sumarse a la tarea por la nueva Central.

Un paso importante debe darse con la convocatoria y constitución de la Comisión Organizadora para la nueva Central. En el caso del CNT, sus representantes deberían ser propuestos por sus organizaciones bases y, aprobados en un Confasin. La primera acción de dicha Comisión Organizadora debiera ser encabezar una movilización unitaria por las demandas de los trabajadores, y la convocatoria a la celebración del 1 de mayo con carácter unitario, combativo y de masas.

Proponemos formar una Comisión Organizadora cuya representación sea proporcional a las fuerzas, por tanto, correspondería que el CNT contara con un 70% de representantes en dicha Comisión. Los miembros de esta Comisión deberían tener incompatibilidad de ser elegidos Consejeros nacionales en la futura central, no así miembros de comisiones o Departamentos.

Además es necesario extender este proceso unitario de conformación de la Comisión Organizadora, a nivel regional, provincial y local. Asimismo entre las organizaciones a nivel de rama, cuya primera iniciativa debiera ser la creación de comisiones de enlace y de plataformas de lucha comunes entre organismos paralelos o complementarios. Lo anterior, sin perjuicio que en el proceso, mientras nacen los nuevos organismos, se fortalezca el CNT.

El punto más alto de este proceso, debiera ser llegar a un evento nacional constituyente de la central. En éste debiera participar una cantidad de delegados cercana a 3.000 compañeros.

La designación de los delegados al Congreso Constituyente, lo probable es que no podamos hacerla en votación universal y directa. Entonces lo más democrático sería su nominación por los sindicatos en votaciones directas o en asambleas sindicales especiales, con presencia de la Comisión Organizadora al nivel que corresponda. Somos partidarios que cada delegado a la Central, con derecho a voz y voto y a ser elegido dirigente, debe ser nominado delegado, previamente, por su organización base. El proceso para los organismos

regionales debe ser similar.

Para posibilitar una justa participación, el reglamento deberá resolver, eficazmente, la forma de asegurar una relación entre la participación amplia y la proporción real de todos y cada uno de los socios y de los sindicatos.

Nos pronunciamos porque el Consejo Nacional se genere, o surja, de una expresión democrática y sin cuoteo que atente contra la democracia sindical. No debe descartarse, sin embargo, llegar a acuerdos políticos, teniendo en cuenta a cada fuerza o sector; tanto en el número de dirigentes a elegir, como en los cargos a ocupar.

III.- SOBRE LA ESTRUCTURA ORGANICA.

La estructura orgánica de la nueva Central Unitaria constituye un aspecto de alta importancia para el ejercicio democrático y logro de tareas, objetivos y programas que en ella se establezcan. Una orgánica ágil y operativa, con canales efectivos de comunicación e información, con una vinculación permanente con las diferentes instancias sindicales, con una cobertura y acción nacional, ramal y territorial, aparecen como indispensables para afrontar los desafíos del presente y del futuro. Al mismo tiempo, esto permitirá hacer del principio de la democracia sindical una realidad tangible, legitimando a la central, sus dirigentes y su actividad.

Especial relevancia adquiere una acción y funcionamiento tal que proyecte la actividad sindical de manera permanente en el plano territorial, donde el sindicalismo organizado se levante como conductor y representante, no sólo de los intereses de los trabajadores, sino también de otros sectores que ahí existan.

Nos pronunciamos por la existencia de las siguientes instancias, al igual que la CUT, para la estructura de la central: Congreso nacional; Consejo directivo nacional; Conferencia nacional; Comité ejecutivo nacional; Departamento de acción; plenario de Conferencias, Federaciones y Asoc. Nacionales(Confasin). A nivel regional se conservaría la misma estructura, de acuerdo a cada realidad.

Nos pronunciamos porque los congresos ordinarios sean cada tres años, sin perjuicio de realizar congresos extraordinarios cada vez que las circunstancias lo requieran y, además, cumpliendo con los requisitos de su convocatoria. La representación en estos congresos será de participación directa de las bases, con delegados elegidos en forma proporcional, más las autoridades que expresamente se señalen en el reglamento.

El Consejo Directivo Nacional lo proponemos integrado por 45 titulares y 10 suplentes. Habría que velar por conservar una distribución equitativa de consejeros de regiones y de Santiago. Este organismo elegirá, de entre sus miembros, un Consejo Ejecutivo compuesto por 15 dirigentes: el Presidente, el Secretario General, 5 vicepresidentes y ocho consejeros (de los departamentos más importantes).

Bajo la dirección del Consejo Directivo Nacional, se constituirán los siguientes departamentos: Organización con, al menos, 3 consejeros; Relaciones Nacionales; Finanzas; Relaciones Internacionales; Conflicto y Solidaridad; Educación; Cultura; Comunicación; Agrario; Femenino; Juvenil; Sector público; Seguridad social; Vivienda; Jurídico-laboral; Administrativo.

Esta estructura se conservará, guardando las proporciones del caso, hasta los niveles de comuna. La Central debería estructurarse, a niveles: regionales; provinciales; comunales. Para el caso de la Región Metropolitana es necesario la creación de un Consejo Metropolitano Regional, el que abarcará a los Consejos Provinciales que corresponda, más las instancias necesarias en los Cordones Industriales y en el Centro.

IV.- SOBRE LOS PRINCIPIOS DE LA NUEVA CENTRAL.

El movimiento obrero chileno, desde la época de la FOCH, ha tenido un definido carácter de clase. La CTCH y la CUT se guiaron por el principio de la lucha de clases, por lo tanto consideraban que su misión consistía no sólo en defender los derechos de los trabajadores y luchar por sus reivindicaciones inmediatas, sino también en proponerse como objetivo terminar con la explotación capitalista.

La Central Unitaria por definición debe agrupar a todos los trabajadores chilenos: obreros, campesinos,

empleados, técnicos, ingenieros, profesores, hombres, mujeres y jóvenes, activos, pasivos y aquellos a los cuales, hoy, se les niega el derecho al trabajo; sin distinción ninguna de raza, sexo, religión, ni ideologías. En definitiva, agrupar a todos los que viven de un sueldo y un salario y que necesitan unirse no sólo para defender sus derechos, sino que para, en base a esa unión, realizar una propuesta de transformaciones en la cual los trabajadores tengan un papel determinante. Es decir, a aquellos que compartan los principios de la Central Unitaria.

La Central Unitaria debe reivindicar el derecho a organizarse sin limitaciones, de tal manera que en los hechos rompa con la legalidad vigente, con el Plan Laboral, Códigos del Trabajo, Decretos ad-hoc, etc., es decir, que sea una derrota para la dictadura. Por tanto, cada organización creada por los trabajadores es legítima, cuando ella sirve a la lucha, para defender sus reivindicaciones y derechos; no importando personalidad jurídica o sujeción a normas que la dictadura ha querido imponer.

La Nueva Central, entonces, debe ser una lucha política e ideológica que debemos ganar, en contra de los intentos del imperialismo, de la burguesía, y la dictadura de imponernos su ideología a través de centrales ideológicas, paralelismo sindical, exclusivismo; en definitiva de la apatía ante la problemática sindical.

La Central debe conformarse en medio de una gran ofensiva por la sindicalización y la afiliación, que permita abarcar como movimiento sindical a la inmensa mayoría de los trabajadores chilenos.

Los principios básicos de la Nueva Central, deben ser:

- Clasista, en su sentido más profundo, guiándose siempre por el principio de la lucha de clases, es decir, asumiendo su misión de defensa de los derechos de los trabajadores, luchando por sus reivindicaciones inmediatas y proponiéndose como objetivo, terminar con la explotación del hombre por el hombre y marchar a una sociedad más justa.

- Democrática. Este principio debe estar presente desde la gestación contando con la más amplia partici-

pación de las bases sindicales. También esto debe expresarse en sus métodos de dirección, en su gestión y en su vida interna, que den pleno ejercicio a la democracia sindical. Es democrática, además, porque debe estar comprometida, hoy con la recuperación de la democracia, y en el futuro por su defensa y profundización; luchando siempre por ampliar los derechos y libertades democráticas de los trabajadores y del pueblo.

- Pluralista. Este es un principio que debe tener expresión en la Central. Históricamente, en el movimiento sindical han coexistido diferentes expresiones políticas, filosóficas, religiosas, etc., que han posibilitado, su enriquecimiento, han contribuido a su unidad y es el antídoto contra las centrales ideológicas.

La acción sindical - en su lucha con el capital - es causa y efecto de la participación política de la clase obrera. Defendemos el derecho de los dirigentes sindicales y sociales a pertenecer y ejercer la actividad política. La Central Unitaria no es apolítica, pero conserva su autonomía con respecto a los partidos políticos.

La apología del apoliticismo es un recurso de la ideología burguesa. Es el afán de dejar el campo libre a la política pro-imperialista y a la politiquería reaccionaria. Los independientes y autónomos son los sindicatos, los organismos de los trabajadores. Por tanto sus componentes tienen el derecho de practicar la actividad política. Lo importante es lograr que esa política corresponda a los intereses de su clase.

La Central mantendrá una posición independiente y autónoma con respecto a empresarios y gobierno; guiándose por el principio de la lucha de clases, sin perjuicio de que, en la lucha por la democracia y en la defensa de los intereses nacionales podremos acordar puntos de concertación.

- Representativa. No sólo por abarcar al máximo de trabajadores que potencializan la vida sindical del país, sino que en el sentido de dotarse de una estructura sindical a nivel de empresa, ramal y territorial tal, que le permita hacer frente a los desafíos que plantea el desarrollo de las fuerzas productivas. También que sea capaz de hacer frente en forma ágil y operativa al enorme poder de quienes disponen de la

propiedad de los medios de producción, los medios de comunicación, y que usan y abusan del aparato estatal y la protección del imperialismo.

- Nacional, por cuanto al defender los intereses de los trabajadores ha asumido un programa destinado a romper con las cadenas de la dependencia económica, que se manifiestan en la existencia de los grupos económicos monopólicos y en la inmensa Deuda Externa impuesta por el imperialismo.

- Humanista, porque debe estar profundamente comprometida en la defensa de los Derechos Humanos, en la lucha por la justicia, la libertad, por el derecho a la vida. Luchando resueltamente contra el fascismo, por ser una ideología terrorista.

- Internacionalista, porque ésta es una característica de los trabajadores del mundo, y los chilenos hemos sentido esto en los años de la dictadura; estamos por la más amplia relación de amistad y fraternidad de la Central con todas las organizaciones del mundo, conservando su independencia como Central, y respetando el derecho a la afiliación a organizaciones internacionales afines, de las Confederaciones y otras organizaciones de base. Somos profundamente solidarios con los pueblos que luchan contra el apartheid, el colonialismo, la dependencia y por la Paz y el desarme. Estamos por estrechar más aún la relación con los trabajadores de América Latina, con quienes nos une la imperiosa necesidad de soluciones a problemas comunes causados por el imperialismo.

V.- SOBRE EL PROGRAMA.

El pueblo chileno, al igual que la mayoría de los pueblos latinoamericanos, se desarrollan en un sistema que subsiste únicamente a través de la explotación y del dominio económico, social, político e ideológico que ejercen los monopolios sobre sectores mayoritarios de la población, especialmente sobre los trabajadores. Esto es el capitalismo, es el origen de la injusticia social y de la miseria que oprime a las mayorías nacionales.

El golpe militar del año 1973 no sólo aplastó las conquistas del movimiento popular logradas a través de largas luchas, en diferentes gobiernos y enriquecidas durante el gobierno constitucional de Salvador Allende, sino también creó nuevas bases para el funciona-

miento del capitalismo en el país. En esencia se trataba de encontrar una salida dentro del sistema a la crisis estructural por la que éste atravesaba, tanto a nivel mundial, como al interior de nuestro país. La lógica de esas transformaciones y el uso de la fuerza bruta trajeron como resultado que la economía nacional se reestructuró en función de los intereses del capital transnacional.

Nuestro pueblo conoce los métodos a través de los cuales el Estado dictatorial puso nuestra economía al servicio del capital extranjero: a) indiscriminada apertura comercial y financiera al exterior; b) reiterada y escandalosa privatización de las empresas estatales y del sistema financiero; c) elevación brutal de los niveles de explotación de los trabajadores; d) antipatriótico endeudamiento externo del país; e) represión y creación de una legislación que destruyó las conquistas logradas históricamente por los trabajadores; f) violación de todos los derechos humanos.

Nuestro pueblo conoce también los resultados reales de las políticas aplicadas:

- El producto per cápita del país, es decir lo que en promedio cada chileno consume, según cifras del BID, recién el año pasado alcanzó los niveles de 1970, estando aún por debajo del año 1972.

- El país se ha convertido en tributario del capital extranjero destinando al pago de la deuda externa el año 1986 el 72% de sus exportaciones (3.100 millones de dólares).

- Lo que el país exporta, más allá de la publicitada "diversificación del comercio exterior" es básicamente productos de baja elaboración manufacturera interna: harina de pescado, papel y celulosa, madera, fruta, aparte del tradicional cobre. Es decir productos que no constituyen una efectiva base productiva para el desarrollo integral de nuestra economía.

- Un acelerado proceso de concentración del poder económico en manos de unos pocos grupos económicos ligados al capital transnacional. Son los Angelini, los Matte, los Luksic, etc., etc., que mediante mecanismos como la privatización de las empresas estatales, el control de los recursos previsionales de los trabajadores, el respaldo del aparato del Estado y el

uso de los pagarés de la deuda externa se han apoderado de Chile.

- La otra cara de las transformaciones iniciadas el 11 de septiembre, es el Chile de los marginados, de los cesantes crónicos, de los subempleados, de los temporeros, etc., que hoy alcanza a un tercio de la población del país. Es también el Chile de los trabajadores superexplotados cuyos salarios reales son hoy un 40% menos que el año 1972, y con jornadas diarias promedio de 10,2 horas, incluyendo muchas veces sábados y domingos.

- El crecimiento de la explotación de los obreros ha sido extremadamente fuerte en los años del fascismo. Han actuado métodos específicos como prolongar la jornada de trabajo; aumento de la intensidad del trabajo; agravamiento de los problemas de la seguridad industrial; muertes y accidentes; y el pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor.

En tales condiciones se intensifican en nuestro país las tendencias generales del sistema capitalista, profundizándose la contradicción capital-trabajo. Hoy más que nunca los intereses inmediatos de los trabajadores aparecen nitidamente ligados a sus intereses históricos, pues no existe una alternativa a la transnacionalización de la economía en los marcos del capitalismo.

El movimiento sindical chileno ha tenido siempre una rica tradición de lucha, no limitada a reivindicaciones de tipo económico. Importante ha sido su aporte a la lucha política general, por conquistar derechos democráticos, libertad y justicia. Por ello, la Central Unitaria no deberá limitarse únicamente a las manifestaciones estrictamente sindicales, sino que deberá incorporar en su seno al resto de las manifestaciones de lucha de los trabajadores: la lucha de los pobladores, de las mujeres, de los jóvenes, etc. Además la lucha de los otros sectores: profesionales, técnicos, campesinos, etc., etc.

La Central Unitaria debe luchar por conquistar la plena independencia nacional en lo económico, social y político, contra la injerencia del imperialismo y la imposición de políticas implantadas por los grandes grupos económicos. Esta política ha generado el despiadado y permanente saqueo de nuestro pueblo, a través de la deuda externa y el dominio de las empre-

sas y monopolios transnacionales y del capital financiero internacional, además de organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Por un programa democrático en lo económico, social y político al servicio de las mayorías:

Nuestros esfuerzos deben estar orientados a conseguir el restablecimiento de los derechos perdidos, en estos últimos años, por la política económica y laboral de la dictadura. Los trabajadores debemos tener una directa participación en los asuntos que nos atañen en política de previsión, salud, leyes laborales, etc.

En definitiva, la nueva central debe, en base a un movimiento sindical fuerte y poderoso, estar comprometidos con una acción vigorosa por la justicia social, la libertad, la democracia económica, social y política, cultural y sindical. Dicho de otra manera, por el establecimiento de una sociedad justa, humana y participativa, en que el hombre y su dignidad en el trabajo sea el objeto del progreso, por tanto el centro de las preocupaciones fundamentales.

Derechos Políticos: Luchamos por la restitución de la soberanía popular sin restricciones ni tutelajes de ninguna especie; en particular manifestaciones como el Art. 8 y la prohibición de los dirigentes sindicales de militar políticamente. Luchamos por reivindicar el derecho a la participación de los trabajadores en la conducción política del Estado; por la restructuración democrática de las FF.AA., en base a la doctrina Schneider y Prats y, por ende, la participación de ellas en el desarrollo nacional. En definitiva erradicar totalmente los postulados y efectos de la Doctrina de Seguridad Nacional. Todo lo anterior deberá refrendarse en una nueva Constitución política.

Derechos Humanos: La Central Unitaria luchará contra toda forma de represión y tortura, por el término del exilio, por el esclarecimiento de todos los crímenes cometidos por la dictadura, contra la impunidad y por juicio y castigo a los responsables de torturas y violaciones de los derechos humanos. Lo anterior entraña un nuevo Poder Judicial, distinto radicalmente al actual, obsecuente a la dictadura. La central deberá exigir la creación de un programa social de protección a los familiares de las víctimas, y a quienes hayan sufrido cualquier atentado contra su

dignidad humana.

Derechos Económicos:

a) El Estado democrático, a través de las políticas económicas y, a través del Área de Propiedad Estatal, deberá gestionar las actividades económicas de carácter estratégico (militares, económicas, financieras y ecológicas), los servicios públicos (agua, electricidad, comunicaciones, servicios, etc.), la generadora de las principales fuentes de materias primas (cobre, petróleo, salitre, etc.) y las de comercio exterior. Estos objetivos sólo serán posible si el Estado reasume su papel de principal agente económico, impulsor de una activa industrialización y desarrollo de programas sociales complementarios, además de regulador y controlador de la actividad económica de los sectores privados.

b) Desarrollar otras formas de propiedad social de los medios de producción: mixta (conjunción de diferentes Áreas de propiedad), cooperativa y comunitaria (en que la comunidad, municipalidades, juntas de vecinos, centros de madres, etc., sean los propietarios).

c) En cuanto a la propiedad privada, deberá estar inserta en un plan nacional de desarrollo, dentro del cual deberá y podrá hacer un aporte a los imprescindibles cambios de estructuras a fin de vencer el subdesarrollo.

No podrá haber una justa distribución del ingreso para las mayorías si no se pone fin a los grupos económicos y al accionar de las empresas transnacionales, las cuales son los únicos y verdaderos expropiadores de la propiedad privada, al convertirla continuamente en propiedad transnacional.

Deberán establecerse formas de control y regulación, por parte de los trabajadores organizados, que impidan la concentración del poder económico en poderosos grupos económicos (tipo Matte, Luksic, Carter Holt, etc.) en sectores y niveles que los hacen incompatibles con la democracia.

d) Rescate, nacionalización y resguardo de las riquezas básicas y empresas estratégicas que hayan sido privatizadas y entregadas al capital transnacional. Sobre todo aquellas compradas con los pagarés de

la deuda externa. Exigimos la derogación inmediata de toda legislación atentatoria del patrimonio nacional y que tuerza el espíritu de la nacionalización del Presidente Allende (D.L.600, Código de Minería, etc.).

e) Diseñar un sistema de planificación que concretice una estrategia económica para reindustrializar el país, generar empleo, establecer salarios justos, mejorar la calidad de vida de la población y acabar con la extrema pobreza, marginalidad y empleo informal.

f) Recuperar la autonomía nacional enajenada en estos años. Es decir que las direcciones de política económica respondan a las necesidades nacionales y no a la imposición de organismos multinacionales y empresas transnacionales. Lo cual, en primer término, pasa por declarar una moratoria inmediata, para dar paso a un profundo estudio acerca de la imposibilidad económica, moral y política de pagar la deuda externa. Para los trabajadores esto significa: 1) desconocer toda aquella deuda originada por el sector privado y que haya o no asumido el Estado su aval; 2) aplicación de la doctrina Allende a los intereses usurarios cobrados durante todos estos años; 3) desconocimiento de todos los créditos utilizados en la implementación del aparato represivo de la dictadura; 4) descontar todos aquellos pagos inconstitucionales, efectuados por el régimen de Pinochet a las compañías cupríferas y petrolíferas yanquis.

Por tanto, postulamos que esas nuevas relaciones económicas, generen nuevos fundamentos de política exterior que incentiven relaciones diplomáticas, económicas, culturales, etc., con todos los países, adscribiéndonos a la política de la coexistencia pacífica de solución negociada a todos los conflictos internacionales.

En definitiva exigimos una economía orientada a asegurar el pleno empleo en condiciones salariales y de trabajo digno. Orientada a satisfacer las demandas básicas de la población en alimentación, vivienda, vestuario, recreación, salud y educación. Planteamos además el resguardo de los mares y bosques chilenos, no sólo como unidades económicas, sino como riquezas naturales que benefician a todos los chilenos.

VI. - LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES:

El derecho al trabajo. Los trabajadores chilenos defendemos nuestro derecho al trabajo, base única y primera para el desarrollo integral de la persona humana. Para lo cual exigimos la puesta en práctica de un vasto programa de empleo destinado a crear trabajos productivos, estables y justamente remunerados. Únicamente dar empleos no es la solución, sólo se repetiría ampliamente los actuales PEM y POJH; junto al trabajo necesitamos salarios dignos y que permitan alimentar a nuestras familias.

Debemos exigir reposición inmediata de los tarifados nacionales, por los cuales se han regido importantes ramas productivas. Asimismo por el derecho a la negociación con pliegos por rama.

En un futuro gobierno los trabajadores lucharemos además por recuperar el nivel de capacitación laboral, el cual deberá estar inserto en una nueva estrategia de desarrollo del país. Todo este programa deberá respaldarse con una nueva legislación laboral, que permita una real y efectiva protección de los derechos de los trabajadores: la estabilidad en el empleo, un salario digno, el reforzamiento de las organizaciones sindicales y la participación. Dicha legislación deberá resguardar los derechos del joven y de la mujer, como asimismo velar por el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad industrial y medicina preventiva. En general, todos aquellos derechos que permitan el desarrollo de lo mejor de sí que tiene cada trabajador: persona humana.

En relación a la seguridad social, exigimos el término del sistema de capitalización individual y restitución del principio de solidaridad. Término de los privilegios de las Cajas de Previsión de las FF.AA. y utilización de los ahorros que resulten de allí en salud, educación y vivienda. Utilización de las utilidades y ahorros de los fondos previsionales en la prestación de bienes sociales tales como casas, educación, cultura y salud.

En relación a la Legislación laboral, exigimos, en primer término, la derogación inmediata y total del actual Plan Laboral y todas las leyes complementarias de la dictadura. Planteamos la redacción de un nuevo Código del Trabajo, en el que esté garantizado el de-

recho a la negociación colectiva con participación de la Central; a los pliegos por rama; al libre ejercicio del derecho a huelga, como herramienta eficaz para la lucha de los trabajadores; el pleno derecho de los trabajadores a darse las organizaciones que estimen conveniente; y que contemple los derechos reconocidos internacionalmente.

El derecho a la alimentación. Hoy en Chile el consumo de calorías diarias per cápita no alcanza a las 2 mil 500, en contraste a las 2 mil 819 del año 1972. En Chile hay hambre. Los trabajadores lucharán por asegurar a cada familia el derecho a disponer de una canasta mínima, con la cual se puedan satisfacer las necesidades de los adultos trabajadores y de los niños que necesitan comer para ir a la escuela.

Derecho a la vivienda. Los trabajadores sufren en carne propia los problemas de la falta de vivienda, que ya alcanza a un millón de casas; y sufren el hacinamiento, que sólo en Santiago son 150 mil familias de trabajadores, las que sufren, además, la humillación de tener que sonreírle al dictador para recibir una limosna de 28 metros cuadrados. Por ello, lucharán por desarrollar un programa masivo de construcción de viviendas sociales, para disminuir así, progresivamente, el dramático déficit habitacional del país.

Establecimiento y desarrollo de programas de construcción masivas de viviendas efectivamente dignas para las grandes mayorías, en donde, por un lado el Estado asuma su rol activo en la construcción y, por otro lado, con la ayuda de éste, los propios pobladores, con sus organizaciones, sean protagonistas del logro de sus casas; como una manera de mostrar una alternativa al actual sistema que crea los deudores hipotecarios. Planteamos recuperar el Fondo de Vivienda creado a partir del 5% de las ganancias empresariales.

Derecho a la salud. Los trabajadores sufren en carne propia el Programa de Salud de la dictadura. No quieren más una salud para pobres y otra para ricos. Se lucha por derogar la nueva ley de salud y aumentar significativamente la contribución estatal al sector salud, a fin de mejorar y aumentar los hospitales, policlinicos y la calidad de las prestaciones, que hoy son muy malas.

Restituir al Estado una preocupación y rol preferente en el desarrollo de la salud pública, cuantitativa y cualitativamente suficiente para las necesidades de las mayorías nacionales. La salud debe asumirse como un derecho y, por tanto, debe abandonar el carácter de mercancía que le ha dado la dictadura. Por ello, la salud pública debe ser preponderantemente preventiva.

Derecho a la educación. El problema de la educación para la inmensa mayoría de los trabajadores se ha convertido en algo dramático. Los niños abandonan prematuramente las escuelas. Se ha extendido a costa de los pobres toda una red de colegios caros, convirtiéndose así la educación en un factor reproductor de la desigualdad. Por ello planteamos la lucha por el mejoramiento de la educación básica, media y técnico-profesional, además de hacer que las universidades estén al servicio de Chile, de su economía, y que sean organismos democráticos en el acceso a ella.

Realizar una profunda reforma educacional de modo tal que el Estado tenga una responsabilidad central para que el acceso a la educación esté dada en forma obligatoria en los niveles básicos y medios y en función de las capacidades y no en lo económico en la enseñanza superior, tal cual lo plantea el actual Colegio de Profesores.

Derecho a la cultura. Garantizar la expresión sin restricciones de ninguna especie de todos los grupos culturales, minorías étnicas y sectores sociales a través de sus propias expresiones.

- Desarrollo y difusión de la cultura nacional y abandono de la cultura del miedo, del individualismo y del snobismo característicos del actual régimen.

- Uso de los medios de comunicación en beneficio del desarrollo de la cultura.

- Expansión de la labor y la creación cultural a nivel de las fábricas y comunas.

- Impulso de las artes, letras, la música, la pintura y toda forma de expresión artística al interior de las fábricas y sectores populares.

Derecho a la previsión. En Chile hay 6 millones de trabajadores: activos, cesantes o que ya no buscan trabajo. Pero sólo un millón y medio cotiza en las

AFP y alrededor de 400 mil en las Cajas Previsionales. O sea, sólo un tercio de los trabajadores tienen la esperanza, si llegan a los 65 años, de poder jubilar. Y esto a pesar de la injusticia que supone para los más pobres el sistema de rentabilidad de las AFP, o los privilegios irritantes de las pensiones militares sobre las civiles.

Los trabajadores luchamos por terminar las injusticias y arbitrariedades del actual sistema de previsión, proponiendo a cambio un sistema basado en un espíritu solidario y fraterno, que asegure al sector pasivo una vida digna. Luchamos por un organismo de previsión social donde participen los trabajadores en su dirección; que resguarde las conquistas, reconocidas por la OIT de jubilar a los 60 y mujeres a los 55, y tomando en cuenta las condiciones de ciertas ramas tóxicas y de trabajo pesado, para jubilar antes.

Medio Ambiente. Producto de las desigualdades, los trabajadores viven en los lugares de más alta contaminación, sin áreas verdes, sin parques; trabajan en medios ambientes altamente contaminados de ruidos, smog, antihigiénicos, etc., todo lo cual daña la salud y es un factor más de muertes prematuras y enfermedades congénitas. Por ello los trabajadores lucharán por un respeto integral a la persona, que incluya la recreación, tener donde ocupar el tiempo libre, derecho al deporte, etc. Demandamos restituir las propiedades de los trabajadores, las logradas a través del convenio CUT-Gobierno Popular, como campamentos de descanso, balnearios populares, etc., algunos de los cuales han sido ocupados como campos de concentración.

Lo anterior describe la situación económica y social de los trabajadores; pero, no alcanza a describir la humillación diaria de la cesantía, de la superexplotación, de las jornadas de 10 a 12 horas de trabajo diario, de la prepotencia patronal, de la prostitución y drogadicción de los niños. Así, la Central Unitaria al luchar por las reivindicaciones de todos los trabajadores, asume el nitido convencimiento de que su conquista favorece al conjunto de la sociedad y que para conseguir la vigencia de este programa y ganar estas reivindicaciones, sólo un sistema democrático, ampliamente respaldado, podrá cumplirlo.

Los trabajadores chilenos hemos impulsado con vigor la movilización social de todos los sectores. Ella es, y debe seguir siendo, la herramienta irrenunciable

para conquistar y asegurar el cumplimiento de nuestras reivindicaciones. En esta lucha nos concertaremos con pobladores, estudiantes, profesionales, artistas, comerciantes, pequeños propietarios, con los cuales, históricamente, hemos levantado y convocado a importantes movilizaciones unitarias por la defensa de nuestros derechos.

A MODO DE CONCLUSION:

Nuestros planteamientos, que hemos querido entregar, están destinados y tienen como fin ayudar a la discusión en la base, dado que, como hemos señalado, la generación de la nueva central es una responsabilidad histórica. El organismo que creemos, si es ayuda a la organización, al funcionamiento, al aumento de la sindicalización, serán una ayuda efectiva a la lucha. Si ella, la central, asegura un carácter de clase, donde los intereses de los trabajadores estén a resguardo, habremos dado un paso que hoy, y en el futuro, se valorará. En cambio si creamos una organización estrecha, excluyente y débil; y a su vez que esté influida por intereses extraños a los trabajadores, esto pesará negativamente.

La historia del movimiento sindical chileno y sus tradiciones, obliga al conjunto de los trabajadores a luchar permanentemente porque esto prevalezca y se enriquezca.



Carta abierta a "El Mercurio"

Señor
Director de "El Mercurio"
Presente

Señor Director:

En páginas de crónica primero y luego en una nota editorial, su diario se ha referido a las posiciones de los comunistas en relación con las FF.AA. de forma tal que altera completamente nuestra verdadera posición.

Sus redactores han usado párrafos extraídos de su contexto para deformar burdamente el contenido de un artículo redactado por un colaborador de la revista "Principios", órgano del Partido que hoy debe editarse en la clandestinidad. El mismo redactor le ha enviado una nota denunciando la tergiversación. Nada de ello ha dicho su diario. Peor aún, se trata de una deformación intencionada dado que son de conocimiento público diversos pronunciamientos oficiales del Partido Comunista que no dan lugar a interpretaciones desatinadas como las que su diario trata de propalar.

Responderemos de nuevo a sus elucubraciones.

El Partido Comunista de Chile ha proclamado públicamente su política de Rebelión Popular de Masas fundada en el hecho evidente de que la dictadura intenta imponer y "proyectar" un sistema que impide la expresión de la voluntad democrática, que proscribe de la vida política a sectores muy importantes del pueblo y que usa de la fuerza represiva de modo constante y brutal para contraponerse a las demandas de la

mayoría. Enfrentar esta pretensión excluyente con la movilización de las masas y con todos los recursos que contribuyan a hacer valer la voluntad de la ciudadanía, esa es la esencia de la política de rebelión popular de masas.

¿ Tiene el pueblo derecho a encaminarse por esta senda ? Si, lo tiene. Lo reconoce así el pensamiento filosófico cristiano, lo proclama la Declaración de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas y lo funda igualmente la concepción filosófica marxista que es ciertamente de donde nosotros partimos.

Pero, además, lo respalda el buen sentido. ¿ Con qué derecho podría su diario escandalizarse de la rebeldía de las masas si al mismo tiempo aboga por la exclusión de partidos populares de la vida política, trabaja por imponer un sistema donde nuestros derechos son negados y pugna por nuestro ostracismo de la vida ciudadana ? ¿ Cree acaso compatible hacer todo eso y rasgar, enseguida, vestiduras porque el pueblo busca romper ese marco de hierro que pretende dejarlo inerte ?

Que su diario asimile la política de rebelión popular de masas a una vía armada no pasa de ser un ardid para cazar incautos. Ciertamente la política de rebelión popular de masas contiene una concepción de lo militar, consulta el desarrollo de la autodefensa de masas y el trabajo hacia los hombres que integran las FF.AA. Pero, es mucho más que eso y, en primer término, es el trabajo por la participación activa y actuante de la mayoría, en formas diversas, en la lucha por la libertad.

En cuanto a nuestro trabajo hacia las FF.AA., sus contenidos y concepciones han sido prolijamente expuestos en documentos oficiales del Partido. Citaremos uno, de alta relevancia: el informe a la Conferencia Nacional del Partido. Ahí decimos:

"La responsabilidad de los Jefes militares por lo sucedido hasta ahora, por lo que acontece hoy y por lo que ocurrirá mañana no puede ser eludida y nadie podrá pasarla por alto.

"Hoy, cuando el pueblo de Chile se propone librar nuevas y decisivas batallas contra la dictadura las Fuerzas Armadas se hallan ante un dilema tajante: o reprimen y se cubren de mayores ignominias o dan pasos que apunten a su reencuentro con el pueblo y sus

propias raíces de origen.

"El reencuentro de las FF.AA. con el pueblo sólo puede producirse en torno a una nueva doctrina militar democrática y a la democratización de las instituciones castrenses.

"Los comunistas no somos contrarios a los militares. No levantamos la bandera de la civilidad, que es simplemente una bandera burguesa... Si mañana se dan las condiciones para un gobierno popular, nacional, antifascista, antimperialista y antioligárquico, sin exclusiones y con participación militar, optaremos por un gobierno de tal tipo.

"El Partido Comunista piensa que las FF.AA. no sólo ni pueden ser insensibles o impermeables a la profundidad de la crisis que sufre el país, ni a la demanda nacional de que se vaya el dictador para que Chile vuelva a la democracia".

Sus redactores citan a nuestro colaborador de Principios en la nota editorial y tocan a rebato porque escribe: "Las FF.AA. son irreversibles en su formato actual". ¿ Lo consideran una afirmación demoníaca ? No obstante, es la verdad. Bajo Pinochet, las FF.AA. han sido infiltradas gravemente por la llamada "doctrina de seguridad nacional" bajo presión del imperialismo norteamericano. Han sido imbuidas de la idea de que su rol consiste en enfrentar un supuesto "enemigo interno", que, como lo ha repetido en su discurso del 11 de marzo, para Pinochet incluye a todos los demócratas. Son inducidas a creer que tienen que ejercer un rol tutelar sobre el pueblo y que tendrían el derecho de suplantarse la soberanía popular, para lo que se han insertado normas en la llamada Constitución de 1980. En estas condiciones, efectivamente no están jugando, no pueden jugar un rol positivo en una democracia que merezca el nombre de tal. Eso no lo ven solamente los comunistas. Lo ve cualquier demócrata y no en vano se ha desatado la discusión en torno a esta "doctrina" espuria y a sus expresiones en la Constitución pinochetista.

Las FF.AA. bajo el mando actual dan la espalda a los valores de que fueron portadoras en el pasado cuando, "con otro formato" contribuyeron a la lucha por la independencia. Es un deber patriótico, un deber social, hacer que retomen esos valores en las condiciones de la modernidad y que dejen de ser el partido armado de la oligarquía, que es a lo que han sido conducidas.

En la nota editorial de su diario se da con un gran acierto. Se dice: "...El asunto medular acerca del cual los chilenos deberían hacer su opción va más allá de esquemas económicos y sociales y dice relación con el régimen democrático mismo y con la naturaleza de las FF.AA. que se desee para el país".

Efectivamente.

Lo que está en juego es el carácter, democrático o no, del régimen que se construya en el futuro y, por consiguiente, de las FF.AA. que lo sirvan. Eso está, a su vez, en directa relación con el esquema económico y social.

Lo que Chile debe decidir es una globalidad. La institucionalidad fascista es coherente con la expoliación de la clase trabajadora, con la desnacionalización del país, con la servidumbre al capital transnacional, con el abismo creado entre los chilenos cuando un 20 por ciento se apropia de los dos tercios de la riqueza nacional y el 80 por ciento de ellos debe sobrevivir miserablemente con el tercio restante.

Si las FF.AA. toleran esto, como ocurre bajo el mando actual, es claro que debe cambiar la doctrina que las informa, que deben ser democratizadas. Y esa es una labor de los hombres de armas que reaccionen ante esta realidad dramática y de la sociedad, del pueblo. Esa democratización, diremos de paso, para evitar nuevas deformaciones, no tiene nada que ver con la renuncia a disciplinas o jerarquías propias de un órgano armado.

El afán de demonizar las posiciones de los comunistas ante los hombres de armas proveniente de la derecha (que sólo en los años recientes ha actuado para asesinar a tan destacados jefes militares como los generales Schneider, Prats y Bachelet, al comandante Araya y otros) tiene una razón clara que su editorial explicita. Se trata de cortar los eslabones que indirectamente continúan atando a través de concertaciones electorales u otras alianzas a la oposición democrática al PC.

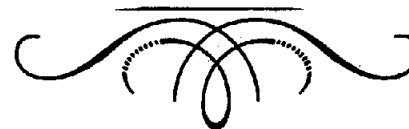
Esta es la médula de las tergiversaciones de su diario: se trata de dividir a las fuerzas democráticas en nombre de la "proyección" de un régimen y una

institucionalidad que sirve al gran capital. Para ello es clave también hacer "atrincherarse" a los hombres de armas para que no penetre el pensamiento democrático y progresista en sus filas.

Lo desafiamos, señor Director, a publicar completo el artículo que ha deformado. Eso servirá para medir la ética de su diario.

Lo saluda,

Redactor en jefe de
"Principios"



Respuesta a Sergio Muñoz

por Augusto Samaniego M.

(Artículo publicado en la edición del 21 al 27 de marzo de la revista "Análisis" de Santiago).

Habría deseado discutir el razonamiento político de Sergio Muñoz en otras circunstancias; es decir, coincidiendo en el esfuerzo por derrotar a la dictadura y llevar la construcción democrática hasta el fin. Ese debate, presidido por el respeto, exige que las aseveraciones se atengan a la verdad. En su artículo "Ahorrar vidas", de ANALISIS N° 214, Muñoz se refiere a jóvenes caídos en acciones violentas contra el régimen. Los presenta como poseídos de un heroísmo honesto, pero incapaces de razonar por sí mismos. Asegura que ellos son manipulados por "otros", aquellos que elaboran "las consideraciones estratégicas y tácticas". La imagen de presuntos estrategas, dogmáticos y cobardes, usando vidas ajenas, le sirve para adobar una ideología que choca con la objetividad del proceso social chileno.

Es mentira que partidos o militantes revolucionarios elaboren estrategias sin otro fin ni destino que avivar la "guerra interna" que proclama Pinochet. Falsedad y pobreza moral entraña el intento de establecer diferencias generacionales entre quienes luchan y caen en las multifacéticas acciones por la democracia. Demasiado simple es la conclusión de que Pinochet sólo quiere que los chilenos crean que "estamos en guerra". Porque la guerra contra el pueblo no es un voluntarismo o "hábil" invento del dictador. El fascismo, ni aquí ni nunca, ha surgido como un inexplicable o aberrante paréntesis en lo que algunos sueñan como "el curso natural de la democracia liberal". La dictadura surgió como guerra de clase contra el avance

de la democracia y el cambio social profundo. Esa, su naturaleza, no ha cambiado ni cambiará. Hoy, la dictadura busca institucionalizarse, conseguir incluso cierta "paz social", entendiendo que esas serían las condiciones más sólidas para su prolongación. Lo anterior, sin perjuicio de que el dictador persista en su chantaje de múltiples signos, dirigido en especial hacia las FF.AA. (diciéndoles "en mi caída todos se verán arrastrados"), hacia los grupos burgueses opositores (insistiéndoles "si se empeñan en sacarme, crean el más serio de los riesgos, es decir, darle fuerza al pueblo que cuestionará la base económica, social y política de la dominación del capitalismo monopolista"). Ese es el contexto que ha llevado a los representantes del gran capital, de dentro y de fuera del gobierno, a trazarse la perspectiva de la negociación del "consenso". Suponen que cosmetizarán el régimen, asegurando la explotación capitalista bien protegida por la fuerza y que el pueblo se someterá a observar cómo en las cumbres se habla de democracia en tanto "el arte de lo posible", de lo que no incomoda a la superexplotación. Tan claros están, que ya en 1986 un dirigente moderado explicaba: "El problema del PC va más allá de ... la teoría de 'todas las formas de lucha'. Aunque renunciara explícita y formalmente a dichas posiciones, al PC no se le puede dar cabida en los acuerdos... porque molestaría a 'la negociación con las FF.AA.'". Muñoz oculta estos hechos, que expresan (mal que le pese) las regularidades de la lucha de clase, tergiversando la política revolucionaria.

Quiénes son los que afirman que al régimen "no queda otra alternativa que enfrentarlo en el terreno de las armas"? ¿Qué situación concreta invita a analizar, en base a tales falsedades? Ningún revolucionario, ningún demócrata caído ha actuado afirmando que al régimen se le enfrenta sólo con las armas. Quienes decidieron destruir instrumentos de propaganda y de represión de la dictadura, lo hicieron cuando crece la conciencia pública y la acción de masas contra el fraude. Es grosero que se pregunte "¿A quién debemos creer?" ante actos de muerte que llevan el sello del terrorismo de Estado. Con igual actitud, pide consejos para identificar "los bombazos... de unos y de otros" y "las manos moras que actúan desde las sombras". Los chilenos y chilenas sin casa, cesantes, allanados, saben reconocer los vehículos y formas de la represión, el fraude, la dádiva y amedrentamiento de

la acción municipal o de "seguridad"...¿ Desconcierta a Muñoz que no se conozcan protestas populares contra los apagones o contra la distribución de alimentos, a pesar de ser delitos contra la propiedad? Tal vez, a un alto nivel de abstracción, encuentre menos confusa la pregunta de Brecht: "¿Qué es más delito, asaltar un banco o fundar un banco?". Por cierto, a Muñoz le preocupa la "eficacia" política. Rechaza los "ideologismos" porque podrían alentar la inestabilidad socio-política. Concluye que es "contrario a los intereses del pueblo" oponerse en todas las formas a los aparatos de la represión. Ideologismo ineficaz y falso humanismo resulta de vender ilusiones sobre "salidas" históricas que hagan pagar al pueblo los costos humanos del pragmatismo superficial o claudicante que, en verdad, intenta postergar la solución democrática a la crisis, traspasar a otras generaciones los costos de la libertad. Caidos por responder a los torturadores ha habido desde el primer día, en las cárceles y calles, en los cerros de Chena, en los rayados, ingresos al país y mucho más. ¿Es sólo una forma de respuesta a la opresión la que se estigmatiza? ¿De verdad le preocupa tanto que se cree un clima de "inestabilidad" porque aquello cohesiona a los pilares de la dictadura? Diga, entonces, si autoriza al pueblo a escribir en revistas o en algún panfleto sus demandas, pero a condición de no reclamar verdad con justicia. Todo tiene su límite - dirá -, puesto que tales reclamos asustarían más aún que las acciones de denuncia y de autodefensa a quienes detentan el "rol tutelar" de la dictadura... o mañana de la "democracia protegida".

La actitud con que Salvador Allende respondió a la violencia golpista muestra que el fundamento objetivo del razonamiento político es inseparable de la ética. El Presidente de Chile actuó para enseñar que con el fascismo no se puede negociar su propio fin ni erradicación. No fue ni heroísmo insensato, ni mero testimonio. Convocó, en el primer minuto, a la paciente pero consecuente construcción de la unidad, de la correlación de fuerzas necesaria. Supo que la movilización de las mayorías exige preparar la fuerza decisiva que impida que la voluntad soberana sea escamoteada. (Muñoz, quien ha recomendado lecturas de Gramsci, no debiera ironizar acerca de esos argumentos "universalistas"). Condenando o condicionando la rebelión popular, no habrá "ingobernabilidad, desobediencia" capaz de ganar la democracia. Son frases huecas.

Tampoco, ningún "No" significará ; Basta ! (Muñoz, ANALISIS Nº 217).

Es el camino de la conciliación el que multiplica los padecimientos y desangra, moral y físicamente. Esto lo entendieron - al menos desde los combates unitarios, protestas y paros del '86 - los personeros del imperialismo. Preocupados porque la rebeldía popular ha hecho que la dictadura no garantice estabilidad y, al contrario, abra una verdadera perspectiva movilizadora de ruptura institucional, ellos optaron por alentar la concertación entre opositores "moderados" y cúpulas del régimen. Así, les parece posible disfrazar la guerra anti-pueblo de procesos institucionales, que serían el modo de aplicar la doctrina actual del Conflicto de Baja Intensidad en Chile. Es decir, armar el tinglado para escamotear la democracia, para que funcione un presidente, un congreso designado bajo el rol tutelar del Consejo de Seguridad Nacional y el monopolio de las armas al margen de la soberanía del pueblo.

★ ★ ★

económico

"Resumen económico primer trimestre 1988"

por Hugo Fazio

- (- El petitorio del Comando Nacional de Trabajadores.
- La lucha y la organización de los trabajadores frutícolas.
- Dictadura redujo el precio de compra del trigo.
- ¿ Una casa cada ocho minutos ?
- Deudas habitacionales: nueva operación "cosmética".
- Continúan los despidos de profesores.
- Crecen utilidades de grandes intereses económicos.
- Sector forestal: alta concentración monopólica.
- Plan de Privatizaciones 1988.
- Licitación CTC: otro escándalo.
- Terminan con monopolio estatal en la Gran Minería cuprífera.
- Laboratorios de EE.UU. buscan control del mercado chileno.
- El paquete económico de "año nuevo").

Los profundos antagonismos sociales desarrollados bajo el fascismo, así como la propia campaña electoral dirigida a la perpetuación del régimen, han colocado, durante los primeros meses del año, en un lugar muy destacado los problemas de gran parte de los chilenos. Entre los asuntos más debatidos estuvo el bajísimo nivel de las remuneraciones (realidad que incluso debió ser constatada por diferentes dirigentes empresariales); la disminución en los presupuestos educacionales; la reanudación de los despidos de profesores; el drama habitacional; las impagables deudas hipotecarias; las altas tasas de explotación de los trabajadores en esferas en pleno proceso de expansión (es el caso, por ejemplo, del sector frutícola); el encarecimiento de artículos esenciales para la población (pan y locomoción); la disminución en el precio de adquisición del trigo; la indexación a las unidades de fomento de bienes como la harina y el trigo; etc.

En el trimestre se desarrollaron numerosas acciones reivindicativas. La Confederación Campesina "El Surco", por ejemplo, informó que en la última temporada entre los trabajadores frutícolas hubo más de cien paros en demanda de mejoramientos salariales. El 22 de febrero se desarrolló el primer paro interprovincial frutícola con la participación de trabajadores de la Región Metropolitana y de las provincias de O'Higgins y Aconcagua. Crecieron, de igual modo, los conflictos realizados en los marcos de la legislación laboral fascista. Con la particularidad, en esta oportunidad, que un porcentaje mayor de ellos finalizó con victorias relativas. Las acciones mencionadas muestran el nivel de lucha existente en importantes capas de la población. Sin embargo, no son suficientes para cambiar el cuadro general, tanto político como económico. La política salarial de la tiranía y del Fondo Monetario Internacional sólo podrá ser derrotada con grandes movimientos nacionales o sectoriales. Al finalizar el trimestre, el Comando Nacional de Trabajadores tenía presentado un petitorio al régimen demandando un reajuste general en los sueldos, salarios y pensiones de 26%, un salario mínimo de 25200 pesos y aumentos en las asignaciones familiares y de locomoción. Los académicos de la Universidad de Chile, por su parte, reclamaban un mejoramiento en sus remuneraciones de 30%.

Los niveles de superexplotación de los asalariados son realmente gigantescos. El salario mínimo legal disminuyó en términos reales en un 45,7%, entre septiembre de 1981 y febrero de 1988, si se utiliza como deflactor el Índice de Precios al Consumidor oficial. Dicha reducción alcanza a un 54,4%, si la deflación se realiza en base al "IPC de los pobres", del Programa de Economía del Trabajo. La capacidad de consumo en alimentos imprescindibles, por tanto, se restringe. De acuerdo a antecedentes proporcionados por la Asociación de Panificadores de Santiago, si un trabajador podía adquirir con un salario mínimo, en

car diferentes expedientes para generar utilidades en el sistema y así sanear su situación. Un nuevo mecanismo de obtención de ganancias han pasado a ser las operaciones de capitalización de deuda externa. En 1987, el 26% de las utilidades totales tuvieron este origen.

Cuadro N° 2

RESULTADOS DEL SISTEMA FINANCIERO: 1987.

(Fuente: Superintendencia de Bancos. En millones de pesos).

	Total Sistema	% Variación (%)
Excedente después de impuestos	71.551	63,4%
Recompa de Cartera al B.Central	37.061	292,4%
Colocaciones Vendidas al B.Central	794.830	1,8%
Utilidad neta	17.527	5,2%

(%) En comparación con 1986.

El primer trimestre de 1988 arrojó un resultado altamente positivo para la banca acreedora. El superávit en la balanza comercial del bimestre enero-febrero llegó a 401,3 millones de dólares. En enero-febrero de 1987 había sido de 99,9 millones de dólares. Este excedente, superior al previsto en las proyecciones oficiales, tiene su origen en parte importante en el alto precio registrado por el cobre en los mercados internacionales. Mientras tanto, las reservas del metal siguieron disminuyendo. Este proceso de reducción en el volumen de las reservas se inició en 1984, para adquirir un gran impulso desde los inicios de 1987. "El cobre almacenado en las bolsas (de metales) en febrero pasado alcanzó a 78.000 toneladas - editorializó "El Mercurio" (22-3-88) -, lo que es casi la cuarta parte de lo que existía por igual concepto en enero de 1987".

El alto excedente comercial y la postergación en el pago de los intereses de la deuda externa del presente año, creó una situación sin sobresaltos inmediatos en materia de financiamiento externo. La preocupación del equipo económico fascista se concentró durante el trimestre en esta esfera, por eso, en negociar con el Comité de Bancos Acreedores las fórmulas de financiamiento para el año 1990.

Cuadro Nº 3

SUPERAVIT EN LA BALANZA COMERCIAL.

(Fuente: B. Central. En millones de dólares. 1988 cifras provisionarias).

1984	293,0	1987	1.229,4
1985	849,4	1987, enero-febrero ..	99,9
1986	1.099,7	1988, enero-febrero ..	401,3

EL PETITORIO DEL COMANDO NACIONAL DE TRABAJADORES.

Las confederaciones, federaciones, agrupaciones y sindicatos nacionales miembros del Comando Nacional de Trabajadores resolvieron aumentar sus demandas salariales, para ajustar su petitorio a las variaciones experimentadas en el costo de vida. Por eso, se acordó exigir un salario mínimo mensual de 25.200 pesos, en vez de los 20.000 reclamados hasta ahora. De igual manera, se decidió demandar un reajuste general en los sueldos, salarios y pensiones, incluyendo el Plan del Empleo Mínimo y el Programa Ocupacional para Jefes de Hogar, de 26%. De otra parte, decidió luchar por una asignación familiar equivalente a medio kilo de pan diario por carga, lo que triplica su monto actual, y una bonificación de movilización igual a un pasaje diario en la locomoción colectiva durante 24 días en el mes.

Obtener un aumento en sus remuneraciones es la primera preocupación de los trabajadores ocupados. Una encuesta realizada entre trabajadores activos por Sur Profesionales y Cetra/Ceal (Centro de Estudios y Asesorías Laborales) demostró que más de la mitad de los encuestados indicó el nivel de las remuneraciones como su problema prioritario. Un 50,7% de la muestra, en efecto, ubicó como el cambio a producir más urgente el incremento en los salarios. La mayoría de los entrevistados se pronunció a favor de huelgas, paros nacionales, manifestaciones callejeras y declaraciones públicas como formas de acción para demandar el mejoramiento. Más de la tercera parte expresó su acuerdo, con este objeto, en la ocupación de los lugares de trabajo. La investigación probó, de otro lado, que los trabajadores están decididamente por una sola central sindical. Un 63,7% de los encuestados se pronunció en su favor. Entre las organizaciones nacionales actuales el respaldo claramente mayoritario lo recibió el Comando Nacional de Trabajadores.

En la investigación, realizada con una muestra en que sólo un 17% del espectro considerado tenía una remuneración de hasta 11.000 pesos mensuales, no se expresó entre los problemas más a-

cuciantes el incremento en el ingreso mínimo. Sin embargo, son múltiples los hechos que atestiguan la necesidad imperiosa de elevarlo drásticamente. Juan Pablo Aristegui, miembro de la Unión Social de Empresarios Cristianos, se manifestó públicamente por un salario mensual mínimo, reajutable, de treinta mil pesos, monto que triplica el vigente hoy. De acuerdo a antecedentes proporcionados por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, casi una tercera parte de los trabajadores recibe un ingreso mensual de menos de 15.000 pesos. Y un 57,6% tiene una renta menor a los 25.000 pesos, suma considerada como la necesaria en muchos estudios para adquirir una canasta familiar básica. Es decir, casi las tres quintas partes de los asalariados perciben menos del ingreso mínimo demandado por el Comando Nacional de Trabajadores.

La pensión mínima es igualmente miserable. Dirigentes sindicales han mostrado gráficamente la fuerte pérdida experimentada en su poder adquisitivo. "En 1972 - han señalado -, la pensión mínima era de 16.000 escudos, lo que hacía posible comprar 375 kilos de pan, 55 kilos de papas y 782 litros de leche. Hoy en día - han agregado - con una pensión mínima (8.702 pesos) se adquiere únicamente 82 kilos de pan, o bien 200 kilos de papas y 120 litros de leche" ("Apsi", 1-2-88).

Las bajas remuneraciones son una de los factores centrales que inciden en la disminución experimentada en el consumo privado nacional. Entre 1981 y 1987, este indicador se redujo de 745 a 68,4, como porcentaje del Producto Geográfico Bruto. Si se considera la redistribución regresiva registrada, al mismo tiempo, en el ingreso y, por ende, en la capacidad de consumo de las grandes mayorías nacionales, el deterioro sufrido por la generalidad de los asalariados es aún mayor. La baja en el consumo por habitante es la materialización de los compromisos suscritos por el régimen con el Fondo Monetario Internacional. El problema es dramático, dado que el consumo per cápita diario en calorías se encuentra desde 1975 por debajo del mínimo internacional necesario calculado por la FAO.

La reducción en las remuneraciones se ha impuesto mediante el terror y gracias a la aplicación del llamado Plan Laboral, que dificulta extraordinariamente la defensa por los trabajadores de sus intereses en los procesos de negociación colectiva. De otra parte, la política fascista ha provocado la atomización del movimiento sindical. De una población activa calculada en 4.700.000 personas, apenas un 11% (poco más de 500.000) se encuentra organizada sindicalmente. La situación de la enorme legión desorganizada es particularmente dramática. Por ello, no resulta de ninguna manera extraño, que la gran mayoría de los trabajadores se encuentre viviendo, como ha señalado el secretario general de

la Asociación de Abogados Laboralistas, Enrique Díaz, en "una situación extraordinariamente crítica", lo que "jurídicamente - a-ñadió - conocemos por estado de necesidad" ("Solidaridad", 30-12-87).

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Manuel Feliú, destacó la fuerte reducción experimentada en las remuneraciones reales, señalando que, debido a ello, "estamos ahora en una posición similar a Taiwan y Corea del Sur con costos laborales bajos para poder competir internacionalmente" ("El Mercurio", 2-1-88). La superexplotación de los trabajadores es un componente fundamental en la política económica fascista. De esa manera asegura grandes utilidades y la expansión de un grupo reducido de poderosos intereses económicos. Ello contribuye, de otra parte, a generar un mayor monto de excedentes a destinar al pago de los intereses de la deuda externa. El petitorio elaborado por el Comando Nacional de Trabajadores recoge una gran y urgente exigencia nacional. La dictadura, mientras tanto, rechaza explícitamente otorgar un reajuste general. Su ministro de Hacienda, Hernán Büchi, declaró ante el Consejo Económico y Social que otorgar un reajuste legal significaría "pagar una cuenta a seis meses plazo" ("Hoy", 14-3-88). Sólo la lucha de los trabajadores y del pueblo podrá echar por la borda esta política funesta.

LA LUCHA Y LA ORGANIZACION DE LOS TRABAJADORES FRUTICOLAS.

La temporada frutícola ha marcado un crecimiento, aunque todavía insuficiente, en la lucha y la organización de los trabajadores del sector. Entre las movilizaciones realizadas destacó el paro del 22 de febrero de los "temporeros" de las provincias de O'Higgins, Aconcagua y la Región Metropolitana exigiendo "un pago de 1.500 pesos diarios por trabajador, que al término de la temporada frutícola se cancelaran cinco mil pesos a los temporeros y que se otorgara un subsidio de cesantía con recargo al empleador" ("El Mercurio", 2-3-88). El "boom" frutícola descansa, en no pequeña medida, en los elevados índices de superexplotación de los trabajadores. "Un trabajador en el campo chileno - ha comentado la revista "Hoy" (15-2-88) - está ganando como máximo 3,50 dólares por día de trabajo. En Estados Unidos, la hora de trabajo en el campo, vale de siete a ocho dólares".

La superficie frutícola nacional se ha duplicado desde 1982, pasando de alrededor de 70.000 a 130.000 hectáreas. Las explotaciones del sector se extienden entre la Tercera y la Séptima Región. La cosecha se inicia en diciembre en Copiapó, para finalizar en la región de Maule en abril. La Comisión Interprovincial de Trabajadores Temporeros estima que estas actividades ocupan a 250.000 trabajadores ocasionales. Uno de los asuntos que más pre-

Los cambios en el agro son múltiples. También se ha producido - como señaló el director del Grupo de Estudios Agro-Regionales, GEA, de la Academia de Humanismo Cristiano, Enrique Mlynarz - "una reestructuración del espacio geográfico rural". Han surgido numerosas poblaciones callampas rurales. "Los campesinos desplazados de la tenencia de la tierra, o bien los que se han allegado a otras zonas, prácticamente se han tomado los caminos en desuso, los sitios fiscales abandonados, o bien se han instalado en las laderas de los cerros" ("Análisis", 22-2-88). Por su parte, el agrónomo Emiliano Ortega indica: "Son espacios extraordinariamente limitados, estrechos, pobres en recursos, que se parecen a los campamentos marginales urbanos" ("Análisis", 18-1-88).

El despertar pleno del proletariado agrícola será un hecho de profundas implicancias nacionales.

DICTADURA REDUJO EL PRECIO DE COMPRA DEL TRIGO.

De "burla cruel", calificó el presidente honorario de la Asociación Nacional de Productores de Trigo, Carlos Podlech, el nuevo precio de compra del cereal fijado por la dictadura a cen-
tar del 15 de enero. El régimen, ante la protesta de los afectados, subió sólo ligeramente la cotización establecida por la Comercializadora de Trigo S.A., Cotrisa. Pero el nuevo precio, como reconoció el propio ministro de Agricultura, Jorge Prado, "significa de todos modos, una baja del 19% en términos reales, respecto del valor de comercialización del cereal en la temporada pasada" ("El Mercurio", 2-1-88). El mecanismo de precio establecido arranca de un punto de partida muy bajo, para luego irse reajustando mes a mes de acuerdo a una tabla dada a conocer por Cotrisa. Se trata así, manifestó Jorge Prado "de incentivar a los agricultores que puedan hacerlo para que guarden trigo que cosechen para los próximos meses". Este sistema perjudica a la gran mayoría de los productores, entregando nuevas fuentes de negocios locrativos a los intermediarios. Como en todo el esquema oficial, las grandes masas de la población son perjudicadas. La indexación del precio de la harina y del trigo a la Unidad de Fomento repercutirá necesariamente en el precio del pan. La tabla dada a conocer por Cotrisa - señaló en una carta enviada al diario "El Mercurio" (11-1-88) el agricultor Juan Izquierdo - "arroja una rentabilidad bruta anual de Unidad de Fomento más 22,7% (tasa anualizada) para quienes guarden trigo por el período de diez meses. Tal brutal incentivo para la guarda de trigo - agrega Izquierdo - sólo favorecerá a los grandes poderes constituidos básicamente por empresas acopiadoras y molineras, en desmedro de los agricultores, quienes, por diversas razones de orden financiero, tecnológico y físico, no están en condiciones de afrontar este desafío, lo que provocaría el automático traspaso de

cupa a la mencionada organización es que durante varios meses en el año los trabajadores "temporeros" quedan sin ocupaciones, "en la calle".

El crecimiento espectacular del sector frutícola se da, como acontece en la generalidad de las actividades nacionales, en medio de un contexto de aguda polarización social. Los récord de superficie plantadas, los aumentos constantes en los volúmenes exportados, las altas rentabilidades empresariales, tienen como contrapartida la realidad de los trabajadores del sector. "El boom de las exportaciones de fruta - comentó, con razón, "Análisis" (22-2-88) -, es también el boom de la explotación. Miles de trabajadores, fundamentalmente mujeres y niños - agrega la publicación - son explotados por los exportadores de la fruta. Se les pagan salarios miserables. La jornada de trabajo casi nunca dura ocho horas. Se extiende de acuerdo a las necesidades de la fruta en ese momento. La fruta, en su inmensa mayoría destinada a la exportación no puede esperar, ... la jornada de trabajo debe extenderse lo que sea necesario. Muchas veces la jornada de trabajo se alarga hasta pasadas las 12 de la noche. Al día siguiente, entre 8 y 8,30 de la mañana, nuevamente deben estar trabajando". La proporción de mujeres y niños en el total de los trabajadores temporeros es muy elevado. De acuerdo a antecedentes proporcionados por la mencionada Comisión Interprovincial, en la provincia de Talagante, en las cercanías de la Región Metropolitana, de los 18.000 trabajadores temporeros un 70% son mujeres y otro 20% está constituido por niños de entre 12 y 16 años.

El desarrollo del sector frutícola ha incidido fuertemente en los cambios registrados en el proletariado agrícola. "El proletariado (agrícola) - ha indicado "Análisis" (18-1-88) - es hoy muy distinto al de hace quince años: entonces se vinculaba preferentemente a una empresa; hoy, se estima, un 70% de todos los ocupados está en el llamado "empleo precario". Es también un asalariado más joven, de mayor educación que sus padres, y en parte importante formado por mujeres (especialmente durante la cosecha)". Ayer, el proletariado agrícola se concentraba preferentemente al interior de los predios. En la actualidad, en cambio, se encuentra en alta proporción fuera de ellos. La corriente migratoria tradicional se ha modificado. A diferencia de un pasado reciente, las masas migratorias buscando trabajo se desplazan de la ciudad al campo. En el valle del Aconcagua, donde se calculan trabajan más de 30.000 "temporeros" frutícolas, "más de la mitad llega desde Valparaíso, Santiago y otras ciudades del sur..." ("Hoy", 15-2-88). Ello ha cambiado igualmente las relaciones salariales predominantes en el agro. El trabajador a la vieja usanza percibía un porcentaje importante de sus remuneraciones en "regalías". Las nuevas explotaciones pagan totalmente en dinero.

este "subsidio" estatal a las empresas antes mencionadas". El empresario agrícola Domingo Durán, por su parte, manifestó, al analizar la tabla de precios establecida: "Es una escala ...veloz. La gente que tenga dinero podrá acopiar trigo o los molineros que tengan bodegas disponibles lo podrán hacer también. Y con sólo acopiar trigo podrán hacer el negocio más brillante de la historia" ("El Mercurio", 11-1-88). Es decir, una vez más se han adoptado medidas en beneficio de una minoría y en particular del reducido número de sociedades que controlan la molinería y que se encuentran agrupados fundamentalmente en la poderosa Asociación de Molineros del Centro. En cambio, el bajo precio inicial afecta de inmediato, de preferencia, a los pequeños y medianos empresarios obligados, por su precaria situación económica, a comercializar a la brevedad su producción. "Nos preocupa el precio de partida - recalcó Domingo Durán - porque es con el que venden todos los pequeños propietarios y productores agrícolas". Esta reducción en el precio a los productores no beneficia así en nada a los consumidores.

El propósito declarado de la dictadura es, además, desestimar la producción futura de trigo. La reducción impuesta en el precio de adquisición se añade a la establecida igualmente antes de iniciarse la temporada agrícola 1986-1987. Si se consideran de conjunto ambas disminuciones, la caída en el precio del trigo, con relación a la temporada 1985-1986, es superior a un 30%. El trigo nacional se está adquiriendo muy por debajo de las cotizaciones actuales en los mercados internacionales. "El precio fijado en estos momentos al trigo - denunció Carlos Podlech - es menor que el que se está pagando al agricultor norteamericano, en circunstancias de que los agricultores chilenos debemos importar desde la maquinaria hasta los insumos más insignificantes con el encarecimiento consiguiente ... además hay que recargar fletes, seguros e impuestos" ("El Mercurio", 9-12-87).

Como era de esperar la política de reducción en los precios de compra, implementada desde hace ya dos años, se ha manifestado en los volúmenes de producción. El ministro de Agricultura adelantó que la cosecha de la temporada 1987-1988 será de más o menos 16.200.000 quintales métricos. En la temporada precedente la cosecha fue de 18.741.000 quintales métricos. La caída, por lo tanto, en relación con la temporada anterior fue de 13,5%. Se volvió de este modo a los niveles del año agrícola 1985-1986 (16.258.000 quintales métricos). Las nuevas disminuciones en el precio conducirán a nuevas reducciones en las siembras y en la producción. El vicepresidente de la Confederación de Productores Agrícolas, Adolfo Larraín, indicó que los precios fijados "decentivarán los cultivos", porque "algunos agricultores van a tocar los lindes de un negocio que puede causar incluso pérdidas". Larraín coincidió en que los más afectados serán los pequeños y

medianos productores "porque no tienen medios para adquirir semillas certificadas ni para adquirir insumos tales como abonos, insecticidas y fungicidas" ("El Mercurio", 8-12-87).

Cuadro N° 4

PRODUCCION DE TRIGO

(Fuente: I.N.E. En miles de quintales métricos)

Año Agrícola 1982-83	5.860	Año Agrícola 1985-86	16.258
Año Agrícola 1983-84	9.883	Año Agrícola 1986-87	18.741
Año Agrícola 1984-85	11.647	Año Agrícola 1987-88	(*)16.200

(*) Estimación del ministro de Agricultura.

Los "excedentes" en la producción de trigo - y la baja en su siembra - constituyen uno de los mayores crímenes de la dictadura, ya que se originan directamente en el bajo poder de consumo de una gran parte de la población. El trigo aporta el 44% del promedio de calorías ingerido por los chilenos, porcentaje que aumenta al 60% en el caso de la mitad más pobre del país.

¿ UNA CASA CADA OCHO MINUTOS ?

La propaganda electoral de la dictadura puso en el primer plano del debate público el tema de la vivienda. Los anuncios oficiales afirman frases del tipo de "Chile, una casa una familia" o "Una casa cada ocho minutos". El ministro de Vivienda, Miguel Angel Poduje, tuvo la desvergüenza de sostener que "éste es el régimen que más ha construido en la historia de Chile" ("Hoy", 18-1-88). Las afirmaciones de la tiranía no corresponden a la verdad. A partir del golpe fascista el déficit habitacional ha crecido; el promedio anual de viviendas construidas por mil habitantes es inferior al de los gobiernos de Allende, Frei y Alessandri.

No es verídico que se haya construido en los años de dictadura una casa cada ocho minutos. Como han señalado los investigadores del Area de Vivienda del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), "las porfiadas cifras son irrefutables para poner la mentira al descubierto" ("Análisis", 18-1-88). En Chile, sólo en el año 1971, durante la presidencia de Salvador Allende, se construyó una vivienda cada menos de ocho minutos. La edificación de ese año alcanzó a la cifra record de 86.972 unidades, una vivienda cada 6,04 minutos. En cambio, según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la construcción habitacional promedio anual de los años de fascismo

ha llegado sólo a 33.745 viviendas. Una cada 15,06 minutos. Ello a pesar de que las estadísticas oficiales introdujeron una distorsión en la realización de comparaciones con períodos precedentes. Hasta 1982, se contabilizaban únicamente las viviendas de más de 36 metros cuadrados. Desde 1983, se consideran las mayores a 28 metros cuadrados.

Igualmente no es real la afirmación de "una casa, una familia". El déficit habitacional creció y aumentó, por consiguiente, el número de allegados. Un estudio efectuado por Joan Mac Donald estimó que el déficit habitacional alcanza a 748.776 viviendas faltantes y a otras 368.219 consideradas como deficitarias, dada sus malas condiciones. En resumen, el déficit global sobrepasa las 1.116.000 viviendas. Si se considera que el déficit habitacional en septiembre de 1973 era de más o menos 450.000 viviendas, se concluye que, durante los años de dictadura, aumentó en 666.000 unidades. La causa reside en que simplemente se ha construido por debajo de las necesidades. El economista de Cieplan, Juan Pablo Arellano, calcula que en Chile se forma un nuevo hogar cada seis minutos y medio. En consecuencia, el ritmo de construcción habitacional del régimen sólo alcanza para atender el 42% de las necesidades derivadas del crecimiento vegetativo de la población. El porcentaje atendido baja todavía más si se suman las viviendas que se requiere reemplazar por su deterioro natural. El presidente del ICAL, arquitecto Miguel Laverne, explicó, de otra parte, que "no es lo mismo haber construido 40.000 viviendas en 1962, cuando Chile tenía una población de 8 millones de habitantes, que levantar las mismas 40.000 casas cuando la población crece a doce millones. El actual gobierno - añadió - sólo compara los "logros en vivienda" con lo ocurrido hace más de treinta años" ("Cauce", 17-12-87).

Durante el gobierno dictatorial no sólo disminuyó el número de viviendas construidas, sino que, además, se redujo su tamaño y bajó su calidad. "Este régimen - han comentado los investigadores del Area de la Vivienda de ICAL - nos ha "taivanizado", al introducir a los chilenos en cajas de fósforos o latas de sardinas... Se solidifica la miseria al revestir de hormigón armado las mismas mediaguas marginales. Muchas veces se entregan sin divisiones entre las piezas para abaratar costos. Una encuesta realizada el año 87 en La Pintana revela que casi el 30% de las casas entregadas por el régimen no tienen divisiones interiores, el 43% no tiene una pieza destinada a cocina, el 30% no tiene una pieza destinada a baño, y hay un hacinamiento de hasta ocho individuos por cama en cada vivienda... Además - concluyen los investigadores del ICAL -, son poblaciones que no tienen policlínicos, ni teléfono, ni áreas verdes, ni transporte, ni almacén, ni escuela".

La disminución en el ritmo de construcción habitacional en los años de dictadura es muy significativo. Encuestas divulgadas por el ICAL, en base a estadísticas oficiales, revelan que durante el gobierno de Salvador Allende se construyó un promedio anual de 294 metros cuadrados por cada 1.000 habitantes. El mismo promedio fue de 271 metros cuadrados en los años de la administración Frei y de 260 en la de Jorge Alessandri, reduciéndose a apenas 188 metros cuadrados en los años de tiranía. A resultados similares se llega si se compara el promedio anual de casas construidas por cada 1.000 habitantes en los diferentes períodos mencionados. 5,29 en el gobierno de Allende, 4,40 en el de Frei, 3,85 en el de Alessandri, y sólo 3,04 en el de Pinochet.

Cuadro N° 5

CONSTRUCCION HABITACIONAL.

Período	Promedio Anual Viviendas	Promedio m2. por 1.000 hab.	Tiempo por casa
J. Alessandri	33.745	260	17,25 min.
E. Frei	40.604	271	13,10 "
S. Allende	51.132	294	10,08 "
A. Pinochet (x)	34.745	188	15,60 "

(x) De 1974 a septiembre 1987.

La propaganda fascista, en consecuencia, es terminantemente refutada por los hechos.

DEUDAS HABITACIONALES: NUEVA OPERACION "COSMETICA".

La dictadura estableció en el trimestre un nuevo sistema de reprogramación de deudas habitacionales con el sistema financiero. El hecho comprueba el fracaso de los mecanismos anteriores de reprogramación. Hasta la promulgación del nuevo mecanismo, los personeros oficiales negaban sistemáticamente que el problema persistiese. Afirmaban, como señaló el presidente de la Federación de Deudores Habitacionales, FEDHACH, Luis Sánchez, "que ya se habían tomado de parte del gobierno todas las medidas que la situación aconsejaba, que no había más medidas que tomar" ("La Tercera", 28-2-88). En medio de la fiebre electoral del régimen, debió idearse otra fórmula. En esta oportunidad, el pago de la deuda se vinculó a la licitación de cupos de pagarés de la deuda externa. Los deudores habitacionales podrán así castigar parte de sus descomunales obligaciones con un porcentaje del diferencial existente entre el valor en que se transan en los mercados financieros internacionales los pagarés de la deuda exter-

na chilena y su valor par, al cual los recibirá el Banco Central. En definitiva, se trata de un subsidio estatal, que para los deudores se convertirá en una mera operación contable. Sus deudas serán menores, pero igualmente impagables.

El nuevo plan oficial, como en todas las operaciones anteriores, deja intocado el problema básico. Las deudas seguirán siendo irracionalmente elevadas. "Hay que tener claro - ha indicado el presidente de la FEDHACH - que el principal problema del deudor habitacional no es ni siquiera el dividendo - porque el dividendo no lo puede pagar la inmensa mayoría de la gente -, sino que el problema es que las deudas tienen un monto tal que hacen imposible cualquier reprogramación o medida de solución parcial para enfrentar el tema. Cuando alguien está debiendo tres, cuatro o cinco veces el valor de su vivienda, eso ya no tiene arreglo posible que no sea una cirugía mayor, de fondo. Si no se corrige eso, no se puede resolver el problema de la deuda". De otra parte, las deudas habitacionales con el sistema financiero continúan indexadas a las unidades de fomento. El crecimiento sostenido experimentado por las UF - en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor -, las altas tasas de interés que se han cobrado y la reducción experimentada en los salarios reales creó un cuadro insostenible para los deudores. "Mientras la unidad de fomento se mantenga como índice de reajustabilidad para las deudas hipotecarias, sin ningún tipo de variaciones - reconoció el oficialista diario "La Tercera" (7-3-88) -, subsistirán estos problemas. Es de esperar, por eso - agregó, repitiendo lo señalado por FEDHACH -, que este toque cosmético sea sucedido por una operación de cirugía mayor, que es lo que piden los deudores".

Luis Sánchez, calculó que con este sistema la mayoría de los deudores verá rebajado el monto de sus obligaciones en un 5 ó 6%. Por ello, el organismo que agrupa a los deudores habitacionales calificó las medidas de la tiranía de "insuficientes", indicando, además, que son "discriminatorias", al dejar al margen a "decenas de miles de deudores de la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamos (ANAP)" ("El Mercurio", 12-3-88).

El régimen igualmente estableció un mecanismo de reprogramación para las deudas con el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), que mantienen 302.000 familias, y para las 75.000 con compromisos derivados de la instalación de Casetas Sanitarias y la Operación Sitio. El programa busca estimular a los deudores a ponerse al día en sus obligaciones, con el incentivo que ello les permitirá recibir bonificaciones que disminuyan el saldo de la deuda y rebajas en el monto de sus dividendos. En definitiva, en un intento de tratar de recolectar parte de las sumas adeudadas. El presidente de FEDHACH ha mostrado el fondo del problema,

al decir "que es gente que se encuentra en estado de extrema necesidad, al grado que el nivel de morosidad es de un 80%" ("La Tercera", 9-3-88). A estos deudores, en adelante, se les modificará, además, el sistema de reajuste. Se les reemplaza la Unidad de Fomento por el Índice de Remuneraciones. Para los deudores ello no implica ningún cambio mayor, dado que sus niveles de ingresos sumamente escuálidos no les permite pagar los dividendos ni con uno ni con el otro sistema. Más aún, en la coyuntura actual, el Índice de Remuneraciones desde 1986 se ha reajustado por encima de la UF.

El endeudamiento habitacional continuará siendo un gran problema de masas. Los afectados se calculan en 650.000, los cuales si se les multiplica por su núcleo familiar sube el número de personas a dos millones y medio. La medida cosmética de la tiranía quedaría totalmente al descubierto si se desarrolla un gran movimiento nacional por la solución del problema.

CONTINUAN LOS DESPIDOS DE PROFESORES.

Las vacaciones escolares fueron aprovechadas por la tiranía para continuar con el despido de profesores. Hace un año atrás, también durante las vacaciones de verano, se lanzó a la cesantía a más de 8.000 maestros. La ola de despidos continuó durante todo 1987. Dirigentes del Colegio de Profesores han dado a conocer que entre julio y diciembre los despidos en establecimientos municipales, subvencionados y particulares afectaron a 2.391 profesores. Se lleva a la práctica, de esta manera, un plan del Ministerio del Interior, de mayo de 1986, que se propuso cesar en sus funciones a decenas de miles de maestros, "con el objeto -según señaló explícitamente- de consolidar el traspaso de los establecimientos educacionales y reducir definitivamente los déficit presupuestarios" ("Hoy", 11-1-88). A inicios de 1987, el subsecretario de Educación, René Salamé, manifestó que desde ese momento hasta 1990 los despedidos serían 40.000.

Esta política fue diseñada en conjunto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se trata de reducir los gastos en educación, dentro de la férrea orientación de disminuir el déficit fiscal. Esta política, durante el año pasado, llegó a su punto máximo de conflicto al intentar aplicarse radicalmente en la Universidad de Chile, en un plan diseñado por el grupo conocido como "Los Tucanes", que utilizó como punta de lanza a José Luis Federici. La gran movilización de la comunidad universitaria frustró estos planes. Federici debió ser removido de su cargo de rector rápidamente por Pinochet. Sin embargo, esta política nefasta no ha sido dejada de lado. Una de sus manifestaciones es, precisamente, la exoneración masiva de profesores de la educación media y básica. Hay muchas otras. En las insti-

tuciones universitarias que cuentan con aportes fiscales se han suprimido en el año escolar 1988 la cantidad de 44 carreras. En estos mismos centros universitarios las vacantes para primer año disminuyeron en un 6,8%, al reducirse los cupos de 33.967 a 28.856 ("El Mercurio", 11-1-88). El presupuesto del sistema universitario se ha jibarizado. En el caso de la Universidad de Chile, según declaraciones del presidente de la Asociación de Académicos, Patricio Basso, la disminución en el aporte fiscal directo, de acuerdo a las cifras oficiales conocidas llega a un 23%, lo que "genera un conflicto inmanejable en esta casa de estudios, pues - agrega Basso - en los últimos años hemos sufrido pérdidas del aporte fiscal directo que ascienden a un 46% y si agregamos el otro 23%, la verdad es que la Universidad no está en condiciones de seguir funcionando" ("Análisis", 4-1-88).

Los despidos de profesores se intentaron justificar por el régimen aduciendo un supuesto excedente a nivel nacional. Como en otras esferas de la actividad - así acontece, por ejemplo, en varios consumos alimenticios básicos -, los "excedentes" surgen al dejarse de atender necesidades elementales de grandes masas de la población. "En Chile - reseñó la revista "Hoy" (11-1-88) - existen 800.000 niños y jóvenes que nunca han pasado por una escuela. Entre 1973 y 1986, de acuerdo a cifras de la Superintendencia de Educación Pública, la matrícula en educación básica en relación a la población en edad escolar ha descendido en un 20%. En nivel técnico-profesional la reducción alcanza al 34%. Y los profesores trabajan con 45 alumnos por aula, en circunstancias que las normas pedagógicas... establecen que no deben ser más de treinta. Si tomamos en cuenta estos antecedentes - precisó el dirigente de Santiago del Colegio de Profesores, Sergio Soto - en Chile no sólo no sobran ... sino que hacen falta 17 a 20.000 profesores más".

La dictadura dijo, de otra parte, que las exoneraciones alcanzarían exclusivamente a aquellos maestros que se encontrasen en condiciones de jubilar o que no poseyesen un título profesional. Como acontece frecuentemente con los anuncios de la dictadura la realidad fue diametralmente diferente. Una encuesta realizada por el Directorio Regional Metropolitano del Colegio de Profesores entre los maestros exonerados a inicios del año pasado, demostró que el 88% de los 8.000 despedidos poseía títulos y un 65% del total no reunía las condiciones para jubilar. En la práctica las exoneraciones fueron utilizadas para despedir de preferencia a profesores que se habían destacado en la defensa de los intereses gremiales y que se opusieron activamente al proceso de municipalización. De otra parte, las exoneraciones fueron utilizadas en numerosos casos para reducir las remuneraciones de los profesores despedidos. La encuesta del Colegio de Profesores indica que un 46,9% de los profesores fue recontratado de in-

mediato, pero recibiendo nuevos sueldos muy disminuidos, que en numerosos casos implicaron rebajas de un 50% e incluso porcentajes mayores.

La educación continúa siendo uno de los puntos más conflictivos en el acontecer nacional.

CRECEN UTILIDADES DE GRANDES INTERESES ECONOMICOS.

Los grandes intereses económicos presentes en el país han aprovechado la etapa de recuperación económica para aumentar extraordinariamente su nivel de utilidades, lo que ha conducido, si multáneamente, a un incremento significativo en sus patrimonios. Además, se han beneficiado con múltiples concesiones que les ha brindado el régimen y con las altas tasas de superexplotación de los trabajadores. En particular, han experimentado una gran expansión los intereses económicos vinculados a sectores exportadores, donde, por lo demás, han concentrado sus actividades los principales grupos económicos presentes en el país.

Los balances del año 1987 son una prueba elocuente de ello. En los resultados del ejercicio de ese año destacaron las ganancias de las empresas con presencia dominante del grupo económico encabezado por Anacleto Angelini. El conglomerado Copec, el mayor del país - que controla en partes iguales al mencionado grupo con el consorcio neozelandés Carter Holt Harvey - obtuvo las mayores utilidades "que haya alcanzado la compañía en un año de su fundación" ("El Mercurio", 1-3-88). Ellas llegaron a 33.473 millones de pesos (140,6 millones de dólares, de acuerdo al dólar bancario promedio al cerrar el año pasado). Duplicó a sí la utilidad percibida en 1986: 15.322 millones de pesos. Estas ganancias fueron logradas, en un alto porcentaje, por Celulosa A. rauco y Constitución - una de las sociedades principales del conglomerado -, la cual registró una ganancia de 25.161 millones de pesos. El sector forestal constituye actualmente la principal línea de expansión del conglomerado. El grupo Angelini, igualmente, también obtuvo altas utilidades con sus empresas pesqueras. Eperva ganó 10.871 millones de pesos, Indo 10.709 millones, Guanaye (propiedad del conglomerado Copec) 4.018, Iquique 1.871 millones y Chilemar 1.003 millones de pesos. En Pesquera Iquique también el grupo Angelini se encuentra asociado con Carter Holt Harvey. Sólo en las empresas mencionadas, la utilidad empresarial fue de casi 58.000 millones de pesos (más de 243 millones de dólares).

En el caso del grupo económico de Eliodoro Matte, su empresa líder, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, obtuvo utilidades por 18.050 millones de pesos. Productos Industriales y Forestales (PROFOR), sociedad formada por la "Papelera", para facilitar la venta de Papeles y Bosques Bío-Bío al grupo

neozelandés Fletcher Challenge, ganó, fundamentalmente en la mencionada operación, 14.766 millones de pesos. El grupo Matte también tiene como línea prioritaria expandirse en el sector forestal. Ya en 1986 se apoderó de Inforsa, empresa que el año pasado registró pérdidas por 8.344,2 millones de pesos, como consecuencia del reconocimiento contable de deudas contraídas en obligaciones asumidas para echar a andar, conjuntamente con el grupo español MIT, Papeles Sudamérica. Ahora, el grupo Matte - actuando a través de la Manufacturera de Papeles y Cartones y de Profor - se propone levantar una nueva fábrica de celulosa blanqueada, con una inversión estimada en 500 millones de dólares, a realizar en partes iguales con el consorcio norteamericano del sector forestal Simpson Paper. Se estima que esta nueva fábrica tendrá una producción de 315.000 toneladas anuales, "lo cual permitirá aumentar en un 60% las exportaciones de celulosa que realiza el país" ("El Mercurio", 9-3-88). Minera Valparaíso, también del grupo Matte, obtuvo utilidades de 9.170 millones de pesos.

El holding de la Compañía de Aceros Pacífico (CAP), privatizado por la tiranía - al igual que Copec - dobló sus ganancias en 1987. El resultado neto final del conglomerado - constituido por empresas "de las áreas mineras, siderúrgicas, maderera, forestal, de pensiones y de servicios" ("El Mercurio", 30-1-88) - fue de 31,3 millones de dólares. En 1986, las utilidades habían sido de 15,5 millones de dólares. El mayor accionista del holding CPP es la Sociedad de Inversiones Industriales y Pesqueras (SIPSA); con un 8,68% de los títulos. Esta es una sociedad de inversiones del grupo económico familiar Izquierdo Menéndez, que ha alcanzado nuevamente figuración aprovechando el proceso de privatización. SIPSA posee también acciones de las empresas eléctricas Chilectra, Chilectra Metropolitana y Chilectra Quinta Región. En SIPSA, los Izquierdo Menéndez están asociados con el poderoso grupo financiero norteamericano Bankers Trust. En CAP tienen intereses también capitales suizos, el consorcio estadounidense Citicorp y el grupo Edwards, a través de la compañía de seguros La Chilena Consolidada.

Su proceso de expansión lleva a los grandes intereses económicos presentes en el país a pronunciarse decididamente por la perpetuación de un régimen de dominación que les ha proporcionado grandes beneficios.

Cuadro N° 6

RANKING DE RESULTADOS DE EMPRESAS CONSOLIDADAS.

(Fuente: Balances. En millones de pesos constantes)

Empresa	1987	Perteneciente a:
Copec	33.473,6	Grupo Angelini - Carter Holt Harvey
Papeles y Cart.	18.050,2	Grupo Matte
Endesa	14.816,6	Estado
PROFOR	14.766,8	Grupo Matte
P.Eperva	10.871,0	Grupo Angelini
P.Indo	10.709,0	Grupo Angelini
Min.Valparaíso	9.170,7	Grupo Matte
Soquimich	8.476,6	Bankers Trust - American Express-Security Pacific.
Pasur	7.534,7	Grupo Matte
CAP	7.471,4	SIPSA - Citicorp - Suizandina y otros

SECTOR FORESTAL: ALTA CONCENTRACION MONOPOLICA.

Las exportaciones forestales se encuentran fuertemente concentradas. De acuerdo a las estadísticas del año pasado, dos grupos económicos - uno de los cuales se encuentra asociado a capitales extranjeros - realizan un 67,8% de las ventas externas globales sectoriales, que ascendieron en 1987 a 577,3 millones de dólares. Sus exportaciones, por lo tanto, superan los 390 millones de dólares. El mayor volumen de ventas en el exterior lo efectuó en el período indicado el conglomerado Copec - controlado en partes iguales por el grupo económico encabezado por Anacleto Angelini y el consorcio neozelandés Carter Holt Harvey - con un 37,5% del total. Sus colocaciones se efectuaron a través de Celulosa Arauco y Constitución, con un 32,2% de los retornos globales al exportar 186,2 millones de dólares, y Forestal Arauco, con un 5,3% de los retornos y ventas por 30,6 millones de dólares. En segundo lugar se ubicó el grupo Matte con un 30,3% de los retornos totales. La mayor parte de sus ventas fue realizada por la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, que efectuó exportaciones por 91,3 millones de dólares. En las ventas realizadas el año pasado por el grupo Matte se incluyen las efectuadas por Papeles y Bosques Bío-Bío S.A., empresas traspasadas en un 100% en noviembre de 1987 a otro consorcio neozelandés, Tasman Forestry.

Esta concentración en las exportaciones guarda directa relación, a su vez, con la propiedad sobre grandes extensiones de bosques. Un sólo ejemplo. El conglomerado Copec, de acuerdo a antecedentes entregados en su última Junta de Accionistas por su presidente Felipe Lamarca, se propone "trabajar para llegar en 1994 a alrededor de 400.000 hectáreas plantadas con pino insigne de tipo radiata y eucaliptus, de las 260.000 que posee en la actualidad... Con lo cual - agregó Lamarca - el patrimonio forestal de Copec llegará a ser el 25% del patrimonio nacional en este segmento" ("El Mercurio", 30-12-87). El plan quinquenal de inversiones de Copec, dado a conocer en la Junta de Accionistas, se concentrará fundamentalmente en dos sectores dedicados básicamente a la exportación, el forestal y el pesquero.

Al finalizar el trimestre, se hizo público que la transnacional británico-holandesa Shell - en sociedad con el consorcio financiero norteamericano Citibank y la productora de papel estadounidense Scott Paper Worldwide - ponía en marcha un fuerte plan de expansión en el sector forestal. Para ello hicieron la mayor oferta en la licitación de la planta de Nacimiento de Papeles Sudamérica y negociaban al grupo Luksic la adquisición de Forestal Colensa. Se ha señalado que los indicados consorcios extranjeros se proponen invertir en el sector una suma del orden de los 300 millones de dólares ("La Epoca", 23-3-88).

El crecimiento producido en los años de fascismo en las plantaciones forestales se ha realizado gozando de fuertes subsidios estatales. El subsidio, fijado en 1974, alcanza a un 75% de los costos de forestación, a lo que se añade rebajas tributarias y líneas crediticias preferentes. El fisco corre con el mayor costo de las plantaciones, las utilidades quedan en poder de intereses privados. De esta manera, las plantaciones forestales han aumentado, desde el momento del golpe de Estado, en más de 700.000 hectáreas. Las plantaciones forestales conforman un ejemplo saliente de la concentración registrada en los años de dictadura en la propiedad de la tierra. Existe, como constató en un reportaje el semanario "Análisis" (18-1-88), una tierra paradójicamente concentrada y, al mismo tiempo, "segmentada a niveles nunca antes conocidos".

Los sectores favorecidos, desde luego, pretenden "perpetuar" la estructura de propiedad conformada. Ello no tiene nada de raro. Por eso hablan de "proyectar" el régimen. Lamentablemente, los partidos opositores de centro derecha, en su programa económico y social suscrito por seis partidos en enero pasado, se apresuraron a asegurar también que no contemplan "políticas expropiatorias de ninguna naturaleza" y que, además, "no habrá reforma agraria en el sentido de expropiar tierras" ("El Mercurio", 30-1-88). De esta manera, garantizan conservar las regresiones

en materia de propiedad producidas en los años de dictadura. Esta concentración de la tierra no se limita, obviamente, sólo a la propiedad forestal. Grandes propietarios se han hecho de extensiones gigantescas, encubriéndolas al no conformar una sola unidad, como ocurría comúnmente antes del proceso de reforma agraria. "Jurídicamente - ha escrito la investigadora María Elena Cruz -, son mucho menores que antes de la Reforma Agraria, pero también existe una concentración de la propiedad oculta bajo esta fragmentación legal" ("Análisis", 18-1-88).

Los cambios producidos en el agro en los últimos años han potenciado particularmente a grandes intereses económicos que han penetrado decididamente en el sector. "El proceso de "modernización" capitalista del agro ha beneficiado - señala el Departamento de Investigación Económica del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, en su documento programático titulado "Una nueva economía para Chile" - fundamentalmente a la burguesía monopólica con intereses multi-sectoriales. Estos grupos económicos al apoderarse de preferencia de las tierras forestales y de cultivos industriales de alta productividad y al controlar la producción, comercialización y exportación de los productos del campo, sometieron a su dominación a gran parte de las actividades agropecuarias a través de los bancos y monopolios intermediarios".

La monopolización fascista en el agro no puede ser avalada a futuro por las fuerzas democráticas.

PLAN DE PRIVATIZACIONES 1988.

La dictadura dio a conocer al iniciarse el año sus planes de privatización para 1988. El gerente general de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), coronel Guillermo Letelier, señaló que para 1988 está previsto iniciar el traspaso de la línea aérea LAN Chile, se continuará la venta de acciones de la empresa carbonífera Schwager hasta llegar al 100%, fuera de culminar la privatización de la Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH) y de Chilectra Generación (CHILGENER). Indicó, de otra parte, que diferentes empresas estatales se transformarán en sociedades anónimas para su ulterior entrega a Corfo, paso previo a su entrega a capitales privados. Entre estas empresas figuran el Instituto de Seguros del Estado, el Metro de Santiago, la Empresa Marítima de Chile, la Empresa Portuaria de Chile, la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias y los Ferrocarriles del Estado. Letelier añadió que las "refinerías de ENAP que no dependen de Corfo, también podrán entrar al esquema de sociedades anónimas" ("El Mercurio", 13-1-88).

El gran empresariado, no dándose nunca por satisfecho, insiste en que el proceso privatizador se amplíe y acelere aún más. Temen que, más adelante, se le complique su materialización. "La

participación estatal en Chile - declaró el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Fernando Agüero - es todavía muy grande, sobre todo en la generación de energía, en el transporte aéreo y marítimo y en las comunicaciones. Incluso se da el caso de que el Estado es dueño en Chile de un importante laboratorio farmacéutico y de una fábrica que produce herramientas" ("La Tercera", 22-1-88). Pretende, en resumen, abarcarlo todo, incluyendo empresas, como Famae, hoy en manos del Ejército.

El plan de privatizaciones de 1988 se inició completando la privatización de Chilgener. Dos consorcios financieros quedaron como sus accionistas mayoritarios; Continental International Finance Co, con un 19,9% del total, y Security Pacific Chile, con un 19,78%. La presencia de consorcios transnacionales en el control de Chilgener se incrementa dado que las administradoras de fondos de pensiones poseen también paquetes significativos. En cuanto a Soquimich - cuya presidencia la ejerce el yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce -, las ventas de acciones del presente año también han aumentado la presencia de consorcios financieros extranjeros. El Bankers Trust, junto a un sindicato de bancos, posee el 6,2% de las acciones totales, el American Express un 6,1%, el Security Pacific un 6% y el Pittsburgh Bank un 2,63%. Si se añaden las acciones en mano de las administradoras de fondos de pensiones - las mayores de ellas en poder de capitales extranjeros - y las controladas por el Consorcio Nacional de Seguros Vida, manejado por el Bankers Trust, se concluye que los consorcios transnacionales tienen más de la cuarta parte del capital social. La privatización sigue conduciendo a un acentuado proceso de extranjerización de la economía.

Uno de los anuncios más graves del gerente general de Corfo es la transformación en sociedades anónimas de las refinerías de petróleo, para proceder, con toda seguridad, posteriormente a su privatización. "Quien controle las refinerías - señaló, con razón, el secretario general de la Federación de Trabajadores del Petróleo, Ernesto Barrientos - controlará toda la industria petrolera nacional por la simple vía de la fijación de precios" ("Apsi", 25-1-88). Los esfuerzos privatizadores de las refinerías han sido impulsados con particular énfasis por la Comisión Nacional de Energía y, en especial, por su presidente, general(R) Herman Brady. Ya el año pasado, la Comisión Nacional de Energía presentó un documento propiciando su privatización. Ahora da pasos similares. El abogado de la Federación del Petróleo, Rodolfo Machuca, ha subrayado que detrás de estos intentos privatizadores de las refinerías se mueven "oscuros intereses". El propio Herman Brady se encuentra vinculado, a través de la distribución minorista de combustibles, con Copec, controlado por el grupo económico Angelini y el consorcio neozelandés Carter Holt Harvey, y la transnacional del petróleo norteamericana Esso.

Las privatizaciones constituyen un serio atentado en contra del país. El presidente del Comando de Defensa de las Empresas del Estado, Pedro Araya, denunció la gravedad que reviste el dominio foráneo en "asuntos estratégicos de la nación, como son las telecomunicaciones, el petróleo y la energía eléctrica". Manifestó, asimismo, que las ventas se han efectuado con grandes pérdidas para el erario nacional o, dicho de otra manera, con precios fuertemente subsidiados. Por este motivo, indicó Araya, el año pasado se perdió "más de 600 millones de dólares por concepto de diferencia entre el valor libro y valor real de las empresas involucradas en el proceso" ("La Tercera", 22-1-88).

Los planes antinacionales de Pinochet deben ser detenidos y revertidos. Así lo demanda el interés patrio.

LICITACION CTC: OTRO ESCANDALO.

En un nuevo escándalo culminó la mayor privatización organizada en 1987, la de la Compañía de Teléfonos de Chile. La Contraloría General de la República se abstuvo de tomar razón de la resolución de la licitación de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) a favor del grupo australiano Bond. El contralor Osvaldo Iturriaga calificó de no correcta la conclusión de Corfo indicando que el grupo australiano se había comprometido, además de la adquisición de las acciones licitadas, a un aumento de capital de 355 millones de acciones. "Por el contrario - indicó el organismo contralor -, la oferta de Bond habría sido por un aumento de capital de 243 millones de acciones" ("El Mercurio", 28-1-88). La decisión de la Contraloría fue adoptada el 22 de enero. Apenas tres días después, el día 25 de enero, el directorio de Corfo anuló la licitación internacional de la Compañía de Teléfonos y procedió a la "venta directa" del 30% de las acciones al grupo australiano. Materializando así, de todas maneras, la decisión adoptada en los más altos círculos de la dictadura. En marzo, la Contraloría en una oscura sentencia - cuyo texto no es conocido públicamente - aprobó esta venta directa.

La Empresa Telefónica Hispano Francesa S.A., participante en la licitación internacional, protestó públicamente por la determinación de Corfo, indicando que ante la no toma de razón por parte de la Contraloría se debió haber convocado a una nueva licitación o llamado a negociaciones directas a todos los proponentes. El consorcio hispano francés, en su declaración, dejó en claro que había ofertado un precio mayor por acción que el grupo australiano. "THF no comprende - concluye la declaración - que ejecutivos de Corfo declaren en conferencia de prensa el 12 de enero en curso que dicha institución no podía hacer una venta directa a THF de las acciones minoritarias sobrantes de la licitación de CTC y que, días más tarde, la propia institución apareza-

ca vendiendo el paquete mayoritario de acciones, precisamente en venta directa, a otro de los proponentes, cuya oferta fue rechazada por el organismo contralor" ("El Mercurio", 29-1-88).

El proceso privatizador ha ido acompañado por una sucesión de escándalos. Desde luego numerosos altos ejecutivos de las empresas traspasadas utilizaron sus cargos públicos en su beneficio, quedando en la dirección de las sociedades una vez privatizadas, ya sea constituyendo empresas ad hoc con este fin, o bien poniéndose al servicio de grupos económicos internos o de consorcios transnacionales. Se repitió, de esta manera, lo sucedido con los interventores de los bancos de Chile y de Santiago que luego de la privatización quedaron como presidentes de ambas instituciones.

Los ejemplos en tal sentido son múltiples. Bruno Philippi, quien como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía propició la privatización del sector energético, participó en el grupo adquirente de la planta eléctrica Pilmaiquén, que tiene mayoría accionaria del consorcio financiero norteamericano Bankers Trust. Philippi es considerado uno de los "hombres de confianza" del ministro de Hacienda, Hernán Büchi, y forma parte del grupo conocido con el nombre de los "tucanes", que alcanzó notoriedad pública al tratar de imponer a José Luis Federici como rector de la Universidad de Chile.

En otra empresa privatizada, Chilectra Metropolitana, figuran entre los principales accionistas - junto al grupo financiero norteamericano Security Pacific - dos sociedades limitadas, presentadas a la opinión pública como de propiedad de los trabajadores. Estas empresas, en verdad, fueron formadas por el grupo de ejecutivos designados por la dictadura para dirigirla antes de la privatización, y son encabezadas por otro "tucán", José Yurascek, gerente de Chilmetro. Yurascek, a quien antes la tiranía le había entregado el cargo de subdirector de la Oficina de Planificación Nacional, ideó - señaló la periodista María Olivia Mönckeborg en el semanario "Apsi" (1-2-88) - un sistema de gestión donde los trabajadores, a pesar de tener acciones, no pueden participar efectivamente en las decisiones".

En la presidencia del poderoso holding de la Compañía de Aceros del Pacífico sigue siempre, luego de la privatización, el almirante Guillermo Aldowey, designado para esa función por Pinochet en 1980. Hernán Büchi ocupó algún tiempo el cargo de vicepresidente junto a él. Por su parte, entre los principales accionistas de Chilectra Quinta Región (Chilquinta) figura el empresario Juan Hurtado Vicuña, "otro de los amigos más cercanos de Hernán Büchi". Hurtado ocupó numerosas veces, designado por la dictadura, cargos en los directorios de las empresas Corfo.

Un caso aún más revelador se registra en la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich). Durante el proceso de privatización volvió a ocupar su presidencia Julio Ponce Lerou, yerno de Pinochet, función que ya había desempeñado designado por su suegro entre 1980 y 1983. Ponce debió abandonar este cargo al estallar públicamente en la prensa antecedentes de los manejos efectuados para construir su poderío económico. La participación directa de Ponce en Soquimich se da "a través de la Sociedad Pampa Calichera formada por ejecutivos de Soquimich, entre los que están el gerente Eduardo Bobenrieth y Luis Eugenio Ponce Lerou quien ingresó como gerente de ventas de Soquimich en 1981, precisamente cuando su hermano era presidente. "Algunas versiones indican - señaló María Olivia Mönckeberg - que Ponce Lerou se habría asociado con el Bankers Trust; otras, que sería un hombre del Bankers Trust en Chile, o simplemente que trataría de compartir el control de la empresa".

TERMINAN CON MONOPOLIO ESTATAL EN LA GRAN MINERÍA CUPRÍFERA.

La dictadura volvió a entregar a corporaciones transnacionales - encabezadas por Utah International - el riquísimo mineral de "La Escondida", considerado "la reserva de cobre conocida y sin explotar más grande del mundo" ("El Mercurio", 20-3-88). "La Escondida" dejará como subproductos oro, plata y molibdeno. Portavoces de Utah International, subrayando las ventajas del yacimiento, destacaron en la revista "Minería Chilena" que "La Escondida" es la mejor perspectiva de cobre del mundo" ("Hoy", 21-3-88). El ministro de Minería, Samuel Lira, destacó que la nueva explotación permitirá producir anualmente 320.000 toneladas de cobre fino, cantidad equivalente a poco menos de un 30% de toda la producción actual de Codelco. El yacimiento tiene una alta ley, lo que le permite - según manifestó Stanley Jonsson, gerente general de Minera Escondida Limitada, la sociedad creada para su explotación por Utah International, Rio Tinto Zinc Corporation y Japan Escondida Corporation - "ser competitiva aún con un nivel bajo del precio del cobre a nivel mundial... Se estima - añadió Jonsson - que La Escondida podría verse afectada mucho menos que otras empresas, por razones de costos más bajos y ley de mineral" ("El Mercurio", 20-3-88). "El depósito - ha resumido "Hoy" - ... es de alrededor de 1.800 millones de toneladas, con una ley promedio de 1,59% de cobre, lo que asegura - al menos - una vida útil de 50 años a La Escondida. De ese total - agregó "Hoy" -, 662 millones de toneladas son explotables a tajo abierto y tienen una ley superior de contenido de cobre, de 2,12%. La entrega se materializó a mediados de marzo, al suscribir los consorcios extranjeros un contrato de inversión extranjera por 1.400 millones de dólares, comprometiéndose a aportar directamente 400 millones. Un contrato similar anterior no se concretó.

Con la entrega del mineral de "La Escondida", la tiranía pone fin al monopolio estatal en la Gran Minería del Cobre, aprobado como disposición constitucional durante el Gobierno de la Unidad Popular. Todo indica que el alto nivel alcanzado por Codelco permitía a plenitud que se hiciese cargo de este proyecto. Sin embargo, en esta esfera también el régimen fascista impuso su política privatizadora, la cual ha adoptado en este sector una forma oblicua, ante la indiscutible resistencia nacional que levantaría la entrega a intereses extranjeros de los yacimientos actualmente explotados por Codelco. Aún más, incluso el ente estatal ha resuelto licitar yacimientos de su propiedad. Así acontece con el mineral de "El Hueso". "Resultan asombrosas - editorializó, comentando esta determinación, el diario "La Epoca" (25-3-88) -, las declaraciones del último presidente ejecutivo de Codelco, quien justifica la licitación del yacimiento El Hueso, de propiedad de esa empresa, mencionando el hecho que sus costos de operación alcanzan a los 20 millones de dólares y las ventas previstas a 45 millones de dólares anuales. Es decir - recalca "La Epoca" -, lo que se vende es una utilidad operacional de 25 millones de dólares por año. Este proyecto - concluye el periódico - podría haber sido llevado a cabo por el propio Codelco, que cuenta con el mayor acervo tecnológico del mundo y con los recursos que ha acumulado gracias al alza del precio del cobre y que, inexplicablemente, han sido congelados en el Banco Central".

El contrato suscrito de acuerdo al Estatuto de La Inversión Extranjera ~~concedió~~ a las corporaciones transnacionales franquicias más allá de las establecidas en el articulado del Decreto Ley 600. Ya en éste, como ha subrayado el vicepresidente de Cieplan, Ricardo Ffrench-Davis, las granjerías son "superiores a las obligaciones que se exigen en cualquier otra parte del mundo. En el artículo cuarto, por ejemplo - añade Ffrench-Davis -, se establece que los inversionistas extranjeros podrán transferir al exterior sus capitales y las utilidades líquidas que ellas originen" ("Hoy", 1-2-88). Con las corporaciones transnacionales favorecidas con la entrega de "La Escondida" se fue todavía más lejos. El economista Iván Valenzuela, del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), indicó que "mientras "La Escondida" esté recuperando la inversión realizada, el Estado chileno no recibirá beneficios tributarios" ("Hoy", 21-3-88). Como recién se obtendrán utilidades a fines de la próxima década, el Estado permanecerá muchos años sin percibir tributos. El propio gerente general de "Minera Escondida Limitada", Stanley Jonsson, reconoció explícitamente estas granjerías. "El contrato - dijo - nos da ciertas garantías. Hay algunos aspectos - puntualizó -, como por ejemplo la posibilidad de pagar directamente los créditos en el exterior, que nos han permitido avanzar al punto en que nos encontramos hoy día".

Todas las últimas entregas de riquezas básicas, la dictadura las efectuó concediendo grandes ventajas extras. El contrato de "La Escondida" implica un salto en este proceso de entrega. La extranjerización de la economía, de esta manera, se completa aún más, añadiéndose a la masiva venta de empresas productivas en pleno funcionamiento.

LABORATORIOS DE EE.UU. BUSCAN CONTROL DEL MERCADO CHILENO.

Los consorcios transnacionales farmacéuticos norteamericanos han iniciado una fuerte ofensiva para terminar con la legislación chilena vigente desde julio de 1931 que no considera patentables los medicamentos. Con este fin, la Asociación de Productores Farmacéuticos de los Estados Unidos solicitó la aplicación de sanciones contra Chile, de mantenerse la señalada disposición. Estas sanciones consisten en represalias a aplicarse contra las exportaciones nacionales hasta un monto equivalente a tres veces el perjuicio estimado experimentado por los laboratorios norteamericanos. El mercado farmacéutico nacional alcanza un volumen de negocios de 120 millones de dólares, cubriendo las empresas estadounidenses un 22% del mismo. La presencia de las empresas de origen nacional en el mercado interno ha venido expandiéndose sistemáticamente desde 1980. Como parte de la demanda presentada por la Asociación norteamericana, a comienzos de marzo estuvo en Santiago el personero del Departamento de Comercio estadounidense, John Rosenbaum, quien calificó durante su visita a la industria farmacéutica chilena, de "pirata y ladrona" ("La Tercera", 6-3-88).

En verdad, son los consorcios transnacionales farmacéuticos yanquis los que imponen desde antaño una política de despojo brutal a nuestros países. Como ha señalado José Antonio Plubins, presidente de la organización empresarial chilena Asociación de Industriales de Laboratorios Farmacéuticos, ASILFA, "el país paga con creces el gasto de investigación en que incurren las empresas norteamericanas que innovan. ¿Cómo? Porque sus laboratorios en el país les compran a ellas, las matrices, la materia prima a un valor que incluye ese gasto" ("El Mercurio", 13-3-88). Más aún, no sólo incluye ese gasto, sino que contiene un exorbitante recargo. "Existe una relación de uno a ocho - ha constatado "El Mercurio" - entre el precio a que normalmente pagan la droga los laboratorios a sus matrices y el que pagan los laboratorios nacionales a otros laboratorios extranjeros que venden el mismo principio activo. ¿Por qué? Porque es la forma que tienen las empresas extranjeras de remesar utilidades". Los principales proveedores de materia prima a los laboratorios chilenos son en la actualidad empresas de la República Federal Alemana, Italia, España, Suiza, China e incluso de Checoslovaquia y Hungría. Los ejemplos concretos sobre esta exacción son muy revela-

dores. Un estudio efectuado por el Instituto de Economía de la Universidad Católica indicó, para citar un caso concreto, que "mientras el Laboratorio Pfizer en Chile compra a su matriz entre los años 1984 y 1986 la droga genérica piroxicam, el antireumático que patentó bajo el nombre de Feldene, a razón de más de 12.000 dólares el kilo, tres laboratorios nacionales lo compran a razón de 100 ó 200 dólares el kilo en el mercado internacional".

La ofensiva de los consorcios transnacionales tiene depositada una gran esperanza en su éxito a partir de las múltiples facilidades proporcionadas por la dictadura al capital extranjero. "La economía chilena - manifestó optimista el presidente de la Asociación de Productores Farmacéuticos norteamericanos - es la más orientada al libre mercado en América Latina, y Chile es un buen socio comercial de Estados Unidos, pero su ley de patentes y su tratamiento de las patentes de la industria farmacéutica constituyen una anomalía que el gobierno chileno podría remediar fácilmente" ("El Mercurio", 24-2-88). De satisfacerse las exigencias transnacionales, los laboratorios nacionales y los consumidores sufrirían un rudo golpe. Los consorcios norteamericanos establecerían un rígido monopolio de numerosos fármacos en el mercado interno, los laboratorios chilenos - de no someterse al pago de las licencias exigidas - no podrán fabricarlos, y los precios de numerosos productos subirían bruscamente, amén de la sangría adicional de divisas que conllevaría. El ya citado estudio de la Facultad de Economía de la Universidad Católica muestra, citando numerosos ejemplos, el alza constante experimentado por los artículos farmacéuticos mientras se encuentran bajo control monopolístico y su posterior baja cuando dicho control cesa. "El precio de la droga salbutamol - señala -, que introdujo a Chile como Aerolin el Laboratorio Glaxo en 1979, subió a una tasa superior al 11% anual entre 1980 y 1983. De ese año a 1986 el precio promedio del mismo fármaco bajó por sobre el 11% anual como efecto de la competencia" ("El Mercurio", 13-3-88).

Los consorcios norteamericanos buscan acentuar cada vez más su control sobre la economía chilena. La ofensiva de los laboratorios estadounidenses es un nuevo capítulo en esta dirección. Las empresas del sector radicadas en Chile recurren a la legislación de su país, para modificar disposiciones vigentes en Chile hace más de 50 años y que existen, por lo tanto, desde antes de su radicación en el territorio nacional.

EL PAQUETE ECONOMICO DE "AÑO NUEVO".

La dictadura inició el año con un conjunto de decisiones económicas, en las cuales estuvo muy presente su campaña electoral.

El paquete de medidas económicas anunciadas por el ministro

de Hacienda, Hernán Büchi, en enero durante su exposición sobre el Estado de la Hacienda Pública - entre las cuales destacan una rebaja general de aranceles de 20 a 15% y una devaluación extraordinaria del peso en relación al dólar de 4% - tiene como objeto prioritario entregar nuevos incentivos a los exportadores. Durante los últimos tres años, manifestó Büchi, "se han redoblando los esfuerzos de reforma estructural, en el marco de un programa de ajuste estructural" cuyo "propósito es hacer de las exportaciones la fuerza motriz del crecimiento económico" ("El Mercurio", 5-1-88). Esta orientación conforma la línea matriz de la política decidida en conjunto con el Banco Mundial. Las metas establecidas al acordarse, en los últimos meses de 1987, el crédito de ajuste estructural SAL III destacan de manera preferente, precisamente, el objetivo de "promover las exportaciones". La razón es obvia. Es necesario realizar nuevos esfuerzos para incrementar la capacidad del país de generar recursos a destinar al pago de intereses de la deuda externa. "Para pagar los intereses de la deuda externa y obtener un superávit en la balanza comercial - comentó el semanario "Hoy" (11-1-88) -, el equipo económico necesita de los dólares que los exportadores pueden traer al país". El programa de la tiranía para el presente año, reseñado en su exposición por Büchi, plantea alcanzar un superávit comercial de 1.280 millones de dólares, cantidad superior a la obtenida en los años recientes.

El director del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, Erick Heindl, destacó, por su parte, que el paquete anunciado se orienta básicamente, "sobre todo en el largo plazo, a profundizar la reasignación de recursos de la economía hacia los sectores exportadores". Esta reasignación de recursos, añadió, "debería tener un impacto desfavorable en los rubros productivos que compiten con las importaciones" ("El Mercurio", 6-1-88). Reaparecen, de esta manera, algunas de las orientaciones fundamentales que trató de imponer en su tiempo, con su fracasada política, el ex ministro de Hacienda Sergio de Castro. Se conceden facilidades al ingreso de mercancías sustitutivas a las producidas en el país para el mercado interno. De allí el malestar expresado por diferentes dirigentes empresariales de estas actividades. El presidente del Instituto Textil, Marcelo Zalaquett, por ejemplo, calificó como "un grave impacto negativo" la rebaja de los aranceles. "Está bien incentivar las exportaciones - añadió Zalaquett - ..., pero no se ve el provecho nacional de rebajar aún más un arancel general que ya estaba entre los más bajos del mundo. Nos llama profundamente la atención - concluyó - que a sólo 18 meses de fijado el arancel de 20% por ley, para darle mayor estabilidad a las reglas del juego y confianza a los empresarios e inversionistas, se cambie tal disposición legal sin consulta

dores. Un estudio efectuado por el Instituto de Economía de la Universidad Católica indicó, para citar un caso concreto, que "mientras el Laboratorio Pfizer en Chile compra a su matriz entre los años 1984 y 1986 la droga genérica piroxicam, el antireumático que patentó bajo el nombre de Feldene, a razón de más de 12.000 dólares el kilo, tres laboratorios nacionales lo compran a razón de 100 ó 200 dólares el kilo en el mercado internacional".

La ofensiva de los consorcios transnacionales tiene depositada una gran esperanza en su éxito a partir de las múltiples facilidades proporcionadas por la dictadura al capital extranjero. "La economía chilena - manifestó optimista el presidente de la Asociación de Productores Farmacéuticos norteamericanos - es la más orientada al libre mercado en América Latina, y Chile es un buen socio comercial de Estados Unidos, pero su ley de patentes y su tratamiento de las patentes de la industria farmacéutica constituyen una anomalía que el gobierno chileno podría remediar fácilmente" ("El Mercurio", 24-2-88). De satisfacerse las exigencias transnacionales, los laboratorios nacionales y los consumidores sufrirían un rudo golpe. Los consorcios norteamericanos establecerían un rígido monopolio de numerosos fármacos en el mercado interno, los laboratorios chilenos - de no someterse al pago de las licencias exigidas - no podrán fabricarlos, y los precios de numerosos productos subirían bruscamente, amén de la sangría adicional de divisas que conllevaría. El ya citado estudio de la Facultad de Economía de la Universidad Católica muestra, citando numerosos ejemplos, el alza constante experimentado por los artículos farmacéuticos mientras se encuentran bajo control monopolístico y su posterior baja cuando dicho control cesa. "El precio de la droga salbutamol - señala -, que introdujo a Chile como Aerolin el Laboratorio Glaxo en 1979, subió a una tasa superior al 11% anual entre 1980 y 1983. De ese año a 1986 el precio promedio del mismo fármaco bajó por sobre el 11% anual como efecto de la competencia" ("El Mercurio", 13-3-88).

Los consorcios norteamericanos buscan acentuar cada vez más su control sobre la economía chilena. La ofensiva de los laboratorios estadounidenses es un nuevo capítulo en esta dirección. Las empresas del sector radicadas en Chile recurren a la legislación de su país, para modificar disposiciones vigentes en Chile hace más de 50 años y que existen, por lo tanto, desde antes de su radicación en el territorio nacional.

EL PAQUETE ECONOMICO DE "AÑO NUEVO".

La dictadura inició el año con un conjunto de decisiones económicas, en las cuales estuvo muy presente su campaña electoral.

El paquete de medidas económicas anunciadas por el ministro

de Hacienda, Hernán Büchi, en enero durante su exposición sobre el Estado de la Hacienda Pública - entre las cuales destacan una rebaja general de aranceles de 20 a 15% y una devaluación extraordinaria del peso en relación al dólar de 4% - tiene como objeto prioritario entregar nuevos incentivos a los exportadores. Durante los últimos tres años, manifestó Büchi, "se han redoblando los esfuerzos de reforma estructural, en el marco de un programa de ajuste estructural" cuyo "propósito es hacer de las exportaciones la fuerza motriz del crecimiento económico" ("El Mercurio", 5-1-88). Esta orientación conforma la línea matriz de la política decidida en conjunto con el Banco Mundial. Las metas establecidas al acordarse, en los últimos meses de 1987, el crédito de ajuste estructural SAL III destacan de manera preferente, precisamente, el objetivo de "promover las exportaciones". La razón es obvia. Es necesario realizar nuevos esfuerzos para incrementar la capacidad del país de generar recursos a destinar al pago de intereses de la deuda externa. "Para pagar los intereses de la deuda externa y obtener un superávit en la balanza comercial - comentó el semanario "Hoy" (11-1-88) -, el equipo económico necesita de los dólares que los exportadores pueden traer al país". El programa de la tiranía para el presente año, reseñado en su exposición por Büchi, plantea alcanzar un superávit comercial de 1.280 millones de dólares, cantidad superior a la obtenida en los años recientes.

El director del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, Erick Heindl, destacó, por su parte, que el paquete anunciado se orienta básicamente, "sobre todo en el largo plazo, a profundizar la reasignación de recursos de la economía hacia los sectores exportadores". Esta reasignación de recursos, añadió, "debería tener un impacto desfavorable en los rubros productivos que compiten con las importaciones" ("El Mercurio", 6-1-88). Rea parecen, de esta manera, algunas de las orientaciones fundamentales que trató de imponer en su tiempo, con su fracasada política, el ex ministro de Hacienda Sergio de Castro. Se conceden facilidades al ingreso de mercancías sustitutivas a las producidas en el país para el mercado interno. De allí el malestar expresado por diferentes dirigentes empresariales de estas actividades. El presidente del Instituto Textil, Marcelo Zalaquett, por ejemplo, calificó como "un grave impacto negativo" la rebaja de los aranceles. "Está bien incentivar las exportaciones - añadió Zalaquett - ..., pero no se ve el provecho nacional de rebajar aún más un arancel general que ya estaba entre los más bajos del mundo. Nos llama profundamente la atención - concluyó - que a sólo 18 meses de fijado el arancel de 20% por ley, para darle mayor estabilidad a las reglas del juego y confianza a los empresarios e inversionistas, se cambie tal disposición legal sin consulta

curio", 6-1-88).

Otras medidas paralelas acentuaron el carácter regresivo en la redistribución del ingreso característico de la política económica fascista. Se aprovecha un momento favorable en materia de ingresos externos, como consecuencia del aumento registrado en los precios del cobre en los mercados internacionales, para eliminar gravámenes de artículos que adquiere, por lo general, un sector limitado de la población. Se "suprimió el impuesto adicional de 16,5% a los automóviles pequeños o de hasta 1.000 centímetros cúbicos y redujo al 10% la tasa promedio para los de mayor tamaño; puso fin a la sobretasa o Iva adicional de 30% para los televisores a color y de 50% a los equipos de video....; eliminó el tributo adicional de 25% que desde 1983 gravaba el pago de patentes, disminuyendo en igual porcentaje el valor a cancelar este año; rebajó de 40 a 35% el gravamen a las remesas de utilidades de compañías extranjeras" ("Análisis", 11-1-88). "Sólo la supresión del impuesto adicional a las patentes de autos (1.600 millones de pesos), más la rebaja de impuestos al crédito (al menos 10.000 millones de pesos) y a las remesas de utilidades (2.250 millones de pesos) - comentó "Análisis" - equivalen a un cuarto del presupuesto de salud, un 10% del de educación y un tercio del de vivienda vigentes para 1988". Este incremento en la capacidad de consumo de ciertas capas de la población tienen un espacio de vida a futuro no simple. Así ya se de mostró a comienzos de la presente década cuando los gastos en mo neda extranjera superaron con largueza las posibilidades nacionales. "Tal como en 1981 - recordó, por eso, "Hoy" (11-1-88) -, el consumismo tiene sus riesgos. Si las importaciones se incrementan demasiado ..., Büchi tendrá que frenar la economía tarde o temprano". Esta redistribución del ingreso se manifiesta crudamente en todos los últimos años, dado que mientras las remuneraciones decrecen, las utilidades de las grandes empresas au mentan en flecha.

Con estos paquetes de medidas la dictadura dio en los hechos su primer paso del presente año, teniendo, desde luego, muy presente, su campaña electoral de perpetuación en el poder.



militar

Política militar norteamericana

respecto de nuestro país

DEL "DESTINO MANIFIESTO"

AL "CONFLICTO DE BAJA INTENSIDAD"

por Esteban Ortega Davila

Nuevo envoltorio para un mismo contenido de propósitos hegemónicos del Imperio. El papel asignado a las FF.AA. "locales" coincide con la formulación pinochetista del rol "tutelar" del aparato militar sobre la sociedad civil. Los objetivos globales del Imperialismo y su versión "regional".

Con un cierto atraso cronológico, pero en una forma que quiso ser rotunda, el Comandante en Jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (United States Southern Command, USSOUTHCOM), Teniente General Frederick F. Woerner dio una especie de Acta de Defunción a la norteamericana Doctrina de la Seguridad Nacional impuesta a las Fuerzas Armadas de América Latina en los años 60 y 70. Al mismo tiempo que proclamó una nueva formulación destinada a guiar la acción de sus subalternos en su área de responsabilidad: la Guerra o Conflicto de Baja Intensidad (Low Intensity Conflict, LIC).

Los militares latinoamericanos en su mayoría, expresó a periodistas de Washington, el 5 de febrero del presente año, "han dejado de ser quienes determinan el proceso político y ocupan un cometido nuevo, el de garantes de las instituciones democráticamente elegidas". Afirmando a continuación que los uniformados, "han sido y siempre serán uno de los principales protagonistas de Latinoamérica, por lo

que considero importante mantener relaciones con ellos" (1), y recomendando que para mantener su influencia los Estados Unidos tendrían que aumentar el número de asesores militares en los países de la región, donde hay más de 70 bases militares, marítimas y aéreas y otros objetivos de Estados Unidos, en los cuales se desplazan más de 22 mil oficiales y soldados yanquis.

Las declaraciones del jefe militar norteamericano pudieran aparecer sorprendentes, y en más de algún sentido, contradictorias con las políticas y prácticas imperiales. Y ese repentino amor proclamado por la democracia, del Pentágono, la Casa Blanca y sus agencias, además de las Fuerzas Armadas subordinadas a su estrategia, es por lo menos sospechoso. Pero lo cierto es que los estratagemas de Washington han tenido que rendirse a la evidencia (¡no sin cierto desencanto!) del fracaso de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional y de los regímenes dictatoriales de rostro militar instalados para defender los intereses políticos, económicos y militares imperialistas en Latinoamérica, considerada como "parte de los fundamentos del poder de Estados Unidos". (2) Nueva forma, más elegante, de llamar al "patio trasero".

La fórmula del terrorismo institucionalizado, de la dirección militar de la sociedad que acompañó la implantación del modelo neo-liberal en lo económico, y destinado a liquidar el movimiento democrático antimperialista, se agotó en su brutalidad. Y pudo ser derrotada por la ciudadanía que recomponiendo sus estructuras sociales, y en lucha decidida por sus derechos conculcados impuso, en distinto grado, la fuerza de sus razones democráticas en países como Brasil, Uruguay y Argentina.

En cuanto a Chile, la mantención de una dictadura cada vez más hostigada y desafiada constituye hoy por hoy un problema serio para el Imperio, tanto desde un punto de vista político como militar. Como lo expresó el politólogo conservador norteamericano Mark Falcoff, el dilema para la política norteamericana es "persuadir a la dictadura militar que devuelva el poder a fuerzas democráticas civiles antes de que el Gobierno pierda del todo el

control sobre la situación, y también, antes de que las alternativas aceptables pierdan toda credibilidad a manos de las fuerzas aliadas a Cuba y la Unión Soviética". (3)

Sin embargo el "cometido nuevo" señalado por el jefe militar norteamericano ni es tan nuevo ni tan democrático. El nuevo diseño preparado para reemplazar el rostro brutal de los regímenes "de la Doctrina" en lo esencial no es más que una reedición de viejas prácticas, una formulación apenas disfrazada de los "cometidos" tradicionales asignados a cada fuerza armada "nativa" en el ámbito de su escenario local, y en cumplimiento, o como componente, de la estrategia global de confrontación imperante en los círculos en el poder en Estados Unidos. ("La guerra y no la paz es la norma que rige los asuntos internacionales"... "Contener a la URSS no es suficiente. La distensión es la muerte". (4)

La proclamación de la hegemonía norteamericana sobre el hemisferio hecha por la doctrina expansionista de Monroe, no por casualidad es proclamada - por el Comité de Santa Fe - como "piedra angular histórica de la política de Estados Unidos sobre América Latina". Siendo permanentes también los objetivos económicos básicos: obtención barata de las materias primas estratégicas - minerales, energéticas y alimenticias -, mercado seguro y abierto para sus productos manufacturados, y en las últimas décadas, para sus especulaciones financieras y obtención de recursos monetarios para sustentar su carrera armamentista y sostener su crisis, vía Deuda Externa. (5)

La traslación al terreno teórico y práctico militar de los objetivos económicos y políticos del imperio es obvia. Siendo el contenido de ambas vertientes, coherente e invariable. Ya la estrategia político-militar de los llamados "padres fundadores" de los Estados Unidos estaba fundada en los siguientes tres postulados esenciales escribe el especialista soviético Guenrii Trofimenko, a saber:

1.- La fuerza militar es el medio básico y resolutivo de regulación de los problemas de política exterior en discusión, es el "árbitro en última instancia".

2.- El factor principal y decisivo de la actividad de política exterior de Estados Unidos, debe ser un "egoísmo ilustrado".

3.- Estados Unidos no es un Estado ordinario, sino excepcional, semejante al cual jamás existió ninguno en el mundo, y por ello le ha sido señalado "el más grande Destino Manifiesto". (6)

Destino predeterminado - lo señalan con toda seriedad los panegiristas del Imperio - por el Ser Supremo, la Divina Providencia. "El Destino Manifiesto" - puntualiza el conocido historiador norteamericano Julius W. Pratt - se convirtió en justificación de casi toda adición de territorio que Estados Unidos tuvo la voluntad y el poder de obtener". Comenzando con el de los indios y siguiendo con México y otros países del continente, para luego convertirlo en "derecho" a intervenir política y militarmente en cualquier latitud donde considerara puesta en peligro su seguridad, y transformada por tanto en "área de sus intereses vitales".

Concepciones posteriores como el "panamericanismo" en el ámbito político-diplomático encontraron su traducción al terreno bélico con las fórmulas de la "defensa hemisférica", que luego se transformaría en "doctrina de seguridad interna", pasando por las diversas fases de la guerra "antisubversiva", en correspondencia a la estrategia de la "guerra fría", y con el correspondiente contenido antisoviético, anticomunista, antipopular y antidemocrático, enfiladas contra el desarrollo de los movimientos liberadores de los pueblos de América Latina.

La permanencia de los objetivos imperiales se constata en el documento presentado por la Casa Blanca al Congreso norteamericano, en enero del presente año, bajo el título de "Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos". En él, aunque tiene que reconocer la nueva situación internacional derivada de la relativa paridad estratégica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y las repercusiones y apoyo internacionales a las constructivas iniciativas soviéticas en pro de la Seguridad y la Paz, se reincide en viejos argumentos y estereotipos: se habla de la "expansión militar" soviética y el consiguiente peligro para la Seguridad de Estados Unidos; se

plantea la inevitabilidad de la continuación de la competencia en el terreno militar; se afirma que las relaciones soviético-norteamericanas mantienen un carácter de confrontación; insistiéndose además en la eternización de los conflictos regionales.

Por lo consiguiente se justifica y promueve el militarismo y la carrera armamentista, y se concibe al mundo como teatro de operaciones del llamado conflicto "Este-Oeste".

Tales objetivos neoglobalistas se traducen en orientaciones concretas para los países en vías de desarrollo. Ante los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN y otras alianzas político-militares regionales - dice el Informe -, se plantea el "garantizar el acceso a mercados extranjeros, a fuentes de energía y de minerales". Autoasignándose el derecho a la injerencia en los asuntos internos de otros países bajo el pretexto tantas veces recurrido de "defender la libertad y la democracia". (7) Al estilo norteamericano, se subentiende.

Partiendo de la concepción demencial y antilatinoamericana, y antihumana, explicitada en el Documento de Santa Fe, y reiterada en broma de pésimo gusto por el Presidente Ronald Reagan, de que la Tercera Guerra ya se ha iniciado, uno de los teóricos del "neoglobalismo", Jack Wheeler, detalló en marzo de 1987, las "cuestiones de la materialización" de la también llamada "Doctrina Reagan".

En su opinión el neoglobalismo imperial incluye, o implica, la lucha contra el "imperio soviético", en sus "periferias", en sus "fronteras", y hasta en su "interior". "Nuestra meta es destruir todo el imperio soviético - proclamó Wheeler -, sólo así se evitará definitivamente la amenaza que emana del mismo". (9) Un parlamento muy al gusto de un Pinochet o un Merino.

Lógicamente para este tipo de "soluciones finales" tan al estilo hitleriano (y que en el siglo nuclear significa el suicidio de la humanidad), no basta el enunciado, por más enfático que sea. Necesariamente hay que tomar en cuenta las realidades. Y esto es lo que explica que a pesar del carácter agresivo intrínseco del imperialismo, se hayan logrado determinados avances en el plano de las relaciones

Estados Unidos-Unión Soviética, la realización de los Encuentros Cumbre Gorbachov-Reagan y los acuerdos en el terreno de la eliminación y/o limitación de armas, así como los avances en la solución de los llamados "conflictos regionales".

Los halcones han tenido que tener en cuenta además los sentimientos y la fuerza de los pueblos - incluido el norteamericano - que se pronuncian activamente por la paz, la seguridad y relaciones normales y civilizadas entre todos los pueblos del mundo, junto a la demanda por solución de problemas globales tan dramáticamente urgentes como el hambre, la salud, la vivienda, la defensa del entorno, el analfabetismo, etc.

Pero esto no significa que el lobo se convierta en oveja. Y lo demuestra cotidianamente ya sea en el Golfo Pérsico, el Líbano, Nicaragua, Panamá, Angola, Namibia, etc.

El "neoglobalismo", Guerra de Baja Intensidad, en su versión regional - señala el periodista Dmitri Volski - "pretende lograr para Estados Unidos el dominio militar, político, espiritual y, a nuestro juicio, sobre todo económico".

En la práctica, agrega Volski, "esto significa lo siguiente: en primer lugar, el monopolio en las tecnologías más modernas; en segundo lugar, el control sobre los más importantes recursos energéticos y minerales, que se hacen cada vez más deficitarios; en tercer lugar, la posibilidad de explotar sin obstáculos las regiones en que las ganancias son jugosas y la mano de obra, barata. En cuarto y último lugar, el derecho a regir los destinos de la humanidad". (10)

Nuestro continente y, en particular, nuestro país, no están ajenos a tales propósitos del Imperio. La historia pasada y el presente así lo constatan.

Veamos como define los objetivos militares (y por lo tanto políticos) el Pro Cónsul imperial norteamericano en una de las llamadas "periferias" del Imperio Soviético, donde, según el Documento de Santa Fe, se desarrollan "refriegas de la tercera fase de la

Tercera Guerra Mundial", es decir nuestra América Latina, Chile incluido, por cierto.

En su informe de 21 carillas - Statement of General Fred F. Woerner Commander in-Chief, US Southern Command. To the House Appropriations Committee Subcommittee on Defense, 4 february 1988, Washington DC -, el alto oficial subraya - en el apartado "The USSOUTHCOM MISSION" - las siete tareas claves de su fuerza, para defender el flanco austral "de su país" y "promover los intereses nacionales de Estados Unidos en América Latina".

Ellas son:

- Mantener la Seguridad de los Estados Unidos y sus accesos australes.
- Apoyar las operaciones de contrainsurgencia en El Salvador y ayudar a otros ejércitos latinoamericanos a combatir la insurgencia, el terrorismo y el narcotráfico.
- Revertir la influencia soviética, cubana y nicaragüense y sus propósitos de desestabilizar los procesos democráticos en América Latina.
- Defender el Canal de Panamá.
- Hacer planes para contingencias en la Región y estar preparados para conducir operaciones en consonancia con los intereses de los Estados Unidos.
- Adelantar los objetivos de la política exterior de Estados Unidos.
- Incrementar la influencia militar de Estados Unidos en la región y fortalecer la cohesión con y entre nuestros aliados.

En el apartado "Strategy Execution" - "ejecución estratégica" - del informe del Teniente General Frederick F. Woerner se abunda en la metodología a aplicar para materializar los objetivos formulados. Luego de detallar sus Fuerzas de Operaciones, subraya que, sin embargo "las más efectivas capacidades de fuerza no se vinculan a la aplicación directa del poderío militar, sino, antes bien, a los sutiles métodos político-militares que

muestren y refuercen el legítimo papel de las Fuerzas Armadas en una democracia".

Luego de dar a conocer a los congresistas norteamericanos una versión aséptica de lo que define como el rol de las FF.AA. de los países latinoamericanos bajo su mando, Woerner anota que, "resultará lejos, menos costoso, afrontar desafíos a nuestros intereses nacionales con asistencia de seguridad diseñada para fortalecer la capacidad de seguridad de naciones huéspedes, tal como lo hicimos en El Salvador, Honduras, Guatemala y Ecuador".

Por supuesto no quiere decir esto que el Comando Sur del Ejército norteamericano se limite sólo a la "asistencia de Seguridad". El General se encarga de esfumar ilusiones. Sus palabras son suficientemente explícitas como para que requieran mayores comentarios:

"Si se requiriera algo más que asistencia de seguridad, entonces podemos aplicar adicionales opciones de fuerzas. Primeramente mucho depende de cuándo entremos en el conflicto. Si nosotros entramos al escenario cuando ya el conflicto armado ha estallado - tal como por cierto lo hicimos en El Salvador - el costo será alto. Si nos vemos envueltos en él tempranamente, esta ventaja por sí sola hará posible que los países huéspedes se protejan a sí mismos contra la violencia armada y el conflicto y el costo a largo plazo para nosotros tendrá una posibilidad de ser menor.

"Tenemos la capacidad de proporcionar un vasto espectro de opciones y a un precio razonable - pregona Woerner -, destacando que: "Resultado importante preparar conjuntos de fuerza planificados con la suficiente antelación para prevenir y afrontar la indeseable elección de la intervención armada a alto costo, o la aceptación de un reflujo de nuestros intereses nacionales y riesgos más altos para proteger los intereses de Estados Unidos". (11) El siniestro diseño formulado por el Cónsul del Imperio para Latinoamérica en su documento del 4 de febrero de 1988, aplica en la región las concepciones militaristas que estructura el pensar y el accionar de los círculos más reaccionarios del poder en Washington: Neoglobalismo, en la escala planetaria y "conflicto de baja intensidad", en un escenario

geográfico donde no exista la probabilidad de entrar en contacto con las fuerzas militares de la Organización del Tratado de Varsovia.

El itinerario de "asistencia de seguridad" (es decir adoctrinamiento, preparación, equipamiento, inteligencia, planificación conjunta y subordinación a objetivos operacionales concretos comandados desde el Southcommand, etc.) hasta llegar a la intervención armada directa de las fuerzas de Despliegue Rápido (preparados "con la suficiente antelación") pasa por las etapas de la acción preventiva antisubversiva, por la Guerra Interna desplegada por la Fuerza Militar del país "huésped", con el apoyo político y militar del imperio a través de aporte logístico y presencia de asesores en las diversas etapas del escalamiento del conflicto. La orientación esbozada por el Pentágono es desplegar la "Guerra Interna" en nombre de la "democracia", para "garantizarla", o lo que es lo mismo "tutelarla", utilizando en las etapas iniciales del combate los recursos y métodos de la guerra psicológica, que es la forma de "hacer política" por parte de los ejércitos vasallos del Imperio, empeñados en las "batallas regionales" de la Guerra total y permanente contra el "Imperio del mal".

A la luz de la experiencia de Vietnam, donde privilegiar la solución militar a través de las armas y las vidas de los norteamericanos - con el consiguiente costo político y moral interno e internacional - y para obtener un resultado lamentable de derrota total, resultó tan ineficaz como traumático, los estrategas norteamericanos llegaron a la conclusión de que en adelante deberían preferir otra fórmula, una que les permitiera conseguir los mismos objetivos de siempre, pero con manos ajenas, en concreto a través de las armas, y las vidas de los ejércitos "locales", adscritos y comprometidos en sus estrategias y propósitos, y con una metodología ("sutiles métodos político-militares") que desarrolle todo el arsenal disponible de las operaciones de "guerra psicológica", operaciones encubiertas, penetración ideológica y política (acción cívica), corrupción. Así pretenden conquistar la "conciencia" de los atropellados pueblos latinoamericanos, o por lo menos neutralizar sus aspiraciones.

La definición de este tipo de guerra como de "baja intensidad" no tiene otro objetivo que disfrazar su verdadero carácter. Según el Coronel John Waghelstein, Consejero Militar en El Salvador y destacado estratega de la Guerra de Baja Intensidad, GBI, el término sólo se relaciona con su lugar en el "espectro de intensidad" del Conflicto, que asciende desde el desorden civil a la guerra convencional, hasta el holocausto nuclear, y describe el nivel de violencia desde el punto de vista militar.

Abundando en las características de esta nueva estrategia de intervención norteamericana en nuestros países, la revista del Centro de Estudios Militares General Carlos Prats, CEMCAP (edición de noviembre de 1988) detalla:

"Esta estrategia es multidimensional, involucra una multiplicidad de prolongada agresión político-diplomática, económica, psicológica e ideológica que está sincronizada con una agresión militar permanente, pero de poca intensidad. "La Guerra de Baja Intensidad", GBI, es a la vez revolucionaria y contrarrevolucionaria", dice Waghelstein, "es guerra total, a un nivel básico, utiliza todas las armas de guerra, incluyendo la política, económica y psicológica, mientras que el aspecto militar ocupa un cuarto lugar, no tan importante en muchos casos". (12)

La GBI incluye operaciones clandestinas, apoyo para campañas contrarrevolucionarias, "golpes contra el terrorismo" y otras misiones militares de bajo nivel. Es en su forma más pura, una guerra político-militar que no conoce fronteras y que hace pocas distinciones entre el personal civil y militar. La ayuda económica y humanitaria son vistas como armas de esta nueva guerra: se borran las diferencias entre papeles de diferentes agencias tales como la AID, "Agencia para el Desarrollo", la CIA, la Agencia de Información Estadounidense USIA y el Pentágono en la estrategia seguida. Las operaciones psicológicas - que pueden definirse a grandes rasgos como: el uso planificado de los medios de comunicación para influir en las actitudes o comportamientos - se usan tanto para preparar el público estadounidense para la intervención de GBI, como para pacificar a las poblaciones del Tercer Mundo, y son el componente esencial de la teoría de la GBI. Siendo continuación (y resultado de la experiencia precisa de Vietnam)

de la guerra de Contrainsurgencia clásica, la GBI incluye mucho de su metodología operacional: acción cívica, coordinación entre las agencias gubernamentales, "pacificación", operaciones especiales, defensa civil interna y asistencia y capacitación militares. Pero una diferencia importante es que la participación en combate de las tropas estadounidenses queda como "último recurso".

Además dentro de la fundamentación teórica profunda de la estrategia del Conflicto de Baja Intensidad, está la conclusión de que la victoria de las fuerzas revolucionarias (lo fue en Vietnam y en Nicaragua, por ejemplo, y es condición como se sabe en cualquier proceso revolucionario auténtico) se derivaba de su estrecha relación con la población. Así los norteamericanos conciben esta nueva forma de hacerle la guerra a los pueblos, buscando la derrota política, en vez de únicamente la derrota militar. De ahí que el objetivo principal de la Guerra o Conflicto de Baja Intensidad sería "ganar el corazón y la mente de la población civil".

También se anota como un aspecto característico de la teoría del GBI la redefinición de lo que se considera la victoria. Ya no es exclusivamente ni sólo la destrucción del enemigo concreto, sino que la victoria se mide en la medida de que se evita cierto fin, o por los cambios de comportamientos logrados en el enemigo, (producto de la neutralización, desestabilización o cercamiento logrado.)

La revista del CEMCAP ya mencionada, anota otras dos citas de militares norteamericanos, considerados como teóricos de la GBI: "Edward Luttwack - quizás el primer teórico de la GBI, dice la publicación - ha descrito claramente sus prioridades: "En la GBI la victoria normalmente se obtiene al alterar las variables políticas hasta un punto en que el enemigo no tiene eficiencia y no al derrotar enemigos reales en una batalla". Junto con poner énfasis en los métodos no militares de poder y persuasión, la GBI prevé un proyecto de guerra a largo plazo. "En la edición de noviembre de 1984 de Military Review - anota la revista del CEMCAP -, los mayores del ejército norteamericano Donald Morelli y Michael Ferguson concluyen: "El Conflicto de Baja Intensidad no es ni sencillo, ni a corto plazo. Es un problema multidimensional, complejo, y de muchos

niveles que tiene sus raíces en el cambio...la iniciativa está con aquellos que pueden influir o hacer explotar ese proceso del cambio".

Comprometer a las Fuerzas Armadas de Chile en este proyecto político-militar contrarrevolucionario, que otorga a los uniformados un "nuevo" rol político bastante parecido al señalado en la Constitución espúrea de 1980, es uno de los objetivos principales del Pentágono y otras agencias norteamericanas que actúan en el país. "Diseño" que también se le vende a algunos sectores políticos del país para hacerlo más aceptable y posible, comprometiéndolos en su implementación política. Aunque se trata de un esfuerzo por evitar el desarrollo democrático del país, su independencia y su desarrollo, que es evidente a todas luces.

Todo lo anterior es lo que está detrás de declaraciones como las formuladas por el embajador de Estados Unidos ante Pinochet, Harry Barnes, cuando señaló en pleno local de la Feria Internacional del Aire, FIDA 88, que su Gobierno piensa que, "Las Fuerzas Armadas chilenas tienen un papel muy importante que cumplir en el futuro democrático del país"...y explicó al mismo tiempo que la presencia de Estados Unidos en la muestra armamentista (por primera vez) era un gesto que perseguía "desarrollar los lazos entre ambos países".

Ante las fuerzas democráticas y revolucionarias chilenas se plantea entonces la patriótica tarea de rechazar y enfrentar esta nueva forma que adopta la permanente agresión imperial. Denunciar y hacer conciencia de los objetivos del Pentágono y de su Comando Sur de desarrollar en nuestro país "refriegas" de la Tercera Guerra Mundial, haciendo pagar el costo en vidas y destrucción a los "nativos", tanto civiles como uniformados.

La recuperación de las Fuerzas Armadas para un proyecto nacional y democrático, que se oponga a la intromisión imperialista, y que desarrolle su pensamiento estratégico y de Seguridad al margen de la locura belicista del Complejo Militar-Industrial imperialista, es una tarea insoslayable política, teórica y práctica, e incluso en el terreno de la formulación militar. Lo mismo que preparar al pueblo contra este enemigo que acecha desde Washington y

desde los socavones del cerro Ancon, Altos de Quarry, frente a Ciudad de Panamá, sede del USSOUTHCOM.

NOTAS.

- (1) Agencia EFE. 6-febrero-1988.
- (2) Documento de Santa Fe. "Una nueva Política Interamericana para los años 80". Mayo 1980.
- (3) "CHILE: Un dilema para la política norteamericana". Por Mark Falcoff. Trabajo presentado al Simposio "Aliados Incómodos: problema de elección y evaluación". Washington, diciembre 1985.
- (4) Documento de Santa Fe.
- (5) Documento de Santa Fe.
- (6) "La Doctrina Militar de Estados Unidos". Por Guenriij Trofimenko. Editorial Progreso, Moscú, 1987.
- (7) Agencia TASS, 21-enero-1988.
- (8) La frase dicha supuestamente en broma por el Presidente Reagan y hecha pública por periodistas fue la siguiente: "Norteamericanos, compatriotas míos. Me alegra poder comunicarles que acabo de firmar el acta legislativa que pone para siempre a Rusia fuera de la ley. El bombardeo comenzará dentro de cinco minutos". Reproducida de "La Biografía del Gran Garrote", de Boris Dmitriev, Editorial de la Agencia de Prensa Novosti, 1987.
- (9) "Neoglobalismo", por Dmitri Volski. Editorial de la Agencia de Prensa Novosti, 1987.
- (10) "Neoglobalismo". Dmitri Volski.
- (11) Agencia Prensa Latina. "La Misión del Comando Sur de Estados Unidos". Especial de Gregorio Selser.
- (12) Revista del CEMCAP (Centro de Estudios Militares General Carlos Prats", Año 1, Nº 1, noviembre 1986.

